**GUÍA PARA EL LECTOR**

El texto a la mano tiene como fin servir como un modelo de demanda de amparo indirecto por violaciones a Derechos Humanos derivados de la no-adopción de energías limpias. El fin de la elaboración y difusión de la misma es facilitar el procedimiento de impugnación para cualquier ciudadano interesado en ampararse en contra de actos de la autoridad que vayan encaminados a la adopción de energías contaminantes o que entorpezcan la integración de las energías limpias en México.

El escrito contiene antecedentes generales de la industria eléctrica en México, preceptos constitucionales vinculados a actos en detrimento de la adopción de energías limpias, así como un marco general de solicitud de suspensión, pruebas, término interés legítimo cuyos detalles deberán ser apropiados al caso concreto.

En el Consejo Nacional de Litigio Estratégico estamos convencidos de que la democratización de la justicia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad civil y que empoderar al ciudadano y facilitar su acceso a la justicia son pasos esenciales para cumplir con esta meta.

**ÍNDICE**

1. [**PROEMIO**](#bookmark=id.pv7d3n5nsc5)
2. [**ANTECEDENTES**](#bookmark=id.8uj3y5nh1s7z)
3. [**PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES QUE CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS**](#bookmark=id.3nlgkqvozutf)
4. [**TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA**](#bookmark=id.xzl0p3b3vrqe)
5. [**INTERÉS LEGÍTIMO**](#bookmark=id.vfx5t39lk88j)
6. [**CUESTIÓN PREVIA**](#bookmark=id.z92hswus1ddi)
7. [**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN**](#bookmark=id.knivjej2kvyx)
   1. [**PRIMERO.** **LOS ACTOS Y LAS OMISIONES RECLAMADAS VIOLAN EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 4° CONSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 11 DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR", ASÍ COMO EN LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE RÍO**](#bookmark=id.5jt94oiok8ix)
   2. [**SEGUNDO. LOS ACTOS RECLAMADOS CAUSAN UNA GRAVE VIOLACIÓN A NUESTRO DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y A LA SALUD EN EL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL Y SON CONTRARIOS A LA PROGRESIVIDAD DEL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO QUE MÉXICO HA ALCANZADO EN BENEFICIO DE SUS CIUDADANOS, EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR NUESTRO PAÍS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE;**](#bookmark=id.o9i865czpgyc)
   3. [**TERCERO. SE VIOLA EN PERJUICIO DE LA PARTE QUEJOSA Y DE LA COLECTIVIDAD EL DERECHO HUMANO A LA AUDIENCIA PREVIA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL Y EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO EL DERECHO A LA CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL**](#bookmark=id.z662ijk60kop)
   4. [**CUARTO. LOS ACTOS RECLAMADOS VIOLAN LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, EN VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE LEGALIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.**](#bookmark=id.ppfrqb5obj6q)
   5. [**QUINTO. LOS ACTOS RECLAMADOS VIOLAN LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL ESTADO MEXICANO DE TRANSITAR A FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS -TRANSICIÓN ENERGÉTICA-**](#bookmark=id.sro7aebdkjof)
   6. [**SEXTO. LOS ACTOS Y OMISIONES SON CONTRARIOS A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y VIOLAN EL DERECHO HUMANO DE LA PARTE QUEJOSA AL ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU VERTIENTE DE POBREZA ENERGÉTICA.**](#bookmark=id.l1xfvqexeo00)
   7. [**SÉPTIMO. LOS ACTOS RECLAMADOS VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y LA NO REGRESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y A LA SALUD.**](#bookmark=id.2o5aorn3362n)
   8. [**OCTAVO. LOS ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA EN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE LA PARTE QUEJOSA**](#bookmark=id.5lnr5pjzp9x7)
   9. [**NOVENO. LOS ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS SON VIOLATORIAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MATERIA DE PORTEO VERDE**](#bookmark=id.bv9vwwaob9c4)
8. [**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN**](#bookmark=id.dbs3beu42g5i)
9. [**SUPLENCIA DE QUEJA**](#bookmark=id.5ovb1342x9la)
10. [**PRUEBAS**](#bookmark=id.hx0e1co9j15h)
11. [**SOLICITUD DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO**](#bookmark=id.gz56gus3dmqq)
12. [**PETITORIOS**](#bookmark=id.knztkg1b8rdy)

**AMPARO INDIRECTO**

**QUEJOSO:** [\*\*\* NOMBRE DEL QUEJOSO/A \*\*\*]

**JUZGADO DE DISTRITO [\*\*\*MATERIA Y ADSCRIPCIÓN DEL JUZGADO\*\*\*], EN TURNO**

**[\*\*\* NOMBRE DEL QUEJOSO/A \*\*\*]**,por mi propio derecho, ciudadano/a mexicano/a en pleno goce de mis derechos civiles y políticos, autorizo en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en derecho [\*\*\*NOMBRE DE LOS ABOGADOS/AS AUTORIZADOS\*\*\*], así como para para oír y recibir toda clase de notificaciones, revisar el expediente, obtener reproducciones o fotografías de las constancias de autos, incluso por medios electrónicos o digitales y recoger todo aquello que por el presente procedimiento deban entregárseme a [\*\*\*NOMBRE DE LOS PASANTES EN DERECHO\*\*\*]; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones [\*\*\*DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES\*\*\*]; con el debido respeto comparezco y expongo:

**V. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS**

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto los hechos y abstenciones relevantes para el presente juicio que me consta y que son antecedentes relevantes para el presente caso:

**[\*ANTECEDENTES DEL CASO\*]**

**VI. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES QUE CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS**

En la presente demanda se acreditará la violación a los derechos fundamentales y garantías reconocidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 6° 7°, 14, 16, 25, 27, 28 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que hace a los principios constitucionales relativos a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la protección de los derechos de los consumidores, el mandato de transición energética para la mejora del mercado en beneficio del usuario final, así como de supremacía constitucional por sí mismo y en relación con los artículos los artículos 1.1, 2, 4.1, 5.1, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 3 y 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el articulado general del del Protocolo de Kyoto, la Enmienda de Doha; el Acuerdo de Paris, los artículos 11 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 11, numeral 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador”.

**VII. TÉRMINO PARA PROMOVER LA PRESENTE DEMANDA**

El acto reclamado aconteció el **[\*FECHA DEL ACTO RECLAMADO\*]**. Así las cosas, el plazo para interponer el juicio de amparo en su contra inició el **[\*FECHA DEL ACTO RECLAMADO\*]**.

De ahí que debe concluirse que la presente demanda de amparo es promovida en debidos tiempo y forma.

**VIII. INTERÉS LEGÍTIMO**

El artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. El artículo constitucional en comento es del tenor siguiente:

*“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:*

*“I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.” […]*

Ahora bien, el artículo 5º de la Ley de Amparo establece que una de las partes en el juicio de amparo es el quejoso, siendo aquel el que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico:

*“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:*

*“I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. […]*

De los artículos citados anteriormente se desprende que tanto el constituyente permanente como el legislador ordinario le atribuyeron consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo.

Al respecto, y a fin de acreditar la legitimación de mi interés para instar la acción de amparo, el Poder Judicial Federal ha establecido en la siguiente tesis los elementos constitutivos que se requieren para promover el juicio de amparo indirecto:

*“****INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.***

***El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo****. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente.* ***Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo.*** *Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.”[[1]](#footnote-0)*

*[Énfasis y subrayado añadidos]*

Ahora bien, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido lo que debe de entenderse por interés legítimo, siendo aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, salud pública, o cualquier otra. Es aplicable al caso concreto la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal:[[2]](#footnote-1)

**INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE**. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Siguiendo este orden de ideas, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y mas amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.

La persona que cuenta con ese interés, se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, siendo que el demandante se encuentra en una posición jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce y el derecho fundamental violado, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal.

En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cobra aplicación al respecto, la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:[[3]](#footnote-2)

**INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).** A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.

De conformidad con las tesis citadas, a fin de que su Señoría concluya que soy titular de un interés legítimo a continuación acredito: *(i)* que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, *(ii)* que los actos reclamados transgredan ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva y *(iii)* que pertenezco a esa colectividad de cuyos derechos se están afectando.

**a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada**

El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

Del contenido de este derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Es aplicable al caso concreto, la siguiente tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:[[4]](#footnote-3)

**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CONTENIDO.** El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Del contenido de este derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Tal mandato vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, quienes deben adoptar, en el marco de sus competencias, todas aquellas medidas necesarias para la protección del ambiente.

En estrecha vinculación con lo anterior, resulta necesario precisar que el núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras. Cobra aplicación al respecto la siguiente tesis aislada:[[5]](#footnote-4)

**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU DIMENSIÓN COLECTIVA Y TUTELA EFECTIVA.** El derecho humano a un medio ambiente sano posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras. No obstante, el reconocimiento de la naturaleza colectiva y difusa de este derecho humano, no debe conducir al debilitamiento de su efectividad y vigencia, ni a la ineficacia de las garantías que se prevén para su protección; por el contrario, conocer y entender esta especial naturaleza debe constituir el medio que permita su tutela efectiva a través de un replanteamiento de la forma de entender y aplicar estas garantías.

En este sentido, resulta indubitable que el derecho a un medio ambiente sano se encuentra tutelado por nuestra Constitución y por un robusto corpus iuris internacional, siendo que el derecho fundamental en cuestión tutela intereses individuales y colectivos en razón de su complejo contenido normativo y obligacional.

**b) Que los actos reclamados transgredan ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva**

El núcleo esencial del derecho fundamental a un medio ambiente sano es de naturaleza compleja, en razón de que engloba un entramado obligacional que alcanza no solo a los entes estatales, sino a todos los ciudadanos en su calidad de beneficiarios de los servicios ambientales.

En estrecha relación con lo anterior, el derecho fundamental a un medio ambiente sano debe ser analizado desde una doble óptica, es decir, como un derecho que a su vez implica un deber, en virtud de que, por una parte, se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, derecho que las autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar y garantizar; y, por otra, el reconocimiento de este derecho fundamental se vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Cobra aplicación al respecto, los siguientes criterios aislados:[[6]](#footnote-5)

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO QUE A SU VEZ IMPLICA UN DEBER.** Del contenido del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", así como del principio 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 y principios 1 y 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, deriva su caracterización como un derecho que a su vez implica un deber, en virtud de que, por una parte, se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, derecho que las autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar y garantizar; y, por otra, el reconocimiento de este derecho fundamental se vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.”

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA. LA OBLIGACIÓN CORRELATIVA DE SU RESPETO NO SÓLO SE DIRIGE A LAS AUTORIDADES, SINO TAMBIÉN A LOS GOBERNADOS.** A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, rige un nuevo marco normativo que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona, al incorporarlo al párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atento a la eficacia horizontal de los derechos humanos, la obligación correlativa de su respeto no sólo se dirige a las autoridades, sino también a los gobernados; tan es así que en 2012 se elevó a rango constitucional el diverso principio de responsabilidad para quien provoque daño o deterioro ambiental; de ahí que la importancia del nuevo sistema de justicia ambiental y su legislación secundaria, que reglamenta la figura de responsabilidad por daño al entorno, es evidente desde la óptica de los derechos humanos, pues no sería posible avanzar a la tutela efectiva de las prerrogativas reconocidas por el Texto Constitucional, sin su aplicación.”

En este orden de ideas, la eficacia en el goce del nivel más alto del mencionado derecho, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados.

Así, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general. Cobra aplicación al respecto, la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito:[[7]](#footnote-6)

**“DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.** La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas.”

Ahora bien, los actos y omisiones reclamados generan una afectación a mi derecho humano a un medio ambiente sano, derivado de la especial situación en que me encuentro frente al orden jurídico, tanto en mi aspecto individual como colectivo (derechos difusos y colectivo *stricto sensu[[8]](#footnote-7)*).

El Poder Judicial Federal ha definido los intereses difusos y colectivos en la siguiente tesis jurisprudencial, que establece textualmente:

“**INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.** En torno a los derechos colectivos la doctrina contemporánea ha conceptualizado, de manera general, al interés supraindividual y, específicamente, a los intereses difusos y colectivos. Así, el primero no debe entenderse como la suma de intereses individuales, sino como su combinación, por ser indivisible, en tanto que debe satisfacer las necesidades colectivas. Por su parte, los intereses **difusos** se relacionan con aquellas situaciones jurídicas no referidas a un individuo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o indeterminable, que están vinculados únicamente por circunstancias de hecho en una situación específica que los hace unificarse para acceder a un derecho que les es común. Mientras que los **colectivos** corresponden a grupos limitados y circunscritos de personas relacionadas entre sí debido a una relación jurídica, con una conexión de bienes afectados debido a una necesidad común y a la existencia de elementos de identificación que permiten delimitar la identidad de la propia colectividad. Sin embargo, sea que se trate de intereses difusos o colectivos, **lo trascendental es que, en ambos, ninguno es titular de un derecho al mismo tiempo, pues todos los miembros del grupo lo tienen**. Ahora, debido a la complejidad para tutelarlos mediante el amparo, dado que se advierte como principal contrariedad la legitimación ad causam, porque pudiera considerarse que rompe con el sistema de protección constitucional que se rige, entre otros, por los principios de agravio personal y directo y relatividad de las sentencias, el Constituyente Permanente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, adicionó un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó la creación de leyes y procedimientos para que los ciudadanos cuenten con nuevos mecanismos de tutela jurisdiccional para la defensa de sus intereses colectivos, sin que se haya expedido el ordenamiento que reglamente las acciones relativas. No obstante, la regulación formal no constituye una condición para determinar la legitimación procesal de los miembros de la colectividad cuando precisan defender al grupo al que pertenecen de un acto autoritario que estiman afecta algún interés supraindividual. **Consecuentemente, todos los miembros de un grupo cuentan con interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto, en tanto que se hace valer un interés común y la decisión del conflicto se traducirá en un beneficio o, en su caso, en un perjuicio para todos y no sólo para quienes impugnaron el acto.”**[[9]](#footnote-8)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Doctrinalmente el derecho o interés difuso se define de la siguiente manera:

“…el derecho o interés difuso, se refiere a un bien que **atañe a todo el mundo**, a personas que en principio **no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, sino que es un bien asumido por los ciudadanos** (pluralidad de sujetos), que **sin vinculo jurídico entre ellos, se ven, lesionados o amenazados de lesión**. Ellos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de persona y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada. **Los daños al ambiente o a los consumidores, por ejemplo, así ocurra en una determinada localidad tienen efectos expansivos que perjudican a los habitantes de grandes sectores del país** y hasta del mundo y responden a la prestación indeterminada de protección al ambiente o de los consumidores.”[[10]](#footnote-9)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Cabe precisar que, acorde con el criterio que ha quedado expuesto en este apartado, para acreditar el interés legítimo en materia ambiental *no* es necesario demostrar el daño al medio ambiente pues, en todo caso, y atendiendo al principio de precaución, el daño o el *riesgo* de daño al medio ambiente, constituirá la materia de fondo del juicio de amparo.

De igual forma, debe puntualizarse que el análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de *fomentar* la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto.

Específicamente, los juzgadores tienen la obligación de hacer una *interpretación amplia* en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, sin que esto rompa el equilibrio antes mencionado; legitimación amplia no es sinónimo de legitimación ilimitada, se reitera, para acreditar el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental es necesario acreditar que quien acude al juicio es beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado.

En el caso que nos ocupa los actos y omisiones reclamados en términos concretos versan sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad de los mismos, que tuvieron como efecto el retroceso en la política de transición energética de energías fósiles a energías renovables, lo que contraviene principalmente el derecho a un medio ambiente sano, la jerarquía normativa y el principio de legalidad por cuanto a la normatividad secundaria en estas materias.

Son aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales:

“**INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS.** El análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente, **los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, lo cual no significa que sea ilimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado**.”[[11]](#footnote-10)

[Énfasis y subrayado añadidos]

“**INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL.** Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. **El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor**. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, **el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado**.”[[12]](#footnote-11)

[Énfasis y subrayado añadidos]

En adición a la violación al derecho humano al medio ambiente sano, los actos reclamados transgreden de manera real y directa mis intereses difusos (1) de manera colectiva, al transgredir los derechos humanos que poseen todos los mexicanos a un medio ambiente sano para el desarrollo, bienestar y a la salud, y, (2) de manera individual, en mi calidad de usuario final, como participante del Mercado Eléctrico Nacional.

Al respecto, resulta aplicable las siguientes tesis:

*“****INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO.***

***De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico.*** *Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente.* ***Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales****, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que* ***basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico****. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo,* ***no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho****. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo,* ***sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta****.”[[13]](#footnote-12)*

***“INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.***

***La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo.*** *No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo,* ***ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante****, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio,* ***el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.*** *Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”*

*[Énfasis y subrayado añadidos]*

Dicho lo anterior, se puede afirmar que la quejosa tiene interés legítimo en virtud de las siguientes conclusiones:

**I)** La Constitución Federal y los Tratados Internacionales en la materia atribuyen un rol activo a los ciudadanos interesados en la defensa y protección del derecho fundamental a un medio ambiente sano.

**II)** El núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión es de naturaleza compleja, por lo que su contenido obligacional alcanza no solo a los entes públicos, sino a cualquier ciudadano beneficiario de los servicios ambientales.

**III)** El efecto horizontal del derecho fundamental en cuestión y el principio de participación ciudadana en las cuestiones medioambientales son suficientes para reconocer la legitimación en la causa de esta parte quejosa.

**IV)** En mi calidad de usuario final, como participante del Mercado Eléctrico Nacional, cuento con interés legítimo para reclamar la inconstitucionalidad de los actos reclamados.

**c) Agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.**

Así pues, cuento con la legitimación de instar la acción de amparo toda vez que, en primer lugar, vengo en defensa de mi derecho a un medio ambiente sano y a la salud- *los cuales me reconoce nuestra Carta Magna*- ya que se ve transgredido por la limitación que establecen los actos reclamados de acceso al Sistema Eléctrico Nacional a las Centrales Eléctricas con fuentes de energías renovables, generando un aumento anormal de las emisiones de CO2 antropogénicas (creadas por la actividad humana), mismas que provienen de la combustión de combustibles fósiles, tales como el petróleo, carbón y gas natural, provocando que la temperatura de la Tierra aumente a niveles por encima de los que, tanto los humanos como todos los seres vivos, podemos aguantar.

De manera que, la situación que acontece es de tal gravedad que -*tal y como se demostrará a lo largo de la presente demanda*- se deriva una problemática de mortalidad tanto de ecosistemas completos como de los seres humanos; lo que parece lógico que es una situación que nos compete a todos y que, todos salimos beneficiados o afectados derivado las omisiones o acciones de las Autoridades Responsables.

Al respecto, sirven las siguientes tesis jurisprudenciales:

***“INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS.***

*El análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente,* ***los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, lo cual no significa que sea ilimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado.”[[14]](#footnote-13)***

*[Énfasis y subrayado añadidos]*

***“INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL****.*

*Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad.* ***El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor.*** *De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental****, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado.” [[15]](#footnote-14)***

*[Énfasis y subrayado añadidos]*

Y, en segunda instancia, me ostento como Participante del Mercado Eléctrico, al ser Usuario Final, y a quien los actos y omisiones de las Autoridades Responsables afectaron mi esfera jurídica, toda vez que limitan el principio de competencia y libre concurrencia, fomentan la creación de un monopolio de Estado y aumentan injustificadamente las tarifas de transmisión a las centrales de generación con fuentes de energía renovable, lo que además genera un efecto inflacionario en los precios por consumo de electricidad.

En este sentido el artículo 3 fracción LVII de la Ley de la Industria Eléctrica, establece que el Usuario Final es la persona física que adquiere, para su consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones el suministro eléctrico en sus Centros de Carga:

*“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: […]*

*LVII. Usuario Final:* ***Persona física*** *o moral* ***que adquiere, para su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones, el Suministro Eléctrico en sus Centros de Carga, como Participante del Mercado o a través de un Suministrador.”***

*[Énfasis y subrayado añadidos]*

En ese sentido, toda vez que cuento con la prueba documental de recibir el suministro eléctrico para mi propio consumo, queda en evidencia que pertenezco a la colectividad de cuyos derechos se están afectando.

Por todo lo anterior, se concluye que cuento con la legitimación de mi interés para instar la acción de amparo indirecto.

**d)** **La anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica de la quejosa, ya sea actual o futuro pero cierto.**

Ahora bien, resulta evidente que la anulación de los actos que se reclaman en el juicio constitucional que nos ocupa constituiría un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica de la quejosa, en razón de que el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la regulación energética impugnada permitiría la urgente continuación de la descarbonización del sector energético en nuestro país, protegiendo de esta manera el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de miles de mexicanos.

En conclusión, la anulación de los actos reclamados constituye un beneficio inmediato en la esfera jurídica de la quejosa, debido a que permitiría la integral protección del derecho fundamental a un medio ambiente sano y desarrollo sustentable.

**IX. CUESTIÓN PREVIA**

**A) Principio de precaución en materia ambiental**

Como se desprende de la narración de los antecedentes de los actos y omisiones reclamados y como se expondrá en el cuerpo de la presente demanda de amparo, y en especial en el capítulo de suspensión, por virtud de los actos y omisiones apuntadas **se generarían impactos adversos, permanentes y significativos sobre la biodiversidad, los servicios ambientales, así como un retroceso generalizado a la política de transición energética y a los compromisos adoptados por el Estado Mexicano en materia de cambio climático, todo ello en perjuicio a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano que me corresponden como la parte quejosa.**

En relación a lo anterior, necesariamente debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas que prevé el **PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN DE DERECHO AMBIENTAL:**

“**PRINCIPIO 15**

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”

El Principio de Precaución de Derecho Ambiental indica que la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces (de acción o abstención) para impedir la degradación de aquél. Haciéndose evidente la violación de los actos reclamados al referido Principio de Precaución de Derecho Ambiental precisamente por no tomar en consideración el daño causado al medio ambiente al limitar la participación de fuentes de energía renovable dentro del Sistema Eléctrico Nacional.

Al respecto, resultan aplicables al caso que nos ocupa los siguientes criterios de nuestros más altos Tribunales:

**“PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN DE DERECHO AMBIENTAL. SU FUNDAMENTO EN LAS OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y ELEMENTOS QUE LE SON PROPIOS.** De los artículos 1o., párrafo tercero y 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Así, con base en una interpretación progresiva de las obligaciones anteriores, en especial las de protección y garantía, el principio de precaución que rige en esa rama del derecho, previsto en **el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas, encuentra fundamento interno; de ahí que cuando haya peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces (de acción o abstención)** en función de los costos, para impedir la degradación de aquél. Por tanto, son elementos de dicho principio: i) la dimensión intertemporal; ii) la falta de certeza científica absoluta del riesgo ambiental; iii) los riesgos tendrán que ser graves e irreversibles; y, iv) la inversión de la carga de la prueba al infractor.”[[16]](#footnote-15)

[Énfasis añadido]

**“MEDIO AMBIENTE. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN Y PRECAUTORIO, APLICABLES A LOS RIESGOS EN ESA MATERIA.** **El principio de prevención conduce a un accionar destinado a evitar o disminuir riesgos ciertos**; hay identificación plena del factor que produce el daño y de éste; en cambio, **el principio precautorio se aplica a los riesgos inciertos, es decir, se desarrolla dentro de un espectro de incertidumbre en cuanto a la existencia** y consecuencias de una conducta o actividad determinada en el medio ambiente, por lo que la elección de las acciones preventivas se lleva a cabo a partir de la evidencia científica existente sobre los posibles impactos de aquélla.”[[17]](#footnote-16)

[Énfasis añadido]

El principio de Precaución en Materia Ambiental obliga a las autoridades mexicanas, dentro de ellas a los jueces de amparo, a dictar cualquier clase de medida dentro de su ámbito de competencia –ya sea el otorgamiento de un amparo y/o el decreto de cualquier medida cautelar− a fin de salvaguardar el medio ambiente para el caso de que exista un riesgo o peligro de que éste sea vulnerado. En la especie, es de suma importancia que se tenga en cuenta el referido principio ambiental a efecto de que no se afecte directa e inmediatamente al medio ambiente.

Así las cosas, resultaría imposible saber a ciencia cierta si el daño que pudiese causar el acto y omisión de autoridad será reversible o no, por lo tanto, el principio referido genera la necesidad de adoptar cualquier medida pertinente a fin de proteger el bien jurídico referido.

En este sentido, es razonable aceptar que la simple puesta en peligro del medio ambiente, a la luz del principio de Precaución en Materia Ambiental, es suficiente para considerar vulnerado el derecho humano a un medio ambiente adecuado contemplado en el artículo 4° constitucional y, por lo tanto, **justifica el otorgamiento de cualquier medida cautelar a fin de conservar la materia del juicio, así como el amparo y protección de la justicia una vez corroboradas las violaciones cometidas por las autoridades responsables.**

**B) Compromisos internacionales del estado mexicano frente al cambio climático**

El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. Su avance amenaza la vida en la Tierra, como la conocemos. En ese contexto, el Estado Mexicano está obligado a adoptar todas y cada una de las medidas susceptibles de combatirlo.

De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable se encuentra contenido en el artículo 4° constitucional, en el que señala que *“****toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar****. El* ***Estado garantizará el respeto a este derecho****. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.*

El mencionado derecho fundamental es caracterizado por poseer una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, pero también cuenta con una dimensión colectiva, ya que se trata de un interés que se debe a generaciones presentes y futuras.

Es por ello por lo que se han establecido diversos mecanismos para combatir dicha problemática que enfrenta hoy en día el mundo entero. En ese sentido, México ha tomado decisiones al respecto, pues derivado de la reforma constitucional en materia energética en el año de 2013, la población se ha beneficiado de las energías renovables, mismas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.

El 12 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó la Iniciativa Presidencial en cuya primera página destacan sus objetivos:

“(…)

(ii) Crecimiento económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos en favor de **mayor inversión y generación de mas empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos**.

(…)

(iv) Seguridad Energética: Se debe aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para **lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético** para ésta y las siguientes generaciones.

(…)

(vi) **Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias**.

(…)”.

[Énfasis añadido]

Los legisladores de la LXII Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Exposición de Motivos”).

“El sector energético de México se encuentra en un momento coyuntural. **Los retos que se presentan en materia de** desarrollo de los hidrocarburos, **abastecimiento de la energía …. y combate al cambio climático son desafíos que rompen con los paradigmas que han dominado hasta ahora el debate nacional**. Estos retos **deben atenderse con premura y con acciones contundentes**, realizando cambios estructurales y de diseño institucional, **a través de una reforma integral que recoge los objetivos que deben estar contemplados en toda política energética moderna: seguridad de suministro, competitividad, sustentabilidad** y viabilidad fiscal. En este sentido, la presente iniciativa abarca tres aspectos: **el petróleo y los hidrocarburos**, el sector eléctrico y un nuevo diseño institucional en materia energética.

(…)

Para lograr lo anterior, el Partido Acción Nacional fiel a sus principios democráticos y con la convicción de ante poner el interés nacional sobre los intereses particulares, propone un paquete de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas fundamentalmente a otorgar al Estado mexicano de los elementos necesarios para aprovechar al máximo todos los recursos con los que el país cuenta, allegarse de nuevas tecnologías, de inversiones productivas, acabar con los monopolios de Estado, **ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones de vida, en un ambiente de libre competencia que detone nuevas fuentes de trabajo y el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes, reduzca el costo de la energía … y consolide nuestra independencia energética**. (…)”.

[Énfasis añadido]

Así, mediante el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía publicado el 20 de diciembre de 2013 en el DOF, se sentaron diversas bases y metas, al tiempo que se impuso como mandato constitucional diversas obligaciones y parámetros rectores para lograrlas, mediante la reforma de los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, así como los artículos transitorios que regulan su implementación y vigencia.

Lo anterior se puede ver materializado en el texto Constitucional:

“**Artículo 25.** **Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable**, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

(…)

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, **para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas**, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

(…)

**Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía,** sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, **cuidando su conservación y el medio ambiente**.

(…)

**TRANSITORIOS**

(…)

**Décimo Séptimo.** Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para **establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos** relacionados con la materia del presente Decreto **en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos**.

**En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes**. (…)”.

[Énfasis y subrayado añadidos]

Por su parte, a nivel nacional el Acuerdo de París adoptado el 12 de diciembre de 2015, y ratificado por el Estado Mexicano el 14 de septiembre de 2016, el Acuerdo de París establece lo siguiente:

“Artículo 2

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, **tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático**, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:

a) **Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC** con respecto a los niveles preindustriales, **y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C** con respecto a los niveles preindustriales, **reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático**;

b) **Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático** y promover la resiliencia al clima **Y UN DESARROLLO CON BAJAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a **un desarrollo** resiliente al clima y **con bajas emisiones de gases de efecto invernadero**.

(…)

**Artículo 6.**

(…)

4. Por el presente se establece un mecanismo para **contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible**, que funcionará bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo y podrá ser utilizado por las Partes a título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano que designará la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, y tendrá por objeto:

a) **Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible**;

b) **Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las entidades públicas y privadas** que cuenten con la autorización de las Partes;

(…)”

[Énfasis y subrayado añadidos]

De esta manera al producirse energía renovable, resulta mucho más benéfico para la sociedad, pues existen, desde luego, ventajas ambientales y económicas. En efecto, una de las grandes ventajas en materia ambiental que destaca dentro de la producción de energía renovable, es en relación con la inagotabilidad del recurso esencial para la producción de energía.

En efecto, contrario a las fuentes tradicionales de energía, como el gas, petróleo, carbón o inclusive energía nuclear, cuyas reservan son temporales, por el contrario, las energías renovables pueden generase de manera natural. Otras de las grandes ventajas ambientales es que estas no emiten gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía, pues esto resulta viable para evitar la degradación ambiental.

**C) El rol del juez en el juicio de amparo ambiental**

Una vez actualizado el interés legítimo con el que cuento, el juzgador, en el análisis de fondo del juicio, enfrenta el reto de tomar una decisión ante la incertidumbre técnica y científica que caracteriza al riesgo y/o al daño ambiental.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió al resolver el AR. 307/2016 que la especial configuración del derecho ambiental exige *un cambio en la lógica jurídica* caracterizado, principalmente, por la flexibilización de diversas instituciones del derecho procesal. La justiciabilidad del derecho humano al medio ambiente no puede desarrollarse a partir de los modelos “clásicos” o “tradicionales” de impartición de justicia, pues en la mayoría de las ocasiones éstos resultan insuficientes y poco idóneos para tal fin.

El rol del juez de amparo en juicios que involucren el derecho humano al medio ambiente debe *evolucionar* con el objeto de encontrar una respuesta más ágil, adecuada y eficaz para protegerlo, sin que esto signifique abandonar las reglas que rigen el proceso de amparo, sino únicamente dotarlas de funcionalidad frente a la especial configuración de este derecho humano.

En efecto, ha quedado expuesto que la protección del derecho humano al medio ambiente está estrechamente ligada al conocimiento científico y/o técnico y esta particularidad dificulta la *defensa ciudadana* del mismo, en tanto los elementos probatorios son de difícil acceso y comprensión y, consecuentemente, implican un costo elevando.

En este sentido, es que esta Sala advierte que en este tipo de controversias se parte de una *situación de desigualdad* (de poder político, técnico, económico), entre la autoridad responsable y el vecino, ciudadano, habitante, poblador, afectado, beneficiario, usuario, consumidor, por lo que para no tornar ilusoria la protección al medio ambiente, y en función del principio de participación ciudadana, se hace necesaria la adopción de medidas que corrijan esta asimetría.

Son dos las herramientas en el proceso con las que cuenta el juzgador para corregir la asimetría a la que se enfrenta el ciudadano en la protección al medio ambiente: a) la reversión de la carga probatoria conforme al principio de precaución; y b) el papel activo del juzgador para allegarse de los medios de prueba necesarios.

En efecto, el juez de amparo en juicios que involucren el derecho humano al medio ambiente debe, en primer término, realizar una *valoración preliminar* sobre la existencia del riesgo de daño o daño al medio ambiente; esta valoración atenderá a un criterio de razonabilidad regido, principalmente, por los principios de precaución e *in dubio pro natura.* El riesgo que se advierta en esta etapa debe ser *cualquiera* susceptible de ocasionar una afectación al ecosistema que se pretende proteger.

Si de esta valoración preliminar el juzgador de amparo advierte que efectivamente se actualiza un riesgo de daño entonces cobrarán vigencia estas dos herramientas procesales con el objeto de allegarse de mayores elementos probatorios para determinar la alegada afectación al medio ambiente:

*Reversión de la carga probatoria conforme al principio de precaución*

Se revertirá la carga probatoria a la autoridad responsable con el objeto de que sea ésta quien acredite que el riesgo de daño al medio ambiente advertido por el juzgador en realidad no existe. Esto, en términos del artículo 8.3 del *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.*

Es importante precisar que esta reversión de la carga probatoria no rompe con el principio de igualdad procesal de las partes, primero, porque el presupuesto para que se actualice parte de un elemento objetivo *(no necesariamente cierto)* que es la generación de un *riesgo ambiental,* y segundo, porque dicha reversión tiene por objeto, justamente, compensar la asimetría existente entre las partes del proceso.

*El papel activo del juzgador para allegarse de los medios de prueba necesarios*

Ante la actualización del riesgo de daño ambiental, el juez adquiere un papel mayormente activo a partir del cual se encuentra facultado para recabar de oficio las pruebas que estime pertinentes a efecto de tener elementos que le permitan conocer, con mayor precisión, el riesgo de daño ambiental, sus causas, así como las posibles repercusiones al ecosistema que se estima vulnerado. Lo anterior resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.[[18]](#footnote-17)

Sobre esta figura cabe precisar que tampoco rompe con el principio de igualdad procesal pues, no sólo busca equilibrar la relación de asimetría entre las partes, sino que, se reitera, el eje central en la protección al medio ambiente gira en torno a su salvaguarda como un bien jurídico en sí mismo, y no sólo en relación a la protección de las partes, lo cual justifica esta labor activa del juzgador.

Se solicita atentamente que se considere lo anterior en todos y cada uno de los conceptos de violación que se desarrollan a continuación, así como al atender el capítulo de suspensión de los actos reclamados.

**X. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.**

**PRIMERO.** **LOS ACTOS Y LAS OMISIONES RECLAMADAS VIOLAN EL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 4° CONSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 11 DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR", ASÍ COMO EN LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE RÍO**

**I.** Es el caso que el derecho humano a un medio ambiente sano encuentra sustento y reconocimiento en los artículos 1°, 4°, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber:

“**Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos **todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte**, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

“**Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia**.

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de **promover, respetar, proteger** y **garantizar** los derechos humanos de conformidad con los principios de **universalidad, interdependencia, indivisibilidad** y **progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá **prevenir, investigar, sancionar** y **reparar** las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(…).”

[Énfasis añadido]

“**Artículo 4o.** (…)

“(…)”

**“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud**. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

**“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.** El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

**“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua** para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 7 la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

[Énfasis añadido]

“**Artículo 27.** (…)

“(…)

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y **el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana**. En consecuencia, **se dictarán las medidas necesarias para ordenar** los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; **para preservar y restaurar el equilibrio ecológico**; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; […] **y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.**”

[Énfasis y subrayado añadidos]

“**Artículo 133.** Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”

Por su parte, en instrumentos internacionales que forman parte del parámetro de regularidad de control constitucional como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador se establecen las medidas que deberán adoptar los Estados parte a fin de asegurar la plena efectividad del derecho al medio ambiente, necesarias para el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente:

**“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**

“**Artículo 12**

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el **derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental**.

“2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

“a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) **El mejoramiento en todos sus aspectos** de la higiene del trabajo y **del medio ambiente**;

“c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

“d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”

[Énfasis y subrayado añadidos]

**“Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”)**

“**Artículo 11**

**“Derecho a un Medio Ambiente Sano**

“1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

“2. Los Estados partes **promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente**.

[Énfasis y subrayado añadidos]

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en la Opinión Consultiva 23/2017[[19]](#footnote-18) que el derecho humano a un medio ambiente deriva de los derechos convencionales a la vida y a la integridad personal previstos en los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte del bloque de control de regularidad constitucional mexicano.

“**Convención Americana sobre Derechos Humanos**

**“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos**

“1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

“(…)

**“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno**

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

“(…)

**“Artículo 4. Derecho a la Vida**

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

“(…)

**“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal**

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete si integridad física, psíquica y moral. “(…)”

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que de los referidos artículos que reconocen el derecho a la vida y a la integridad personal, se desprende la protección convencional al derecho a un medio ambiente sano.

**“CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

**OPINIÓN CONSULTIVA OC-23/17**

**DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017**

**SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS**

**(OBLIGACIONES ESTATALES EN RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL - INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 4.1 Y 5.1, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)**

“(…)

***“A. La interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente***

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros.

“(…)

**“B. Derechos humanos afectados por la degradación del medio ambiente, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano**

“56. En el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano está consagrado expresamente en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador:

“1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

“2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

“57. Adicionalmente, este derecho también debe considerarse incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, debido a que bajo dicha norma se encuentran protegidos aquellos derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA85, en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (en la medida en que ésta última “contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere”) y los que se deriven de una interpretación de la Convención acorde con los criterios establecidos en el artículo 29 de la misma (supra párr. 42). La Corte reitera la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello.

“(…)

“59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.

“60. El Grupo de Trabajo sobre el Protocolo de San Salvador93, ha indicado que el derecho al medio ambiente sano, tal como está previsto en el referido instrumento, conlleva las siguientes cinco obligaciones para los Estados: a) garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; b) garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; c) promover la protección del medio ambiente; d) promover la preservación del medio ambiente, y e) promover el mejoramiento del medio ambiente94. Asimismo, ha establecido que el ejercicio del derecho al medio ambiente sano debe guiarse por los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, común a otros derechos económicos, sociales y culturales. A efectos de analizar los informes de los Estados bajo el Protocolo de San Salvador, en 2014 la Asamblea General de la OEA aprobó ciertos indicadores de progreso para evaluar el estado del medio ambiente en función de: a) las condiciones atmosféricas; b) la calidad y suficiencia de las fuentes hídricas; c) la calidad del aire; d) la calidad del suelo; e) la biodiversidad; f) la producción de residuos contaminantes y manejo de estos; g) los recursos energéticos, y h) el estado de los recursos forestales.

“(…)

“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales.

“63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.

“64. Ahora bien, además del derecho a un medio ambiente sano, como se mencionó previamente, los daños ambientales pueden afectar todos los derechos humanos, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio. Sin embargo, algunos derechos humanos son más susceptibles que otros a determinados tipos de daño ambiental (*supra* párrs. 47 a 55). Los derechos especialmente vinculados al medio ambiente se han clasificado en dos grupos: i) los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente, también identificados como derechos sustantivos (por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud o a la propiedad), y ii) los derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas ambientales, también identificados como derechos de procedimiento (tales como derechos a la libertad de expresión y asociación, a la información, a la participación en la toma de decisiones y a un recurso efectivo).

“(…)

**“OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS DEBERES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL, EN EL CONTEXTO DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

“(…)

***“A. Los derechos a la vida y a la integridad personal en relación con la protección del medio ambiente***

**“A.1 Contenido y alcance de los derechos a la vida y a la integridad personal frente a posibles daños al medio ambiente**

“108. La Corte ha afirmado reiteradamente que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. En virtud de ello, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio. En este sentido, la Corte ha señalado en su jurisprudencia constante que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

“109. Asimismo, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho. En razón de lo anterior, se han presentado circunstancias excepcionales que permiten fundamentar y analizar la violación del artículo 4 de la Convención respecto de personas que no fallecieron como consecuencia de los hechos violatorios. Entre las condiciones necesarias para una vida digna, la Corte se ha referido al acceso y calidad del agua, alimentación y salud, cuyo contenido ya ha sido definido en la jurisprudencia de esta Corte, indicando que estas condiciones impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos. Asimismo, la Corte ha incluido la protección del medio ambiente como una condición para la vida digna.

“110. Entre dichas condiciones cabe destacar que la salud requiere de ciertas precondiciones necesarias para una vida saludable, por lo que se relaciona directamente con el acceso a la alimentación y al agua. Al respecto, la Corte ha señalado que la salud constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por tanto, la contaminación ambiental puede causar afectaciones a la salud.

“111. Por otra parte, el acceso al agua y a la alimentación puede ser afectado por ejemplo, si la contaminación limita la disponibilidad de los mismos en cantidades suficientes o afecta su calidad. Cabe destacar que el acceso al agua incluye el acceso “para uso personal y doméstico” que comprende “el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica”, así como para algunos individuos y grupos también incluirá “recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo”. El acceso al agua, a la alimentación y la salud son obligaciones de realización progresiva, sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizarlos sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización.

“(…)

“114. La Corte advierte que si bien cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito, sentido y alcance propios, existe una estrecha relación entre el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. En este sentido, existen ocasiones en que la falta de acceso a las condiciones que garantizan una vida digna también constituye una violación al derecho a la integridad personal, por ejemplo, en casos vinculados con la salud humana. Asimismo, la Corte ha reconocido que determinados proyectos o intervenciones en el medio ambiente en que se desarrollan las personas, pueden representar un riesgo a la vida y a la integridad personal de las personas. Por tanto, este Tribunal considera pertinente desarrollar de manera conjunta las obligaciones estatales referentes a los derechos a la vida y la integridad personal, que pueden resultar de afectaciones ocasionadas por daños al medio ambiente. Con este propósito, este Tribunal pasa a establecer y reafirmar el contenido y alcance de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos a la vida e integridad personal (infra párrs. 115 a 121), para posteriormente pronunciarse sobre las obligaciones específicas en materia ambiental que se derivan de estas obligaciones generales (infra párrs. 123 a 242), conforme fue consultado por Colombia en su solicitud de opinión consultiva.

**“A.2. Obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal frente a posibles daños al medio ambiente**

“115. Esta Corte ha sostenido que, en aplicación del artículo 1.1 de la Convención, los Estados poseen la obligación *erga omnes* de respetar y garantizar las normas de protección, así como de asegurar la efectividad de los derechos humanos. Al respecto, la Corte recuerda que, de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana, derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.

“116. La Corte expondrá a continuación el contenido y alcance general de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal en relación con afectaciones producidas por daños al medio ambiente. Estas obligaciones deben ser interpretadas tomando en cuenta las obligaciones y principios de derecho ambiental que se exponen en el acápite B siguiente (*infra* párrs. 123 a 242).

“(…)

**“B. Obligaciones estatales frente a posibles daños al medio ambiente, a efectos de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal**

“123. Los Estados están obligados a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Americana con debida diligencia. El concepto general de debida diligencia en el Derecho Internacional es típicamente asociado a la posible responsabilidad de un Estado frente a obligaciones de conducta o comportamiento, en contraste con las obligaciones de resultado que requieren el logro de un objetivo específico. El deber de un Estado de actuar con debida diligencia es un concepto cuyo contenido ha sido determinado por el Derecho Internacional y que ha sido utilizado en diversos ámbitos, tanto en el Derecho Internacional Humanitario, como en el Derecho del Mar y en el Derecho Internacional del Medio Ambiente, entre otros. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el deber de actuar con debida diligencia ha sido abordado en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, respecto de los cuales los Estados se comprometen a adoptar “todas las medidas apropiadas” tendientes a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos correspondientes. Además, como ha resaltado esta Corte, el deber de actuar con debida diligencia también corresponde, de manera general, a la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción, según la cual los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos consagrados en la Convención, así como organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (supra párr. 118).

“124. Sobre la base de este deber de debida diligencia reposan la mayoría de las obligaciones en materia ambiental. La Corte reitera que una protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano, así como para el goce de múltiples derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la integridad personal, la salud y el propio derecho a un medio ambiente sano (*supra* párrs. 47 a 69).

“125. Para el cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, en el contexto de la protección del medio ambiente, los Estados deben cumplir con una serie de obligaciones, tanto para daños ocurridos dentro de su territorio como para daños que traspasen sus fronteras. En el presente acápite se examinará: (A) la obligación de prevención; (B) el principio de precaución; (C) la obligación de cooperación, y (D) las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente, con el propósito de establecer y determinar las obligaciones estatales derivados de la interpretación sistemática de dichas normas junto con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal consagrados en la Convención Americana. Dicho análisis tiene el propósito de responder a la segunda y a la tercera preguntas de Colombia sobre cuáles son las obligaciones ambientales específicas que se derivan del respecto y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal bajo la Convención Americana. Si bien el cumplimiento de estas obligaciones también puede ser necesario para garantizar otros derechos en casos de posibles afectaciones causadas por daños ambientales, en este acápite nos referiremos particularmente a estas obligaciones en relación con la protección de los derechos a la vida y la integridad personal, por ser estos los derechos respecto de los cuales Colombia planteó su consulta (*supra* párrs. 37, 38 y 64 a 69).

“(…)

*“iii) Obligación de requerir y aprobar estudios de impacto ambiental*

“156. La Corte Interamericana hasta el momento solo se ha pronunciado respecto a la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental respeto a actividades desarrolladas en territorio de comunidades indígenas. En este sentido, ha establecido que la realización de estudios de impacto ambiental constituye una de las salvaguardas para garantizar que las restricciones impuestas a las comunidades indígenas o tribales, respecto del derecho a la propiedad sobre sus tierras por la emisión de concesiones dentro de su territorio, no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo. El objetivo de los mismos no es únicamente tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también asegurar que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, con conocimiento y de forma voluntaria.

“157. No obstante, esta Corte advierte que la obligación de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental existe también en relación con cualquier actividad que pueda causar un daño ambiental significativo. Al respecto, la Declaración de Río establece que “[d]eberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”. Esta obligación ha sido además reconocida por la legislación de numerosos Estados miembros de la OEA, incluyendo, Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

“(…)

“160. Sin perjuicio de otras obligaciones que surjan del derecho internacional, esta Corte considera que, al determinarse que una actividad implica un riesgo de daño significativo, es obligatorio la realización de un estudio de impacto ambiental. Dicha determinación inicial, puede hacerse, por ejemplo, mediante un estudio inicial de impacto ambiental o porque la legislación interna o alguna otra norma precise actividades que obligatoriamente requieran la realización de un estudio de impacto ambiental. En cualquier caso, la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental cuando hay riesgo de daño significativo es independiente de si se trate de un proyecto realizado directamente por el Estado o por personas privadas.

“161. La Corte ya ha señalado que los estudios de impacto ambiental deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto. En este sentido, ha señalado ciertas condiciones que deben cumplir dichos estudios de impacto ambiental. Si bien este desarrollo se realizó respecto de actividades a realizarse en territorios de comunidades indígenas, la Corte considera que también son aplicables para todo estudio de impacto ambiental.

“(…)

“174. A efectos de garantizar los derechos a la vida e integridad, los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 127 a 173 de esta Opinión. A efectos de cumplir con esta obligación los Estados deben: (i) regular las actividades que puedan causar un daño significativo al medio ambiente, con el propósito de disminuir el riesgo a los derechos humanos, de conformidad con lo señalado en los párrafos 146 a 151 de esta Opinión; (ii) supervisar y fiscalizar actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente, para lo cual deben poner en práctica mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas, entre los cuales se incluyan tanto medidas preventivas como medidas de sanción y reparación, de conformidad con lo señalado en los párrafos 152 a 155 de esta Opinión; (iii) exigir la realización de un estudio de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente, independientemente que la actividad o proyecto sea realizado por un Estado o por personas privadas. Estos estudios deben realizarse de manera previa, por entidades independientes bajo la supervisión del Estado, abarcar el impacto acumulado, respetar las tradiciones y cultura de pueblos indígenas que podrían verse afectados y su contenido debe ser determinado y precisado mediante legislación o en el marco del proceso de autorización del proyecto, tomando en cuenta la naturaleza y magnitud del proyecto y la posibilidad de impacto que tendría en el medio ambiente, de conformidad con lo señalado en los párrafos 156 a 170 de esta Opinión; (iv) establecer un plan de contingencia, a efecto de disponer de medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales, de conformidad con el párrafo 171 de esta Opinión, y (v) mitigar el daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas del Estado, utilizando la mejor tecnología y ciencia disponible, de conformidad con el párrafo 172 de esta Opinión.”

Es importante mencionar que lo contenido en la referida Opinión Consultiva 23/2017 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye uno de los documentos más recientes y completos respecto al derecho humano a un derecho ambiente abordado desde la perspectiva convencional interamericana de protección a los derechos humanos. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha citado en la resolución de diversos casos contenciosos en materia ambiental.

Si bien es cierto que las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son directamente vinculantes para las autoridades nacionales, también es cierto que forman parte del *corpus iuris* internacional en materia de derecho ambiental, la cual funda sus aseveraciones con base en la interpretación armónica de los artículos 4.1 y 5.1 con relación a los diversos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual sí forma parte del bloque de control de regularidad constitucional de observancia obligatoria para todas las autoridades nacionales.

En esa virtud, es de suma importancia que su Señoría en su papel de Juez Constitucional y garantista de los derechos humanos de los gobernados, tome en cuenta los criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos humanos que subyace del articulado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, en el desarrollo jurisprudencial los tribunales mexicanos han interpretado el derecho humano a un medio ambiente sano como la preservación de la sustentabilidad del entorno ambiental mediante la no afectación ni lesión a éste, estableciendo la obligación del Estado de vigilar, conservar y garantizar la integridad y protección del mismo.

“**DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA.** El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo [4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](about:blank), se desarrolla en dos aspectos: a) en un **poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental**, que implica la **no afectación ni lesión a éste** (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la **obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes** (eficacia vertical).”[[20]](#footnote-19)

[Énfasis añadido]

Conforme a la jurisprudencia anterior, se aprecia claramente que el derecho a un medio ambiente sano se desarrolla en dos aspectos: **(i)** el poder de exigencia y un deber de respecto *erga omnes* a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, y **(ii)** en **la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes**. Lo cual, asimismo, es congruente con el principio de efectividad (*effet utile*) en el sentido de emitir medidas acordes con los tratados internacionales; deabstenerse de emitir medidas contrarias, e incluso de suprimir aquéllas ya emitidas que contravengan los derechos humanos.

De igual forma los tribunales federales han interpretado que las obligaciones consagradas para la protección y preservación del medio ambiente constriñen tanto a autoridades como a particulares, quienes tienen que tomar todas las medidas necesarias para la protección y preservación del medio ambiente.

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CONTENIDO.** El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo [4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](about:blank) y en el ámbito internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. **Del contenido de este derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas**. **Tal mandato vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales**, quienes deben adoptar, en el marco de sus competencias, todas aquellas medidas necesarias para la protección del ambiente.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia interpretó que el paradigma de la protección ambiental rebasa cualquier parámetro de protección de derechos individuales, pues debido a la especial naturaleza que reviste, el derecho humano a un medio ambiente sano implica la protección del medio ambiente *per se,* independientemente del beneficio que ello implique al ser humano.

Esto es, la imperiosa necesidad de protección al medio ambiente radica por un lado en el valor que por sí mismo tiene la naturaleza, así como en los servicios ambientales que la naturaleza concede al ser humano.

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL.** El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pero además **protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma**, lo que implica que **su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos**. En este sentido, este derecho humano se fundamenta en la idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades, incluso, en este contexto, la idea de obligación prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. **El paradigma ambiental se basa en una idea de interacción compleja entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana**.”[[21]](#footnote-20)

[Énfasis y subrayado añadidos]

De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte desarrolló el contenido del derecho humano a un medio ambiente sano en dos aspectos a saber:

**1) Dimensión objetiva o ecologista:** La preservación y protección del medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo, independientemente de la relación que se tenga con otros derechos en favor del ser humano. Esta dimensión protege a la naturaleza y al medio ambiente no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos.

**2) Dimensión subjetiva o antropocéntrica:** La protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona, como salud, vida o integridad personal, así como por los servicios ambientales que la naturaleza concede al ser humano: agua, purificación del aire, alimentación, recreación, etc.

Así las cosas, la Primera Sala de la Suprema Corte interpretó que la violación al derecho humano a un medio ambiente sano se verifica tanto en un aspecto ecologista como antropocentrista, siendo por razón del primero de ellos que se cause una afectación al medio ambiente sin que necesariamente se vulnere otro derecho fundamental conexo o derivado de un servicio ambiental.

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA VULNERACIÓN A CUALQUIERA DE SUS DOS DIMENSIONES CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL.** El derecho humano a un medio ambiente sano posee una doble dimensión, la primera denominada **objetiva** o **ecologista**, **que preserva al medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo, no obstante su interdependencia con otros múltiples derechos humanos**. Esta dimensión **protege a la naturaleza y al medio ambiente no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas**, como la salud, la vida o la integridad personal, **sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos**. La segunda dimensión, la **subjetiva** o **antropocéntrica**, es aquella conforme a la cual **la protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona**, por lo que la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho humano al medio ambiente, sin que sea necesaria la afectación de otro derecho fundamental.”[[22]](#footnote-21)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Asimismo, se ha interpretado que el Constituyente ha dotado de especial importancia la protección al medio ambiente como de “interés social”, debido a la gran relevancia de la materia *per se* y con relación a la correlación con diversos derechos del ser humano.

“**MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. CONCEPTO, REGULACIÓN Y CONCRECIÓN DE ESA GARANTÍA.** El artículo [4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](about:blank), adicionado el 28 de junio de 1999, consagra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional está regulada directamente por la Carta Magna, dada la gran relevancia que tiene esta materia. En este sentido, **la protección del medio ambiente y los recursos naturales es de tal importancia que significa el "interés social" de la sociedad mexicana e implica y justifica**, en cuanto resulten indisponibles, **restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés, precisa y puntualmente, en las leyes que establecen el orden público**. Es así, que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-136-ECOL-2002, protección ambiental-especificaciones para la conservación de mamíferos marinos en cautiverio, en sus puntos 5.8.7 y 5.8.7.1, prohíbe la exhibición temporal o itinerante de los cetáceos. Ahora bien, de los artículos 4o., párrafo cuarto, [25, párrafo sexto y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal](about:blank), interpretados de manera sistemática, causal teleológica y por principios, se advierte que protegen el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, el adecuado uso y explotación de los recursos naturales, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. **La protección de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, así como la necesidad de proteger los recursos naturales y la preservación y restauración del equilibrio ecológico son principios fundamentales que buscó proteger el Constituyente** y, si bien, éste no define de manera concreta y específica cómo es que ha de darse dicha protección, precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación sistemática, coordinada y complementaria de los ordenamientos que tiendan a encontrar, desentrañar y promover los principios y valores fundamentales que inspiraron al Poder Reformador.”[[23]](#footnote-22)

[Énfasis añadido]

El derecho a un medio ambiente adecuado se incorporó a la Constitución mediante reforma al artículo 4°, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999. En dicha reforma se señaló que el derecho a un medio ambiente sano comprende el reconocimiento a vivir en un ambiente sano y equilibrado, así como la posibilidad de defensa del entorno mediante el acceso de las personas a diversos mecanismos de defensa, reconocidos por nuestro sistema jurídico.

El derecho a un medio ambiente sano, cuyo objeto último es asegurar la dignidad de las personas, es un derecho que manifiesta un ideal y una serie de finalidades que la humanidad (consciente ya de los riesgos que para su existencia supone el deterioro del ambiente) se ha propuesto alcanzar. Entre los que debemos ubicar es el de alcanzar un modelo de desarrollo que sea capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades materiales de la población, de una manera equitativa e incluyente, sin comprometer la posibilidad de satisfacer de igual manera las necesidades de las generaciones futuras.

En este sentido, debemos tomar en cuenta que el medio ambiente es el conjunto formado por todos los recursos naturales (**tierra**, **flora** y **fauna**, **atmósfera**, **aguas** y **suelos**), por cuya utilización racional (defensa y restauración) deben velar los poderes públicos, con la finalidad principal de proteger y mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la persona.

El reconocimiento del derecho al medio ambiente en el artículo 4°, quinto párrafo, de la Constitución implica la obligación de toda autoridad para proteger y, la correlativa obligación de los particulares de observar, las normas que tienden a respetar el medio ambiente, procurando emitir regulación adecuada y fomentar el cumplimiento de las normas y dispositivos legales y constitucionales para conseguir dichos objetivos.

En efecto, debe tomarse en cuenta que el Derecho Fundamental consagrado en el quinto párrafo del artículo 4o. constitucional tiene dos dimensiones: una individual y otra colectiva y ambas deben ser protegidas por la autoridad, además que para su cumplimiento se debe permitir su defensa ante los tribunales judiciales, pues así lo ordena el artículo 17 constitucional.

En el caso particular, se pretender tutelar y hacer efectiva la protección prevista tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como las leyes federales que se ajustan a aquéllos, específicamente en materia de protección al medio ambiente.

Ahora bien, la protección del medio ambiente es un objetivo legítimo en tanto que la Constitución prevé, en su artículo 4°, párrafo quinto, el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y la obligación del Estado de garantizar el respeto a este derecho.

En virtud de lo anterior, es claro que la protección del medio ambiente mediante el respeto de los ecosistemas constituye un objetivo legítimo del Estado Mexicano para establecer límites a los asentamientos humanos y limitar los usos de suelo; máxime si la protección a las áreas naturales o a los ecosistemas con alta diversidad de especies tanto animales como vegetales implica la tutela del derecho al medio ambiente sano como derecho humano de todas las personas. Lo cual significa, que **el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado se encuentra por encima de los intereses comerciales y económicos**.

Es el caso que el goce del derecho humano a un medio ambiente sano implica obligaciones tanto para el estado como para los gobernados, pues es tal su grado de importancia que su preservación y protección compete a todos los integrantes de la sociedad. Así lo interpretaron nuestros tribunales:

“**DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.** La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad **no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los particulares**, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, **el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales**, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas.”[[24]](#footnote-23)

[Énfasis añadido]

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA. LA OBLIGACIÓN CORRELATIVA DE SU RESPETO NO SÓLO SE DIRIGE A LAS AUTORIDADES, SINO TAMBIÉN A LOS GOBERNADOS.** A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999, rige un nuevo marco normativo que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona, al incorporarlo al [párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](about:blank). En consecuencia, atento a la eficacia horizontal de los derechos humanos, **la obligación correlativa de su respeto no sólo se dirige a las autoridades, sino también a los gobernados**; tan es así que en 2012 se elevó a rango constitucional el diverso principio de responsabilidad para quien provoque daño o deterioro ambiental; de ahí que la importancia del nuevo sistema de justicia ambiental y su legislación secundaria, que reglamenta la figura de responsabilidad por daño al entorno, es evidente desde la óptica de los derechos humanos, pues no sería posible avanzar a la tutela efectiva de las prerrogativas reconocidas por el Texto Constitucional, sin su aplicación.”[[25]](#footnote-24)

[Énfasis añadido]

Como todo derecho humano, el ejercicio y goce del derecho a un medio ambiente adecuado implica correlativas obligaciones positivas y negativas por parte de las autoridades y gobernados. Las obligaciones positivas implican un actuar proactivo de las autoridades y gobernados de realizar acciones tendientes a la protección y preservación del medio ambiente, y, por otro lado, las obligaciones negativas implican que tanto autoridades como gobernados se abstengan de realizar acciones o conductas impliquen un daño al medio ambiente.

Las obligaciones positivas del Estado frente al derecho humano a un medio ambiente sano implican que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tomen las medidas positivas tendientes a proteger el medio ambiente contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en peligro. En efecto, el deber del Estado de ofrecer protección contra los abusos cometidos por agentes no estatales, forma parte del fundamento mismo del régimen internacional de derechos humanos y, dicho deber, exige que el Estado asuma una función esencial de regulación y arbitraje de las conductas de los particulares que afecten indebidamente el medio ambiente, por ejemplo, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.

Sobre esa base, se concluye que el Estado mexicano tiene el deber de proteger a las personas no sólo mediante una legislación ambiental adecuada y aplicada de manera efectiva, sino también ofreciendo protección contra posibles actuaciones nocivas de agentes privados, pues permitir que terceros puedan incidir de manera desmedida en el medio ambiente, no se encuentra a la altura de la conducta mínima esperada de un gobierno.

Resulta aplicable es siguiente criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR LAS MEDIDAS POSITIVAS TENDIENTES A PROTEGERLO CONTRA ACTOS DE AGENTES NO ESTATALES.** El derecho humano referido no se agota con el simple mandato de que las autoridades estatales se abstengan de afectar indebidamente el ambiente -deber de "respetar"-, sino que **conlleva también la diversa obligación de tomar todas las medidas positivas tendientes a protegerlo contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en peligro** -deber de "proteger"-. En efecto, el deber del Estado de ofrecer protección contra los abusos cometidos por agentes no estatales, forma parte del fundamento mismo del régimen internacional de derechos humanos, y dicho deber exige que **el Estado asuma una función esencial de regulación y arbitraje de las conductas de los particulares que afecten indebidamente el medio ambiente, por ejemplo, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia**. Sobre esa base, se concluye que el Estado mexicano tiene el deber de proteger a las personas no sólo mediante una legislación ambiental adecuada y aplicada de manera efectiva, sino también **ofreciendo protección contra posibles actuaciones nocivas de agentes privados**, pues permitir que terceros puedan incidir de manera desmedida en el medio ambiente, no se encuentra a la altura de la conducta mínima esperada de un gobierno.”[[26]](#footnote-25)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Así las cosas, el Estado tiene la obligación de vigilar estrictamente el debido respeto, protección y preservación del medio ambiente sano no sólo mediante la emisión de leyes de protección ambiental e instrumentación de políticas públicas, sino también mediante la vigilancia del actuar de los particulares y, en su caso, la sanción restitutoria de los daños causados por ellos.

En efecto, debido a la especial trascendencia e importancia de la preservación ambiental como interés social y común, cobra especial relevancia que el Estado sancione el actuar de los particulares que atenten contra el derecho a un medio ambiente sano, buscando siempre medidas de restitución o reparación de los daños causados. Como se expone en el siguiente criterio jurisprudencial:

“**MEDIO AMBIENTE. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTÁ PROTEGIDO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL, POR LO QUE LAS AUTORIDADES DEBEN SANCIONAR CUALQUIER INFRACCIÓN, CONDUCTA U OMISIÓN EN SU CONTRA**. De los artículos 1 y 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", así como el 4o., quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que **la protección al medio ambiente es de tal importancia al interés social que implica y justifica, en cuanto resulten disponibles, restricciones para preservar y mantener ese interés en las leyes que establecen el orden público**; tan es así, que en el Estado de Michoacán, la Ley Ambiental y de Protección al Patrimonio Natural del Estado, su reglamento y el Programa de monitoreo a vehículos ostensiblemente contaminantes del Estado para el año 2011, están encaminados a salvaguardar dicho derecho fundamental, proteger el ambiente, conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo sustentable del Estado y establecer las bases para -entre otros casos- **tutelar en el ámbito de la jurisdicción estatal, el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo y conservar el patrimonio natural de la sociedad**. Por tanto, **el derecho particular debe ceder al interés de la sociedad a tener un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental las autoridades deben velar, para que cualquier infracción, conducta u omisión que atente contra dicho derecho sea sancionada**.”[[27]](#footnote-26)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Del anterior criterio se desprende que la protección al medio ambiente como derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, es de tal importancia para el interés social que justifica las restricciones para preservar y mantener dicho interés y en todo momento, oponerse al interés particular sea de una persona física o de una empresa por más ingresos que pudieran generar.

Ahora bien, derivado de una interpretación armónica de los artículos 1° −que establece la obligación genérica de todas la as autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos− y 4° −que establece el derecho humano a un medio ambiente sano− de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos afirmar que **por cuanto al papel garantista de los juzgadores federales frente al derecho humano a un medio ambiente sano les corresponde realizar un escrutinio estricto de la constitucionalidad y legalidad de los actos y omisiones de las autoridades que conlleven un menoscabo a tal derecho**.

Al respecto es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial:

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. FINALIDAD DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL ESTATUIRLO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES NACIONALES DE LA CONFORMIDAD DE LOS ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD CON SU PLENA REALIZACIÓN.** El artículo [4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](about:blank) prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, a su vez, garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de protegerlo, por lo que sus agentes deben asegurar su respeto y determinar consecuencias para quien provoque su deterioro, como medidas eficaces para su restauración. En estas condiciones, **la intención del Constituyente Permanente, al estatuir el derecho humano mencionado, no se limitó a enunciar una norma programática, sino que se proyectó con plena eficacia, en un mandato concreto para la autoridad, cuya innegable fuerza jurídica la vincula a preservar y conservar el medio ambiente**, **lo cual permite que los tribunales nacionales puedan revisar si, efectivamente, las acciones u omisiones de aquélla resultan conformes con la plena realización del derecho humano aludido, a fin de garantizar a la población su desarrollo y bienestar**. Así, la protección al medio ambiente así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico, son principios fundamentales que buscó tutelar el Constituyente, y si bien no determinó, concreta y específicamente, cómo debe darse dicha protección, precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación acorde con los principios que lo inspiraron.”[[28]](#footnote-27)

[Énfasis y subrayado añadidos]

En ese sentido, toma especial relevancia el papel de los jueces constitucionales en el escrutinio estricto de la constitucionalidad y legalidad de los actos y omisiones de autoridad que pudieren ingerir negativamente en la protección *per se* del medio ambiente y el goce del derecho humano a un medio ambiente sano por parte de los particulares.

Así las cosas, queda más que claro que las autoridades tienen injerencia directa sobre la garantía del derecho a un medio ambiente sano. Tal obligación subyace del artículo 1º Constitucional que establece la obligación de todas las autoridades de respetar, promover y proteger los derechos humanos, esto incluye a las autoridades federales, municipales y estatales, quienes en el ámbito de sus competencias tienen el deber de velar por el cuidado y preservación del medio ambiente *per se* y con relación al derecho humano a un medio ambiente adecuado.

**II.** Ahora bien, tradicionalmente los derechos fundamentales se han clasificado en los denominados Derechos Civiles y Políticos (Primera Generación), Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Segunda Generación) y Derechos Colectivos y de la Solidaridad de los Pueblos (Tercera Generación).

Los primeros, también denominados Derechos Fundamentales (*stricto sensu*) se caracterizan por ser derechos completamente inherentes a la dignidad y calidad de ser humano, se predican particularmente respecto a la libertad e igualdad que tenemos los seres humanos en los diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo: libertad política, religiosa, de profesión u oficio, legalidad, igualdad de trato frente a las autoridades, igualdad de oportunidades, entre otros.

En un inicio se estableció que estos derechos no requerían de un recurso procesal para su efectiva realización, aseveración que ha sido ampliamente cuestionada y debatida, llegando hoy a la conclusión de que al igual que los otros tipos de derechos, los derechos fundamentales también requieren de recursos procesales o garantías frente a la autoridad para lograr su **efectiva protección** en la medida en que por ejemplo para el debido ejercicio de la libertad de profesión u oficio el Estado deberá invertir recursos en las universidades públicas para ofrecer a las personas la posibilidad de estudiar y formarse en lo que ellas deseen y consideren conveniente, de no ser así, sólo las personas con acceso a recursos económicos podrían acceder a la educación y hacer valer dicho derecho.

Esta primera categoría surgió y fue consecuencia de los avances sociales de la guerra de independencia de los Estados Unidos de América y de la revolución francesa, y su contenido se centra en establecer límites al poder del Estado, proteger la libertad de los ciudadanos y establecer mecanismos de participación ciudadana efectivos y en cuanto a su protección mediante un recurso procesal, nuestro país fue innovador al establecer desde la Constitución de 1857, el juicio de amparo como medida de protección y garantía (en el sentido estricto del término) de los derechos fundamentales.

Como ejemplo de esta primera categoría de derechos encontramos el derecho a la vida, el derecho al voto, el derecho de legalidad, el derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad religiosa, entre otros.

Una segunda categoría de derechos es la de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) caracterizados por surgir a partir de las reivindicaciones propias del movimiento socialista; estos derechos, mediante los cuales se debe garantizar a todas las personas unas condiciones mínimas que hagan posible su vida y convivencia en sociedad de manera digna. Entre ellos encontramos el derecho a la educación, a la vivienda y a la recreación, entre otros.

Finalmente encontramos los derechos de tercera generación, también conocidos como Derechos Colectivos y de Solidaridad de los Pueblos, éstos son los más recientes y empezaron a ser concebidos alrededor de la década de 1980. El titular de estos derechos es la sociedad en general y buscan proteger y preservar los derechos de la colectividad como tal. Dentro de estos derechos encontramos el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a la salud, entre otros.

La característica principal de estos derechos consiste en que **su protección beneficia a la colectividad a la cual se encuentran dirigidos y, por el contrario, la afectación a los mismos genera un daño generalizado**. En cuanto a su protección, México dio un gran avance con las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos del 6 y 10 de junio de 2011, al ampliar el ámbito de protección mediante la permisión de impugnar los actos de autoridad que contravengan estos derechos.

Como se expuso anteriormente, por la especial naturaleza del derecho humano a un medio ambiente sano con relación al valor intrínseco que reviste la naturaleza como objeto de protección, así como por los servicios ambientales que ésta presta al ser humano su protección es de interés colectivo.

**Dicha situación guarda una estrecha relación con el principio de efectividad de los derechos humanos (*effet utile*) en su vertiente procesal**.

Lo anterior, se puede evidenciar de la exposición de motivos a la iniciativa de reforma constitucional en materia de amparo, que señala a la letra, lo siguiente:

“**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

“(…)

“**1.- Juicio de Amparo.**

“**La Constitución de 1917 no es solamente un catálogo de derechos relacionados con la libertad y la propiedad del ciudadano** —los denominados derechos humanos de primera generación—, **sino que consagra también un núcleo de importantes derechos sociales —derechos de segunda y tercera generación—, que deben contar con las mismas garantías y mecanismos para hacerlos efectivos**.

“**Es importante resaltar que uno de los cambios más importantes que se proponen en esta iniciativa es el relativo al objeto de protección del juicio de amparo**. Hasta hoy, como es evidente, el mismo se ha limitado a las denominadas garantías individuales que, básicamente, quedaron establecidas desde la Constitución de 1857 y fueron repetidas, en lo sustancial, en la de 1917. La extensión del juicio de amparo se ha dado, ante todo, por las interpretaciones que se dan a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a las reinterpretaciones a ciertos preceptos de la Constitución. **Se pretende en consecuencia, afines a la lógica internacional que ha extendido el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas, ampliar el marco de protección de ese proceso extendiendo la materia del control**.

“**La solución que se propone es en el sentido de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado mexicano**.

“(…)

“**En ese mismo sentido y por lo que se refiere a los derechos económicos sociales y culturales reconocidos en la Constitución y en los mencionados instrumentos internacionales, debe precisarse que el reconocimiento y tutela que se haga de ellos, implica la necesidad de modificar nuestro entendimiento de tales derechos como normas programáticas, que en la práctica han sido vistas simplemente como directrices abiertas para el Estado y no como derechos exigibles de manera individual o colectiva**.

“**Es a través de los derechos económicos, sociales y culturales, como el Estado de Derecho evoluciona hacia un Estado Social de Derecho, en el que los derechos de segunda y tercera generación son entendidos como normas con plena eficacia jurídica que deben contar con garantías adecuadas para su protección**.

“(…)

“**Otro aspecto que vale la pena destacar es el mandato constitucional dirigido a los tribunales de amparo en el sentido de que éstos deben tomar en cuenta los criterios emitidos por los órganos internacionales y regionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano forme parte, con la salvedad de que ello no contradiga las disposiciones de nuestra Carta Magna y redunde en una ampliación de su ámbito protector**, lo cual evidentemente enriquecerá el contenido, sentido y alcance de los derechos sociales en el ámbito nacional.

“**Lo anterior adquiere especial significación en lo que se refiere a la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales**, y el papel que los juzgadores de amparo tendrán para maximizar su efectividad jurídica respecto de los gobernados.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Lo anterior también ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente a agosto de 2011, página 31:

**“DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.** Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. **Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales**.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

El anterior criterio reitera lo señalado por la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de amparo del año 2011, en el sentido que los derechos fundamentales de segunda y tercera generación, ya no son considerados como meras declaraciones de intenciones, sino que el Estado se encuentra obligado a través de sus distintos órdenes de gobiernos a implementar medidas gubernamentales y administrativas para desarrollar el derecho fundamental y, por su parte, el Poder Judicial tiene la facultad de determinar que estas acciones de los poderes ejecutivo y legislativo sean acordes con los derechos establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

Ahora bien, una vez explicadas las categorías de derechos consagrados en nuestra Constitución y sus garantías, se puede afirmar que el derecho humano a un medio ambiente sano, se encuentran dentro de la tercera categoría de derechos.

De esa condición se deriva que el titular del derecho y la protección y garantía está radicada en la sociedad como tal y no en un individuo particular, por lo que, conforme a criterios recientes del Poder Judicial de la Federación **cualquier persona que se encuentre dentro de dicha colectividad se encuentra legitimada para promover la demanda de amparo y por su propia naturaleza como excepción al principio de relatividad de sentencias los efectos de dicho juicio de amparo sean extensibles en beneficio para la sociedad.**

Lo anterior tiene sustento en los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, el primero de ellos visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Pág. 2136:

**“INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.** En torno a los derechos colectivos la doctrina contemporánea ha conceptualizado, de manera general, al interés supraindividual y, específicamente, a los intereses difusos y colectivos. Así, el primero no debe entenderse como la suma de intereses individuales, sino como su combinación, por ser indivisible, en tanto que debe satisfacer las necesidades colectivas. Por su parte, los intereses difusos se relacionan con aquellas situaciones jurídicas no referidas a un individuo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o indeterminable, que están vinculados únicamente por circunstancias de hecho en una situación específica que los hace unificarse para acceder a un derecho que les es común. Mientras que los colectivos corresponden a grupos limitados y circunscritos de personas relacionadas entre sí debido a una relación jurídica, con una conexión de bienes afectados debido a una necesidad común y a la existencia de elementos de identificación que permiten delimitar la identidad de la propia colectividad. **Sin embargo, sea que se trate de intereses difusos o colectivos, lo trascendental es que, en ambos, ninguno es titular de un derecho al mismo tiempo, pues todos los miembros del grupo lo tienen**. Ahora, debido a la complejidad para tutelarlos mediante el amparo, dado que se advierte como principal contrariedad la legitimación ad causam, porque pudiera considerarse que rompe con el sistema de protección constitucional que se rige, entre otros, por los principios de agravio personal y directo y relatividad de las sentencias, el Constituyente Permanente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, adicionó un [párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](about:blank) y ordenó la creación de leyes y procedimientos para que los ciudadanos cuenten con nuevos mecanismos de tutela jurisdiccional para la defensa de sus intereses colectivos, sin que se haya expedido el ordenamiento que reglamente las acciones relativas. No obstante, la regulación formal no constituye una condición para determinar la legitimación procesal de los miembros de la colectividad cuando precisan defender al grupo al que pertenecen de un acto autoritario que estiman afecta algún interés supraindividual. **Consecuentemente, todos los miembros de un grupo cuentan con interés legítimo para promover el juicio de garantías indirecto, en tanto que se hace valer un interés común y la decisión del conflicto se traducirá en un beneficio o, en su caso, en un perjuicio para todos y no sólo para quienes impugnaron el acto**.

[Énfasis y subrayado añadidos]

Del criterio anterior, se desprende que al contar todos los miembros de un grupo con interés legítimo para promover el juicio de amparo en tanto que se hace valer un interés común, **cualquiera de ellos cuenta con la legitimación activa para promover la demanda en beneficio de la colectividad y, por consecuencia, que el beneficio o, en su caso, el perjuicio es extensible para la colectividad y no sólo para quienes impugnaron el acto**.

**III.** Ahora bien, los acuerdos reclamados resultan inconstitucionales e inconvencionales pues con su emisión y aplicación se afecta directamente el derecho fundamental al **medio ambiente sano y a la salud de todas las personas**.

Como se expone en los demás conceptos de violación, los acuerdos reclamados obstruyen la **transición energética** a la que el Estado mexicano está obligado dada la urgencia de descarbonizar el Sistema Eléctrico Nacional, con las metas y mediante los instrumentos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y en el Convenio de París, pero también se violenta en sí mismo **el derecho fundamental de todas las personas a un medio ambiente sano**, en la medida en la que se evitará injustificadamente la participación en el mercado de los agentes que utilizan energías renovables, lo que terminará produciendo un inminente incremento en la cantidad de emisiones que contribuyen a la contaminación atmosférica y al cambio climático.

Por su importancia, el derecho a un medio ambiente sano se traduce en una obligación positiva a cargo del Estado, quien adquiere el deber de garantizar su ejercicio pleno y, en estricto apego al principio de progresividad, no puede limitarlo en forma alguna.

“**DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. FINALIDAD DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL ESTATUIRLO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES NACIONALES DE LA CONFORMIDAD DE LOS ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD CON SU PLENA REALIZACIÓN**. El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, a su vez, garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de protegerlo, por lo que sus agentes deben asegurar su respeto y determinar consecuencias para quien provoque su deterioro, como medidas eficaces para su restauración. En estas condiciones, la intención del Constituyente Permanente, al estatuir el derecho humano mencionado, no se limitó a enunciar una norma programática, sino que se proyectó con plena eficacia, en un mandato concreto para la autoridad, cuya innegable fuerza jurídica la vincula a preservar y conservar el medio ambiente, lo cual permite que los tribunales nacionales puedan revisar si, efectivamente, las acciones u omisiones de aquélla resultan conformes con la plena realización del derecho humano aludido, a fin de garantizar a la población su desarrollo y bienestar. Así, la protección al medio ambiente así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico, son principios fundamentales que buscó tutelar el Constituyente, y si bien no determinó, concreta y específicamente, cómo debe darse dicha protección, precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación acorde con los principios que lo inspiraron”[[29]](#footnote-28).

El artículo 4° de la Constitución y los tratados internacionales en materia ambiental de los que el Estado mexicano, reconocen el derecho fundamental a la salud y a un medio ambiente sano, como un mandato vinculante y concreto para la autoridad y no como una mera norma programática.

Lo anterior implica, que para dar cumplimiento pleno al contenido esencial del derecho fundamental a un medio ambiente sano se debe partir de su progresividad, por lo que al impedir o afectar la operación de centrales eléctricas de fuentes de energía renovable incide en la vulneración del mencionado derecho, pues no se siguen las metas y objetivos necesarios para la mitigación del cambio climático.

Así, la modificación contenida en el acuerdo reclamado transgrede en forma directa el derecho fundamental de la quejosa y se constituye como una regresión a derechos fundamentales. Si el Estado no promueve la generación de energías limpias y, además, distorsiona los instrumentos jurídicos creados para generar esas energías, entonces sus actos son directamente violatorios del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El cuidado al ambiente no ha sido reconocido solamente en el orden jurídico nacional, **sino en múltiples tratados internacionales de los que México es parte**. En ese sentido, la falta de protección al ambiente es además contraria a los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha asumido en los siguientes instrumentos:

“I**. Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático**[[30]](#footnote-29).

(…)

Artículo 3

PRINCIPIOS

Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:

1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.

(…)

3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas.

Artículo 4

COMPROMISOS

1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán:

b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático;

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;

(…)

f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él; (…)”

“**II. Protocolo de Kyoto[[31]](#footnote-30).**

(…)

Artículo 2

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:

a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:

i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional;

ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;

iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático;

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;

v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;

viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el transporte y la distribución de energía;

b) Cooperará con otras Partes del anexo I para fomentar la eficacia individual y global de las políticas y medidas que se adopten en virtud del presente artículo, de conformidad con el apartado i) del inciso e) del párrafo 2 del artículo 4 de la Convención. Con este fin, estas Partes procurarán intercambiar experiencia e información sobre tales políticas y medidas, en particular concibiendo las formas de mejorar su comparabilidad, transparencia y eficacia. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su primer periodo de sesiones o tan pronto como sea posible después de éste, examinará los medios de facilitar dicha cooperación, teniendo en cuenta toda la información pertinente.

2. Las Partes incluidas en el anexo I procurarán limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal generadas por los combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Marítima Internacional, respectivamente.

3. Las Partes incluidas en el anexo I se empeñarán en aplicar las políticas y medidas a que se refiere el presente artículo de tal manera que se reduzcan al mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos del cambio climático, efectos en el comercio internacional y repercusiones sociales, ambientales y económicas, para otras Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo y en particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 del artículo 4 de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá adoptar otras medidas, según corresponda, para promover el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo.

4. Si considera que convendría coordinar cualesquiera de las políticas y medidas señaladas en el inciso a) del párrafo 1 supra, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales y los posibles efectos, examinará las formas y medios de organizar la coordinación de dichas políticas y medidas.

Artículo 3

1. Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el periodo de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012 (…)”

**“III. Acuerdo de París[[32]](#footnote-31).**

(…)

Artículo 2

1.El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, **tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible** y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con **bajas emisiones de gases de efecto invernadero**, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con **bajas emisiones de gases de efecto invernadero.**

(…)

ARTÍCULO 6

(…)

4. Por el presente se establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible, que funcionará bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo y podrá ser utilizado por las Partes a título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano que designará la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, y tendrá por objeto:

a) Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible(…)”.

“**IV. Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de ozono**[[33]](#footnote-32).

Las partes en el presente Protocolo,

(…)

Reconociendo la posibilidad de que la emisión de ciertas sustancias, que se produce en todo el mundo, puede agotar considerablemente la capa de ozono y modificarla de alguna otra manera, con los posibles efectos nocivos en la salud y en el medio ambiente,

Conscientes de los posibles efectos climáticos de las emisiones de estas sustancias, Conscientes de que las medidas que se adopten para proteger del agotamiento la capa de ozono deberían basarse en los adelantos registrados en la esfera de los conocimientos científicos y tener en cuenta consideraciones de índole económica y técnica,

Decididas a proteger la capa de ozono mediante la adopción de medidas preventivas para controlar equitativamente las emisiones mundiales totales que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas con base en los adelantos registrados en la esfera de los conocimientos científicos y teniendo en cuenta consideraciones de índole económica y técnica,

Reconociendo que hay que tomar disposiciones especiales para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo respecto de estas sustancias,

(…)

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

(…)

ARTÍCULO 2:

MEDIDAS DE CONTROL

1. Cada Parte velará por que, en el periodo de doce meses contados a partir del primer día del séptimo mes siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, y en cada periodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el Grupo I del Anexo A no supere su nivel calculado de consumo de 1986. Al final del mismo periodo, cada Parte que produzca una o más de estas sustancias se asegurará de que su nivel calculado de producción de estas sustancias no supere su nivel de producción de 1986, con la salvedad de que dicho nivel no puede haber aumentado más del 10% respecto del nivel de 1986. Dicho aumento sólo se permitirá a efectos de satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operen al amparo del artículo 5 y a fines de la racionalización industrial entre las Partes.

2. Cada Parte velará por que, en el periodo de doce meses a contar desde el primer día del trigésimo séptimo mes contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, y en cada periodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el Grupo II del Anexo A no supere su nivel calculado de consumo de 1986. Cada Parte que produzca una o más de estas sustancias velará por que su nivel calculado de producción de estas sustancias no supere su nivel calculado de producción de 1986, con la salvedad de que dicho nivel no puede haber aumentado más del 10% respecto del nivel de 1986. Dicho aumento sólo se permitirá a efectos de satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operen al amparo del artículo 5 y a fines de la racionalización industrial entre las Partes. El mecanismo para la aplicación de estas medidas se decidirá en la primera reunión de las Partes que se celebre después del primer examen científico.

3. Cada Parte velará por que, en el periodo del 1 de julio de 1993 al 30 de junio de 1994, y en cada periodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el Grupo I del Anexo A no supere el 80% de su nivel calculado de consumo de 1986. Cada Parte que produzca una o más de estas sustancias procurará que, para la misma fecha, su nivel calculado de producción de las sustancias no aumente anualmente más del 80% de su nivel calculado de producción de 1986. Empero, a fin de satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operen al amparo del artículo 5, y a efectos de la racionalización industrial entre las Partes, su nivel calculado de producción podrá exceder dicho límite hasta un 10% de su nivel calculado de producción de 1986.

4. Cada Parte velará por que, en el periodo del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999, y en cada periodo sucesivo de doce meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas que figuran en el Grupo I del Anexo A no supere el 50% de su nivel calculado de consumo correspondiente a 1986. Cada Parte que produzca una o más de esas sustancias, se cerciorará, en esa misma fecha, de que su nivel de producción de esas sustancias no exceda del 50% de su nivel de producción de 1986. No obstante, para poder satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operen al amparo del artículo 5, y con objeto de lograr la racionalización industrial entre Partes, su nivel calculado de producción de esas sustancias no exceda del 50% de su nivel de producción de 1986. No obstante, para poder satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operen al amparo del artículo 5, y con objeto de lograr la racionalización industrial entre Partes, su nivel calculado de producción podrá exceder ese límite hasta un 15% de su nivel calculado de producción de 1986. Este párrafo será aplicable a reserva de que en alguna reunión las Partes decidan lo contrario por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes que representen por lo menos los dos tercios del nivel total calculado de consumo de esas sustancias de las Partes. Esta decisión se considerará y adoptará a la luz de las evaluaciones de que trata el artículo 6.

5. A efectos de la racionalización industrial, toda Parte cuyo nivel calculado de producción de 1986 de las sustancias controladas del Grupo I del Anexo A sea inferior a 25 kilotones/año podrá transferir a cualquier otra Parte o recibir de ella producción que supere los límites previstos en los párrafos 1, 3 y 4, con tal que la producción total calculada y combinada de las Partes interesadas no exceda las limitaciones de producción prescritas en este artículo (…)”

“**V**. **Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono**[[34]](#footnote-33).

(…)

Artículo 2J

Después del artículo 2I del Protocolo, insértese el artículo siguiente:

“Artículo 2J: Hidrofluorocarbonos

1. Cada Parte velará por que en el período de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2019, y en cada período sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas del anexo F, expresado en equivalentes de CO2, no supere el porcentaje fijado para la respectiva serie de años especificados en los apartados a) a e) indicados a continuación, de la media anual de sus niveles de consumo de las sustancias controladas del anexo F calculados para los años 2011, 2012 y 2013, más el 15% de sus niveles calculados de consumo de sustancias controladas del grupo I del anexo C calculado, como se establece en el párrafo 1 del artículo 2F, expresado en equivalentes de CO2: 3 a) 2019 a 2023: 90% b) 2024 a 2028: 60% c) 2029 a 2033: 30% d) 2034 a 2035: 20% e) 2036 y años posteriores: 15%

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, las Partes podrán decidir que una Parte velará por que en el período de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2020, y en adelante en cada período sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de consumo de las sustancias controladas del anexo F, expresado en equivalentes de CO2, no supere el porcentaje fijado para la respectiva serie de años especificados en los apartados a) a e) como se indica a continuación, de la media anual de sus niveles calculados de consumo de las sustancias controladas del anexo F para los años 2011, 2012 y 2013, más el 25% de su nivel calculado de consumo de sustancias controladas del grupo I del anexo C, como se establece en el párrafo 1 del artículo 2F, expresado en equivalentes de CO2: a) 2020 a 2024: 95% b) 2025 a 2028: 65% c) 2029 a 2033: 30% d) 2034 a 2035: 20% e) 2036 y años posteriores: 15%

3. Cada Parte que produzca sustancias controladas del anexo F velará por que durante el período de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2019, y en cada período sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas del anexo F, expresado en equivalentes de CO2, no supere el porcentaje fijado para la respectiva serie de años especificados en los apartados a) a e) que se indican a continuación, de la media anual de sus niveles calculados de producción de las sustancias controladas del anexo F para los años 2011, 2012 y 2013, más el 15% de su nivel calculado de producción de sustancias controladas del grupo I del anexo C, como se establece en el párrafo 2 del artículo 2F, expresado en equivalentes de CO2: a) 2019 a 2023: 90% b) 2024 a 2028: 60% c) 2029 a 2033: 30% d) 2034 a 2035: 20% e) 2036 y años posteriores: 15%

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo, las Partes podrán decidir que una Parte que produzca sustancias controladas del anexo F velará por que en el período de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2020, y en cada período sucesivo de 12 meses, su nivel calculado de producción de las sustancias controladas del anexo F, expresado en equivalentes de CO2, no supere el porcentaje fijado para la respectiva serie de años especificados en los apartados a) a e) como se indica a continuación, de la media anual de sus niveles calculados de producción de sustancias controladas del anexo F para los años 2011, 2012 y 2013, más el 25% de su nivel calculado de producción de sustancias controladas del grupo I del anexo C, como se establece en el párrafo 2 del artículo 2F, expresado en equivalentes de CO2: a) 2020 a 2024: 95% b) 2025 a 2028: 65% c) 2029 a 2033: 30% d) 2034 a 2035: 20% e) 2036 y años posteriores: 15%

5. Los párrafos 1 a 4 del presente artículo se aplicarán en la medida en que las Partes decidan permitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para satisfacer los usos exentos que hayan acordado las Partes.

6. Cada Parte que fabrique sustancias del grupo I del anexo C o del anexo F velará por que durante el período de 12 meses contados a partir del 1 de enero de 2020, y en cada período sucesivo de 12 meses, sus emisiones de sustancias del grupo II del anexo F generadas en cada planta de producción que fabrique sustancias del grupo I del anexo C o del anexo F sean destruidas, en la medida de lo posible, utilizando la tecnología aprobada por las Partes en ese mismo período de 12 meses.

7. Cada Parte velará por que en toda destrucción de sustancias del grupo II del anexo F generadas en instalaciones que produzcan sustancias del grupo I del anexo C o del anexo F se utilicen solamente las tecnologías que aprueben las Partes (…)”.

Como se desprende de los instrumentos internacionales citados, México ha asumido diversas obligaciones en materia de protección al ambiente y prevención y mitigación del cambio climático. El Estado Mexicano se ha comprometido, frente a otros actores internacionales, a **reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con porcentajes específicos y metas concretas**, principalmente en el Protocolo de Montreal y su posterior enmienda.

Asimismo, en el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y en el Protocolo de Kyoto se han adquirido compromisos que son violentados por la autoridad responsable con el Acuerdo Reclamado, pues se ordena promover el desarrollo sostenible, haciendo énfasis en la importancia del **fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional y la promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía**, así como de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales.

De igual forma, el Protocolo de Kyoto señala que es imperativo la reducción progresiva o eliminación gradual de las **deficiencias del mercado**, así como el fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Por lo tanto, el Acuerdo reclamado genera **un retroceso en las condiciones operantes en el mercado**, pues restringe de manera arbitraria e injustificada el acceso al mercado relevante, además de que no establece parámetros técnicos y temporales para su aplicación. En este sentido, el **incremento** de las plantas convencionales eléctricas y la diminución de aquellas centrales eólicas y solares genera un desequilibrio en el mercado que en última instancia afecta el desarrollo sustentable y el medio ambiente.

Esto es así, pues se impide que **centrales de energía renovable más eficientes operen en igualdad de condiciones que las centrales convencionales**, privilegiando de forma injustificada y desproporcional a centrales convencionales que en México son en su mayoría propiedad de CFE y cuya **operación implica un retroceso en el uso de fuentes de energía renovable.**

Así, la discriminación apuntada tendrá como consecuencia que las centrales convencionales terminen satisfaciendo exclusivamente la demanda de energía eléctrica nacional, a través de procedimientos perjudiciales al medio ambiente, al utilizar principalmente combustibles fósiles en sus procesos productivos.

“**PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN DE DERECHO AMBIENTAL. SU FUNDAMENTO EN LAS OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y ELEMENTOS QUE LE SON PROPIOS.** De los artículos 1o., párrafo tercero y 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el **derecho de toda persona a un** **ambiente sano para su desarrollo y bienestar**. Así, **con base en una interpretación progresiva** de las obligaciones anteriores, en especial las de protección y garantía, **el principio de precaución que rige en esa rama del derecho, previsto en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas, encuentra fundamento intern**o; de ahí que cuando haya peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces (de acción o abstención) en función de los costos, para impedir la degradación de aquél. Por tanto, son elementos de dicho principio: i) la dimensión intertemporal; ii) la falta de certeza científica absoluta del riesgo ambiental; iii) los riesgos tendrán que ser graves e irreversibles; y, iv) la inversión de la carga de la prueba al infractor”[[35]](#footnote-34).

Además, el acuerdo reclamado es contrario a los tratados referidos, por la simple y sencilla razón de que las modificaciones realizadas por la autoridad responsable ocasionan que los participantes en el mercado eléctrico no inviertan en energías limpias.Por un tiempo no determinado y bajo condiciones inciertas no podrán emprenderse proyectos de generación con fuentes renovables y las centrales que ya se encuentran operando en el mercado se verán igualmente afectadas por la incertidumbre que se genera para su funcionamiento.

Estas medidas **inciden directamente en el desarrollo de proyectos de energía renovable y no se encuentra justificada su idoneidad y mucho menos existe una evaluación sobre la posibilidad de que existan medidas menos restrictivas**.

Al no promover la generación de energías que no provienen de combustibles fósiles, México incurriría en una violación a sus compromisos para reducir su emisión de gases y, consecuentemente, al esfuerzo conjunto para mantener y disminuir las temperaturas del planeta tierra y el efecto invernadero, además de frena lisa y llanamente la generación de energías limpias.

Ahora bien, de igual manera, debe destacarse que la violación a los tratados **no es indirecta o hipotética**, pues México se comprometió a fomentar el desarrollo de energías sustentables, lo que implica que, lejos de lo que se pretende con el acuerdo reclamado, cada una de sus políticas, leyes, reglamentos y actos de autoridad deben estar encaminados a fomentar ese desarrollo.

Es decir, esta distorsión en las reglas del mercado relevante implica un retroceso en el desarrollo y promoción de energías limpias y, de hecho, fomentan la producción de energías contaminantes cuya obtención requiere el aprovechamiento de combustibles fósiles y el aumento en la emisión de gases invernadero.

De igual manera, además de oponerse al cumplimiento de los objetivos legales y constitucionales en materia de energías limpias, el acuerdo reclamado es violatorio del **derecho fundamental a la salud**.

Con la aplicación de las medidas en cuestión se crean nuevos riesgos a la salud de las personas e implica un retroceso innecesario en el desarrollo medioambiental en **plena contingencia sanitaria**, lo cual es contradictorio con las acciones sanitarias que las autoridades federales en materia de salubridad y el resto de los países a nivel mundial han implementado.

Un ambiente sano tiene una importancia fundamental en la emergencia sanitaria, pues precisamente, fomentar la descarbonización del medio ambiente permite a su vez una mejora en la salud pública, lo que sí resulta acorde con las medidas sanitarias emprendidas por el gobierno mexicano para hacer frente a la contingencia, a diferencia del acuerdo reclamado.

Se estima necesario enfatizar que la medida restrictiva -además- **no resulta proporcional** a la afectación al medio ambiente y la salud pública. La afirmación anterior descansa en una premisa sencilla, si la generación y operación de fuentes de energía es un objetivo deseable para la mejora del medio ambiente y un compromiso internacional, la distorsión y la ineficacia del mercado relevante incide directamente en el derecho de la quejosa -y de la sociedad en general- para desarrollarse en un medio ambiente sano, pues mientras menos se promueva la generación de este tipo de energía, más se impulsa, a contrario sensu, la obtención de energías, sucias, generadas a base de combustibles fósiles que contaminan severamente el medio ambiente.

En efecto, **en segundo lugar**, los acuerdos reclamados **no persiguen ni buscan proteger un fin constitucionalmente válido y valioso**. Lisa y llanamente no se aprecia un bien constitucional que pudiere ser objeto de protección pues contradice las propias medidas sanitarias emprendidas por el gobierno con motivo de la contingencia y lejos de promover la generación de energías limpias, da pauta a que los participantes del mercado respectivo **no inviertan en proyectos para generarlas, lo que indudablemente impide que se reduzcan las emisiones contaminantes**.

Es decir, lejos de cumplir con los mandatos constitucionales y convencionales, la autoridad responsable no fomenta la inversión en nuevos proyectos que permitan obtener energías limpias, **sino que los limita y desincentiva**.

En último lugar, la restricción apuntada es inconstitucional e inconvencional pues, amén de que resulta innecesaria, en todo caso, no existe una correspondencia o equilibrio entre el derecho limitado y el beneficio que se conseguiría con el fin legitimo perseguido. Lo anterior es así, pues suponiendo sin conceder que el acuerdo reclamado tuviese como objetivo hacer frente a la pandemia sanitaria, ese supuesto beneficio no justifica que se afecte en ese grado **un derecho fundamental de primera importancia el medio ambiente y la salud de las personas**.

Por todo lo anterior, pido a su Señoría declarar fundado el presente concepto de violación y conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia de la unión, restituyéndola en el goce de sus derechos fundamentales al declarar la inconstitucionalidad del acuerdo reclamado.

**SEGUNDO. LOS ACTOS RECLAMADOS CAUSAN UNA GRAVE VIOLACIÓN A NUESTRO DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y A LA SALUD EN EL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL Y SON CONTRARIOS A LA PROGRESIVIDAD DEL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO QUE MÉXICO HA ALCANZADO EN BENEFICIO DE SUS CIUDADANOS, EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR NUESTRO PAÍS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE; LO ANTERIOR AL PARALIZAR EL POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO POR LA LIMITACIÓN QUE IMPLICAN LOS ACUERDOS SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, CON LO CUAL MÉXICO INCUMPLIRÁ LA CONTRIBUCIÓN NACIONALMENTE DETERMINADA (CND) DE MÉXICO, ADEMÁS DE AUMENTAR CON ELLO EL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) QUE IMPLICA LA EMINENTE GENERACIÓN VÍA COMBUSTÓLEO Y SUS EMISIONES CONTAMINANTES Y TÓXICAS QUE MENOSCABAN LA CALIDAD DEL AIRE Y LOS EFECTOS GRAVES A NUESTRA SALUD COMO POBLACIÓN QUE HABITAMOS EN EL PAÍS**

Los Actos Reclamados violan mis derechos consagrados tanto en el artículo 4º Constitucional, como en los diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, respecto a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable, protegiéndola de los efecto del Cambio Climático; al obstaculizar las medidas de transición energética hacia la implementación de energías renovables, a las que se encuentra obligado Constitucional y convencionalmente; así como contraviene la obligación general de prevención de daños significativos al medio ambiente, de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

**I. Contenido del derecho humano a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable de conformidad con la CPEUM y los tratados internacionales en la materia.**

El párrafo quinto del artículo 4º Constitucional, determina el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el cual el Estado mexicano se encontrará obligado a respetar. Este derecho entraña una indisociable relación con las obligaciones generales en materia de derechos humanos contenidas de la misma forma en la CPEUM, específicamente respecto a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1º de esta, que dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran sujetas a las obligaciones de **promover, respetar, proteger y garantizar** los derechos humanos bajo los principios propios de los derechos humanos.

Asimismo, en el ámbito internacional, el derecho a un medio ambiente sano subsiste en diversos tratados internacionales, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, al haber sido firmados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado de la República, de acuerdo con el artículo 133 Constitucional. Así, el contenido del derecho humano a un medio ambiente sano se amplía tras lo comprendido en instrumentos internacionales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (“Declaración de Estocolmo”) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (“Declaración de Río”), que profundizan en los alcances de las obligaciones en la materia que los Estados parte deben cumplir bajo el principio de *pacta sunt servanda.* Dichos instrumentos se analizan a continuación:

**Protocolo de San Salvador.**

“Artículo 11.- Derecho a un medio ambiente sano.

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”

**Declaración de Estocolmo.**

**“PRINCIPIO 1.** El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

**PRINCIPIO 2.** Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.

(…)

**PRINCIPIO 6.** Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas, para que nos se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.”

**Declaración de Río.**

**“PRINCIPIO 3.** El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

**PRINCIPIO 4.** A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.

(…)

**PRINCIPIO 11.** Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

(…)

**PRINCIPIO 15**. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”

El anterior criterio concuerda con lo sostenido en la tesis 1a. CCXLVIII/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la SCJN, que analiza el contenido del derecho humano a un medio ambiente sano bajo el contexto Constitucional y convencional, en la inteligencia de que las obligaciones desprendidas de este derecho nos vinculan tanto a los gobernados como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las cuales deberán adoptar las medidas necesarias para la protección del ambiente, en el marco de sus propias facultades. La tesis referida se cita en seguida:

**“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU CONTENIDO.** El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. **Del contenido de este derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. Tal mandato vincula tanto a los gobernados como a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, quienes deben adoptar, en el marco de sus competencias, todas aquellas medidas necesarias para la protección del ambiente**.”[[36]](#footnote-35)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Por otro lado, la tesis 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.), también emitida por la Primera Sala de la SCJN, determina lo que debe configurar el núcleo del derecho humano al medio ambiente sano, que dispone que todas las personas tenemos la facultad, como miembro de una colectividad, de exigir una protección efectiva del medio ambiente en el cual nos desarrollamos, protegiendo la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, por lo que trasciende los objetivos más inmediatos de los seres humanos; tal como se transcribe adelante:

**“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL. El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos.** En este sentido, este derecho humano se fundamenta en la idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades, incluso, en este contexto, la idea de obligación prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. El paradigma ambiental se basa en una idea de interacción compleja entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana.”[[37]](#footnote-36)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Adicionalmente, el derecho humano al medio ambiente sano implica tanto **una dimensión individual como una colectiva**, las cuales deben ser debidamente identificadas al momento de dilucidar cuál de estas resulta violada para determinar el tipo de afectación que reviste, donde en su dimensión individual repercute en afectaciones directas e indirectas sobre las personas en una conexidad con derechos como el derecho humano a la salud, también consagrado en el artículo 4º de la CPEUM y que resulta violado en la presente a la luz de lo vertido en este concepto de violación de esta demanda de amparo; entre otras posibles afectaciones a la integridad personal o a la vida. En cuanto a una dimensión colectiva de este derecho, da pues a la constitución de un interés universal sobre la protección del medio ambiente con la finalidad de preservar el mismo a las generaciones presentes y futuras. La anterior clasificación fue conformada por la tesis 1a. CCXCII/2018 (10a.), igualmente emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal y se transcribe a continuación:

**“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU DIMENSIÓN COLECTIVA Y TUTELA EFECTIVA. El derecho humano a un medio ambiente sano posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras.** No obstante, el reconocimiento de la naturaleza colectiva y difusa de este derecho humano, no debe conducir al debilitamiento de su efectividad y vigencia, ni a la ineficacia de las garantías que se prevén para su protección; por el contrario, conocer y entender esta especial naturaleza debe constituir el medio que permita su tutela efectiva a través de un replanteamiento de la forma de entender y aplicar estas garantías.”[[38]](#footnote-37)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Para lograr concluir la delimitación de lo que circunscribe en la presente demanda de amparo, nuestro derecho humano a un medio ambiente sano y la violación que se alega de estos causada por los Actos Reclamados, cabe aclarar que en la presente, la violación que entraña al derecho humano al medio ambiente sano, es de carácter subjetivo o antropocéntrico que, de acuerdo con la tesis 1a. CCLXXXVIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN, “es aquella conforme a la cual la protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona”, como el derecho a la salud, que se demostrará más adelante ha sido vulnerado consecuencia de la eficacia de los Actos Reclamados.

**“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA VULNERACIÓN A CUALQUIERA DE SUS DOS DIMENSIONES CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL.** El derecho humano a un medio ambiente sano posee una doble dimensión, la primera denominada objetiva o ecologista, que preserva al medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo, no obstante su interdependencia con otros múltiples derechos humanos. **E**sta dimensión protege a la naturaleza y al medio ambiente no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. **La segunda dimensión, la subjetiva o antropocéntrica, es aquella conforme a la cual la protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona,** por lo que la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho humano al medio ambiente, sin que sea necesaria la afectación de otro derecho fundamental.”[[39]](#footnote-38)

[Énfasis y subrayado añadidos]

No obstante, el derecho al medio ambiente sano se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo sustentable pues, para garantizar de forma plena su ejercicio, es necesario incluir una dimensión de sustentabilidad ecológica, de conformidad con los compromisos internacionales en materia de desarrollo sustentable suscritos por el Estado mexicano, de forma que la utilización de los recursos naturales sea garantizada a las generaciones presentes y futuras, incluyendo en su utilización metas entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos además de todos los objetivos esenciales del desarrollo sustentable, toda vez que el respeto de estos derivará en la tutela efectiva de otros derechos humanos conexos, como el derecho humano a la salud, a la vida, a la alimentación entre otros; concurriendo con los criterios sostenidos por la Primera Sala del Alto Tribunal de este país. La estrecha relación entre el derecho al medio ambiente sano y el desarrollo sustentable, fue explorada por los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis XXVII.3o.16 CS (10a.) que se transcribe adelante:

**“MEDIO AMBIENTE SANO. SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE INTERVIENEN EN SU PROTECCIÓN.** Los principios 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, así como el informe Brundtland en materia de desarrollo sostenible, brindan herramientas que permiten establecer la incorporación intrínseca de la sustentabilidad en el contexto del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre un marco económico y social del desarrollo. Así, el principio Constitucional de protección al medio ambiente sano y la obligación de garantizar su pleno ejercicio, conllevan incorporar un entendimiento central del concepto de sustentabilidad ecológica con trascendencia jurídica, a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, en la inteligencia de que su importancia vital radica en evitar su deterioro, como una condición necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales. **En consecuencia, la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa y disponer que sus agentes garanticen su respeto, implica compaginar metas fundamentales entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos, mediante el desarrollo sustentable, que persigue el logro de los objetivos esenciales siguientes: (i) la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo; (ii) la limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales y la equidad social; y, (iii) la preservación de los sistemas físicos y biológicos –recursos naturales, en sentido amplio– que sirven de soporte a la vida de los seres humanos,** con lo cual se tutelan diversos derechos inherentes a las personas, como los relativos a la vida, la salud, la alimentación y al agua, entre otros.”[[40]](#footnote-39)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Bajo la misma línea argumentativa, en la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre del 2017 sobre el Medio Ambiente y Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza la estrecha relación entre el derecho a un medio ambiente sano, el desarrollo sustentable y los derechos humanos, pues tanto en los instrumentos de derecho internacional en la materia que han dotado de contenido al concepto de desarrollo sostenible, así como a juicio de la propia Corte, “múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos” y “otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación al medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos”, a la luz de los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Los párrafos que elaboran estos razonamientos, se transcriben enseguida:

<<52. Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.

(…)

54. De esta relación de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, surgen múltiples puntos de conexión por los cuales, como fue expresado por el Experto independiente, “todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio”. En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos ha identificado amenazas ambientales que pueden afectar, de manera directa o indirecta, el goce efectivo de derechos humanos concretos, afirmando que i) el tráfico ilícito y la gestión y eliminación inadecuadas de productos y desechos tóxicos y peligrosos constituyen una amenaza grave para los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la salud; ii) el Cambio Climático tiene repercusiones muy diversas en el disfrute efectivo de los derechos humanos, como los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, y iii) la degradación ambiental, la desertificación y el Cambio Climático mundial están exacerbando la miseria y la desesperación, con consecuencias negativas para la realización del derecho a la alimentación, en particular en los países en desarrollo.

55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45).>>

**III. Los Actos Reclamados violan el principio de prevención en materia ambiental, y el deber específico de regulación en relación con el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de San José”) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.**

En la Opinión Consultiva OC-23/17 realizada por la CIDH a solicitud de la República de Colombia, la Corte Interamericana deliberó sobre el alcance, entre otros temas, de las obligaciones estatales derivadas de los deberes de respetar y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, en el contexto de la protección del medio ambiente. Así, al analizar en específico lo ateniente a las obligaciones estatales frente a posibles daños al medio ambiente, a efectos de garantizar y respetar los derechos a la vida y a la integridad personal, la CoIDH repara en la debida diligencia a la que los Estados se encuentran obligados a cumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana; este concepto se asocia generalmente a la responsabilidad de los Estados frente a obligaciones de conducta o comportamiento, en contraste con las obligaciones de resultado. Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la debida diligencia respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, implica el compromiso del Estado Parte de adoptar las medidas apropiadas tendientes a lograr una progresiva efectividad pleno de los derechos.[[41]](#footnote-40) Sobre la debida diligencia, descansan entonces la mayoría de las obligaciones en materia ambiental, cuya protección es indisociable para el goce de otros derechos como a la vida o a la salud.[[42]](#footnote-41)

Para lograr el respeto y garantía de nuestros derechos a la vida y a la integridad personal respecto a la protección del medio ambiente, los Estados deben cumplir con una serie de obligaciones, tanto para los daños que pudieran ocurrir en su territorio, como fuera de este. Entre dichas obligaciones se encuentran la obligación de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y las obligaciones procedimentales en materia de protección del medio ambiente.[[43]](#footnote-42) Todo ello sin perder de vista la existencia de otras obligaciones específicas en el marco del derecho internacional ambiental, entre las que se encuentran aquellas en materia de Cambio Climático.[[44]](#footnote-43)

En cuanto a la obligación de prevención, esta refiere a la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana, previniendo violaciones a estos y promoviendo la salvaguarda de los mismos, al considerar las eventuales violaciones que las medidas de distinto carácter pudieran acarrear sobre los derechos que se protegen.[[45]](#footnote-44) En materia ambiental, el principio de prevención implica la responsabilidad de los Estados de velar que las actividades realizadas en su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o fuera de los límites de su jurisdicción nacional.[[46]](#footnote-45) Así, el principio de prevención de daños ambientales abarca tanto la tierra, el agua, la atmósfera, la flora y la fauna[[47]](#footnote-46); sin embargo, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana, ha llevado la obligación de prevención no solo para daños fuera del territorio del Estado responsable, sino que también aplica para daños que puedan ocurrir dentro de éste.[[48]](#footnote-47)

Dado lo anterior, la Corte continúa su análisis sobre cuándo se hace exigible dicha obligación y al analizar el contenido de dicho principio en diversos tratados internacionales en materia ambiental, incluida la Convención Marco en las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, determina la existencia de consenso sobre la necesidad de un determinado nivel en los efectos del daño a causarse para que la obligación de prevención sea exigible.[[49]](#footnote-48) Esto es, debe tratarse de un daño significativo en términos que deban determinarse según el caso concreto y las circunstancias particulares de éste.[[50]](#footnote-49)

En atención a la obligación de prevención, cada Estado parte deberá cumplir con ciertas medidas para regular los impactos significativos, incluidos los daños al derecho a la salud de las personas, como forma parte de la jurisprudencia interamericana (Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrs. 89 y 90).[[51]](#footnote-50) Al ser entonces esta obligación una de comportamiento, esta contrae obligaciones de carácter específico, considerando que el estándar para demostrar su cumplimiento es de medios y no de resultados.[[52]](#footnote-51)

Por tanto, una de estas obligaciones específicas y la cual consideramos fue violada mediante los Actos Reclamados, en es el deber de regulación, que es enunciado en el párrafo 45 de la Opinión Consultiva:

“145. Entre estas obligaciones específicas de los Estados se encuentran los deberes de: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer un plan de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental.”

El deber de regulación consiste entonces y de conformidad con el artículo 2º del Pacto de San José, en la obligación de los Estados Parte de adoptar disposiciones de derecho interno, incluyendo medidas legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en la Convención y dichas disposiciones deben irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en una efectiva aplicación práctica.[[53]](#footnote-52)

**“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno**

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos Constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”

El deber de regulación consiste entonces y de conformidad con el artículo 2º del Pacto de San José, en la obligación de los Estados Parte de adoptar disposiciones de derecho interno, incluyendo medidas legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivos nuestros derechos y libertades contenidos en la Convención y dichas disposiciones deben irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en una efectiva aplicación práctica.[[54]](#footnote-53) Los Estados deben entonces tomar en cuenta el nivel de riesgo existente para regular las actividades que puedan causar un daño significativo al medio ambiente y que pueda amenazar otros derechos estrechamente relacionados con éste. Igualmente, cabe rescatar que la Corte Interamericana sostiene y desarrolla durante la Opinión Consultiva de mérito la existencia de los principios de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible en los siguientes términos:

<<54. De esta relación de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, surgen múltiples puntos de conexión por los cuales, como fue expresado por el Experto independiente, “todos los derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio”. En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos ha identificado amenazas ambientales que pueden afectar, de manera directa o indirecta, el goce efectivo de derechos humanos concretos, afirmando que i) el tráfico ilícito y la gestión y eliminación inadecuadas de productos y desechos tóxicos y peligrosos constituyen una amenaza grave para los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la salud; ii) el Cambio Climático tiene repercusiones muy diversas en el disfrute efectivo de los derechos humanos, como los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, y iii) la degradación ambiental, la desertificación y el Cambio Climático mundial están exacerbando la miseria y la desesperación, con consecuencias negativas para la realización del derecho a la alimentación, en particular en los países en desarrollo.

55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45).>>

De todo lo anterior, se sostiene que, mediante los Actos Reclamados que emitieron las Autoridades Responsables al carecer de facultades para ello, y cuya finalidad fue el imponer restricciones de carácter normativo a la incorporación de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente dentro del Sistema Eléctrico Nacional, revisten una violación a la obligación general del Estado mexicano de prevención en materia de protección al medio ambiente, concretamente en el deber de regular, como parte de las medidas apropiadas para la prevención de violaciones de los derechos humanos, en relación con el artículo 2º del Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dicha violación se cristaliza al momento en que el efecto material de los Actos Reclamados implica restringir la conexión de nuevas fuentes de energías renovables dentro del SEN de forma arbitraria, con lo cual se promueve el uso de combustibles fósiles y combustóleos para la generación de energía eléctrica, pues resultan ser las fuentes favorecidas como resultado de los Actos Reclamados. Si bien, México ha suscrito múltiples obligaciones y metas en cuanto al uso de energías limpias, como se demostrará más adelante y que incluyen la meta referente a que, para el año 2021, el 30% de la generación de energía eléctrica debe provenir de fuentes renovables; lo cierto es que la consecuencia directa de estas disposiciones reglamentarias no se traducen en una aplicación práctica de la protección de nuestro derecho humano al medio ambiente sano y en consecuencia, a los derechos interrelacionados a este, como el derecho a la salud.

En seguida, se especificarán cuáles son tanto el marco jurídico internacional y nacional, así como los compromisos en materia de mitigación del Cambio Climático contraídos por el Estado mexicano y cómo estos afectan el derecho a la salud de las personas:

**IV. Obligaciones en materia de Cambio Climático y reducción de emisiones conforme el marco internacional**

**Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático**

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (firmada por México el 13 de junio de 1992, ratificada el 11 de marzo de 1993 y publicada en el DOF el 7 de mayo de 1993), con lo que México se obliga a cumplir con los lineamientos establecidos en dicho instrumento.

De acuerdo con la Convención, el Cambio Climático es "*un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables*”.

Su objetivo, así como el de cualquier otro instrumento jurídico conexo, es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y, dicho nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al Cambio Climático, se asegure la producción de alimentos y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible[[55]](#footnote-54).

Para alcanzar el objetivo se definieron, con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, bajo el cual México adopta el compromiso cuantitativo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las emisiones son “la liberación de gases de efecto invernadero o sus precursores en la atmósfera en un área y un período de tiempo especificados” y, gases de efecto invernadero son" aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja”.

Ahora bien, para cumplir con el objetivo de la Convención, México debe adoptar y aplicar medidas con el eje rector de la protección del sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, se deben tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del Cambio Climático y mitigar sus efectos adversos. Para tal fin, las políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos[[56]](#footnote-55).

Teniendo en cuenta estas responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de los objetivos y de las circunstancias, el Estado Mexicano debe, entre otros:

I. Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero.

II. Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el Cambio Climático, teniendo en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero.

III. Tener en cuenta las consideraciones relativas al Cambio Climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales y emplear métodos apropiados, por ejemplo, evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas para mitigar el Cambio Climático o adaptarse a él.

**Acuerdo de París**

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. Fue firmado por México el 22 de abril de 2016, ratificado por México 21 de septiembre de 2016 y publicado en el DOF el 4 de noviembre de 2016, con lo que México se obliga a cumplir con sus lineamientos. Su objetivo, es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del Cambio Climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y *para ello, establece tres acciones concretas:*

“a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del Cambio Climático;

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del Cambio Climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases efecto invernadero [[57]](#footnote-56).”

Para cumplir con el objetivo del Acuerdo, se dispone que cada país debe fijar las contribuciones de forma individual para conseguir el objetivo global, éstas se denominan contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (NDCs). De acuerdo con el artículo 3 de la Convención, éstas deben ser ambiciosas y que representen un progreso a lo largo del tiempo y se establecen para conseguir el propósito del Acuerdo.

Las contribuciones deben tener un informe cada 5 años y estar registradas por la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y cada progreso debe ser más ambicioso que el previo, esto de conformidad con el principio de progresión.

Esto es, si bien es cierto que el Acuerdo de París facilita que los países decidan respecto del nivel de ambición que se proponen alcanzar, se deben cumplir tres requisitos:

* 1. Actualización periódica de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (NDCs por sus siglas en inglés), al menos cada 5 años.
  2. Progresividad, esto es, que la contribución aumente gradualmente su ambición con cada ciclo, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
  3. Que cada NDCs tome en cuenta los resultados del “balance mundial”.

Este Acuerdo es el marco que impulsa un proceso de transformación hacia el desarrollo sustentable, pues compromete a los países a readecuar sus políticas económicas, sociales y ambientales a la luz de sus objetivos, a través de la gobernanza climática nacional, lo que implica importantes desafíos institucionales a la luz de las demandas que puede plantear el cumplimiento de las NDCs y la entera implementación del Acuerdo a nivel nacional.

Desde el punto de vista de las capacidades, se deben reforzar las capacidades del aparato gubernamental para que tengan facultades y competencias en materia de Cambio Climático y liderar el fundamental proceso de implementación de las NDCs; así mismo, se deben internalizar los compromisos emergentes de las NDCs en el planeamiento nacional a medio y largo plazo y profundizar el conocimiento científico del Cambio Climático que permita tomar decisiones informadas a través de los mecanismos nacionales implementados de generación, compilación y verificación de información necesaria para cumplir con el marco de transparencia.

En este sentido, la organización institucional debe reflejar la dimensión climática en las políticas gubernamentales para que las acciones se alineen al cumplimiento de las NDCs, a través de un marco institucional que asigne responsabilidades sectoriales en la mitigación y en la adaptación en todos los niveles de gobierno.

**V. Obligaciones de México en Materia de Cambio Climático de acuerdo con el marco nacional**

**Ley General de Cambio Climático**

Publicada en el DOF el 6 de junio de 2012, es el principal instrumento de política con el que cuenta el país para enfrentar el Cambio Climático y tiene como objetivo regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la política nacional de Cambio Climático.

Es una ley de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del Cambio Climático, además de serreglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Determina de manera clara el alcance y contenido de la política nacional de Cambio Climático, define las obligaciones de las autoridades y las facultades de los tres órdenes de gobierno y establece los mecanismos institucionales y tiene como objetivos:

**“I.** **Garantizar el derecho a un medio ambiente sano** y establecer la concurrencia de **facultades** de la federación, las entidades federativas y los municipios en la **elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al Cambio Climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;**

**II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero** para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;

**III.** **Regular las acciones para la mitigación y adaptación al Cambio Climático**;

**IV.** **Reducir la vulnerabilidad** de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del Cambio Climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

…

**VIII.** **Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París,** que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C, con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del Cambio Climático.[[58]](#footnote-57)”

[Énfasis añadido]

Para cumplir con el objetivo de la Ley así como de las obligaciones internacionales, se establece que la federación tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

**“I.** Formular y conducir la **política nacional** en materia de Cambio Climático;

**II.** Elaborar, coordinar y aplicar **los instrumentos de política** previstos por esta Ley;

(…)

**IV.** Elaborar, actualizar, publicar y aplicar el **atlas nacional de riesgo** y la Política Nacional de Adaptación, y emitir los criterios para la elaboración de los atlas de riesgo estatales;

(…)

**VI.** Establecer, regular e instrumentar las **acciones para la mitigación y adaptación al Cambio Climático**, de conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en las materias siguientes:

**a)** Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, costeros, islas, cayos, arrecifes y los recursos hídricos;

(…)

**d) Energía;**

**e)** Planeación nacional del desarrollo;

(…)

**g)** Prevención y atención a enfermedades derivadas de los efectos del Cambio Climático;

**h)** Protección civil;

**i)** Transporte federal y comunicaciones;

**j)** Desarrollo regional y desarrollo urbano;

(…)

**VII.** **Incorporar en los instrumentos de política ambiental criterios de mitigación y adaptación al Cambio Climático;**

(…)

**XIII.** Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como ponerlo a disposición del público en los términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

**XIV.** Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que se requieran para la elaboración, actualización y publicación del **inventario** y en su caso los inventarios estatales; así como requerir la información necesaria para su integración a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras:

**a)** Generación y uso de energía;

**b)** Transporte;

(…)

**e)** Procesos industriales, y

(…)

**XV.** Regular, integrar, administrar, publicar y actualizar el registro;

**XVI.** Elaborar y promover metodologías para la valoración económica de las emisiones;

(…)

**XXIII.** **Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al Cambio Climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del país,** de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en lo que resulte aplicable.[[59]](#footnote-58)”

[Énfasis añadido]

Al igual que lo dispuesto en el Acuerdo de París, la Ley General de Cambio Climático señala en su artículo 26 que la **política nacional de Cambio Climático se debe formular y conducir de acuerdo a** los siguientes **principios**:

* 1. **Sustentabilidad** en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los integran.
  2. **Precaución** cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total certidumbre científica no debe utilizarse como razón para posponer las medidas de mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos adversos del Cambio Climático.
  3. **Prevención**, al ser éste el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del Cambio Climático.
  4. **Responsabilidad ambiental**, quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente, está obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar, restaurar y, en última instancia, a compensar de los daños ambientales.
  5. **Transparencia**, acceso a la información y a la justicia, en donde todos los órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la disposición de la información relativa al Cambio Climático y proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.
  6. **Conservación** de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales y son fundamentales para reducir la vulnerabilidad al Cambio Climático.
  7. **Progresividad**, las metas para el cumplimiento de la Ley y de las obligaciones internacionales deben presentar una progresión y gradualidad a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.

Asimismo, se establece que la política nacional de mitigación de Cambio Climático debe incluir un diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones nacionales para el logro gradual de metas de reducción de emisiones específicas, por sectores y tomando como referencia los escenarios de línea base y líneas de base por sector que se establezcan en los instrumentos previstos, considerando las contribuciones determinadas a nivel nacional para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, el acceso a recursos financieros, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, así como cualquier otro tratado internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de Cambio Climático[[60]](#footnote-59).

La política para la mitigación, de acuerdo con el artículo 33 establece los siguientes objetivos:

**“I.** Promover la **protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a un medio ambiente sano a través de la mitigación de emisiones**;

**II. Reducir las emisiones nacionales**, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo- eficiencia de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico;

**III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía**, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía;

**IV.** Promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios;

**V.** Promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida;

**VI. Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales;**

**VII.** Medir, reportar y verificar las emisiones;

**VIII.** Reducir la quema y venteo de gas para disminuir las pérdidas en los procesos de extracción y en los sistemas de distribución y garantizar al máximo el aprovechamiento del gas en instalaciones industriales, petroleras, gaseras y de refinación;

**IX.** Promover el aprovechamiento del gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón;

**X.** Promover la cogeneración eficiente para evitar emisiones a la atmósfera;

**XI.** Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos;

**XII.** Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado;

(…)

**XV.** Promover la participación de los sectores social, público y privado en el diseño, la elaboración y la instrumentación de las políticas y acciones nacionales de mitigación, y

(…)”

[Énfasis añadido]

Además del marco institucional, la Ley General de Cambio Climático prevé una serie de instrumentos financieros, regulatorios, técnicos, de planeación, de evaluación y de vigilancia de la política pública de Cambio Climático, entre los que se encuentran la Estrategia Nacional de Cambio Climático y herramientas como el Inventario de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, el Registro Nacional de Emisiones, el Sistema de información sobre Cambio Climático, el fondo para el Cambio Climático, instrumentos económicos, normas oficiales mexicanas y atlas naciones, estatales y municipales de riesgo. En materia de planeación, el artículo 58 de la Ley establece los siguientes instrumentos:

**Estrategia Nacional de Cambio Climático**

La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del Cambio Climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, siendo la SEMARNAT[[61]](#footnote-60) la entidad encarga de su elaboración y en conjunto con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se revisan por lo menos cada diez años, en materia de mitigación y, cada seis años, en materia de adaptación, las estimaciones proyectadas y los resultados evaluados y se actualizan los escenarios, las proyecciones, los objetivos y las metas correspondientes.

El objetivo de esteinstrumento rector, es describir los ejes estratégicos y líneas de acción a seguir con base en la información disponible del entorno presente y futuro, para orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de atender las prioridades nacionales y alcanzar las metas del país en el largo plazo. La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) se integra por los tres temas siguientes:

1. Pilares de política nacional de Cambio Climático. Integra el análisis de la política del país en Cambio Climático.
2. Adaptación a los efectos del Cambio Climático. Incluye escenarios climáticos y una evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación en el país.
3. Desarrollo bajo en emisiones / mitigación. Incorpora un panorama sobre las emisiones del país, las oportunidades de mitigación, el escenario y las emisiones de línea base y trayectoria objetivo de emisiones.

Para cada uno de los temas se establecen los pilares de la política o los ejes estratégicos (objetivos deseados) y las líneas de acción. Así, en el tema de Desarrollo bajo en emisiones/mitigación, la ENCC establece esfuerzos de reducción de GEI y acciones prioritarias de mitigación para el país, así como el centro de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). En el Diagnóstico, señala que en el 2010, México emitió a la atmósfera gases efecto invernadero equivalentes a 748 millones de toneladas de CO2, lo que representa un aumento de 33% con respecto a la emisiones de 1990. En el periodo de 2001 a 2010, las emisiones presentaron una tasa media de crecimiento anual de 2.6% mientras que del PIB fue 1.9%. Dentro de los gases efecto invernadero emitidos, el sector energético es la mayor fuente, con un crecimiento en emisiones de 58% u una tasa media de crecimiento anual de 2.3%.

Asimismo, se muestra el desglose de las emisiones por tipo de gas (Inventario Nacional de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 1990-2010), en donde las emisiones de CO2 representan el 65.9%, las de CH4 el 22.3%, las de N2O el 9.2% y las de PFC, HFC y SF6 el 2.6%. Por lo anterior, se plantean diversos ejes estratégicos y líneas de acción, dentro de las cuales destacan:

* 1. Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia.
  2. Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable.
  3. Reducir las emisiones de CCVC y propiciar co-beneficios de salud y bienestar.

**Programa Especial de Cambio Climático**

La obligación de emitir el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) emana de la Ley General de Cambio Climático que en su artículo 66 dispone que este Programa será elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación y aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y que en él se establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el Cambio Climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con la ENCC.

**Política Nacional de Adaptación**

La implementación de acciones para la adaptación al Cambio Climático en México, debe considerar dos aspectos importantes: a) la incertidumbre que aún existe en torno a los impactos del Cambio Climático —su tipo, magnitud y naturaleza—, incertidumbre que dificulta delimitar las acciones de adaptación; b) el dinamismo de la vulnerabilidad a los impactos, que demanda la realización de evaluaciones periódicas para comprender mejor esos procesos[[62]](#footnote-61).

Los instrumentos rectores de la política nacional en materia de adaptación al Cambio Climático son la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático establece, que los objetivos de la política nacional en materia de adaptación son: reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del Cambio Climático, y fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos. Por su parte, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, establece tres ejes estratégicos en materia de adaptación:

* 1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del Cambio Climático
  2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los efectos del Cambio Climático
  3. Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que proveen.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2010 (COP 16), celebrada en Cancún, México, se determinó que debería darse la misma prioridad a la adaptación que a la mitigación, por lo que se adoptó el Marco de Adaptación de Cancún (CAF, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es para mejorar las medidas de adaptación.

Específicamente el Acuerdo de París reconoce la adaptación como un componente fundamental de la respuesta mundial frente al Cambio Climático por lo que nuestro país se ha comprometió a la elaboración de la Política Nacional de Adaptación de México (NAP, por sus siglas en inglés), en cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático (artículo 7 Fr. IV y Capítulo II del Título Cuarto), así como en alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido es prioritario y estratégico impulsar la adaptación al Cambio Climático, dadas las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran la población mexicana y los ecosistemas del país. El proceso de adaptación al Cambio Climático considera cuatro fases generales:

* + 1. Evaluación de la vulnerabilidad actual y futura;
    2. Diseño de medidas de adaptación;
    3. Implementación de las medidas de adaptación y
    4. Monitoreo y Evaluación. Estas fases contemplan de manera inherente e ineludible, la participación social y de actores clave, el enfoque de género y el respeto a los derechos humanos para lograr una adaptación efectiva ante el Cambio Climático que disminuya las desigualdades entre diferentes grupos sociales de una comunidad.

**Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero**

Un compromiso de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) según su artículo 4 es elaborar y actualizar periódicamente inventarios nacionales de las emisiones, retomado por el Acuerdo de Paría a través de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, en inglés).

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es el encargado de la elaboración del Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) cuyo objetivo es generar conocimiento y estadísticas sobre las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y de carbono negro que resultan de las actividades antropogénicas en México; así como conocer el comportamiento en el tiempo por fuentes de emisión y la estimación de las absorciones por sumideros. Todo ello mediante metodologías acordadas internacionalmente para el tema, susceptibles de comparación y revisión técnica.

Este inventario ha señalado que el sector energía tiene un rango de 481 millones de toneladas de CO2 equivalente (CO2e), y a nivel sector, es el principal emisor de gases de efecto invernadero, seguido por la ganadería, con 71 millones de toneladas de CO2e y los procesos industriales con 54 millones. En conjunto con otros indicadores, suman un total de 683 millones de toneladas.

[ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]

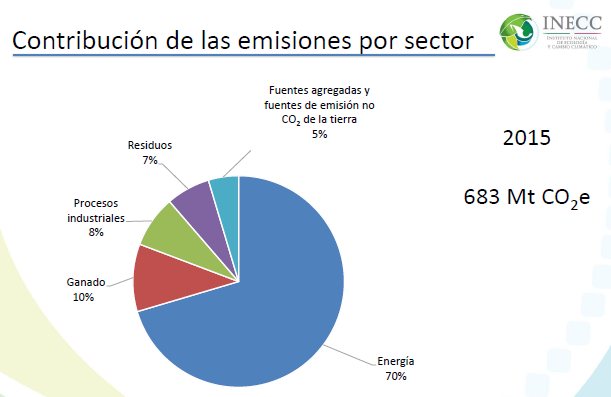


Figura 1: Contribución de emisiones por sector según datos del INECC

Fuente: INECC. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015, (2018).

**VI. Afectaciones al derecho humano a la salud, derivadas de las violaciones al derecho al medio ambiente sano y a las obligaciones en materia de Cambio Climático**

Sin perder de vista la interrelación entre el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano a la salud, en los términos en que este ha sido sostenido por la jurisprudencia de la CoIDH, además de las tesis jurisprudenciales del orden nacional que han sido citadas en el presente concepto de violación, para acreditarse debidamente cuáles son las afectaciones que los Actos Reclamados generan nuestros derechos a la salud y el medio ambiente sano, debe profundizarse conceptualmente el alcance de este último derecho. Así, el artículo 4º de la CPEUM en su párrafo cuarto, dispone que:

**“Artículo 4º.-** La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

(…)

**Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”**

[Énfasis y subrayado añadidos]

Nuestro derecho a la protección de la salud incluye diversos elementos que lo comprenden, pues no solo implica de forma genérica el acceso a servicios médicos. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“PIDESC”), supone la implementación de los Estados Parte, de diversas medidas tendientes a garantizar dicha protección para lograr el disfrute de toda persona al nivel más alto posible de salud física y mental, entre las que destaca el mejoramiento del medio ambiente, en todos sus aspectos.

**“Artículo 12**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda personaal disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

**b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;**

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Esta última definición del derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico y mental, es compartida en el Protocolo de San Salvador en su artículo 10, que le agrega una dimensión adicional: la social. Además, de establecer el compromiso de los Estados Parte de adoptar una serie de medidas para garantizar ese derecho.

**“Artículo 10. Derecho a la Salud**

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y (…)”

De ambos instrumentos internacionales, se identifican dos dimensiones de protección y garantía del mismo derecho, que son indispensables de determinar en virtud del presente agravio: que los Estados deben garantizar la salud de forma individual (al garantizar el bienestar físico, mental y social de cada individuo) y colectivo (al determinar medidas de incidencia general tendientes a lograr dicha garantía, entre las que se ubica el mejoramiento de todos los aspectos del medio ambiente, de acuerdo con el inciso b, numeral 2 del PIDESC. Incluso, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la SCJN determina dichos ámbitos de protección en la tesis 1a./J. 8/2019 (10a.) que se transcribe adelante:

**“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.** La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. Constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés Constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. **Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.”[[63]](#footnote-62)**

[Énfasis y subrayado añadidos]

Si la faceta social del derecho a la salud comprende el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, y los tratados internacionales que forman parte de la Ley Suprema de la Unión reconocen el mejoramiento del medio ambiente como parte de las medidas necesarias para su protección, resulta innegable que bajo el principio de interdependencia de los derechos humanos al medio ambiente sano y el derecho humano a la salud, los Actos Reclamados no revistan violaciones a este último, cuando, como ha quedado demostrado, las Autoridades Responsables en el ámbito de sus competencias pero como parte del Estado mexicano y por tanto obligadas a la protección de estos derechos en términos del artículo 1º Constitucional, mediante las restricciones arbitrarias a la incorporación de nuevas energías renovables a la matriz energética del SEN, promueven el uso de energías no renovables y sucias, que tienen como consecuencia el repunte en las emisiones de GEI ligados a impactos de Cambio Climático, yendo en contra de las metas y medidas de mitigación y adaptación que en esta materia han sido tomadas por el país.

No puede tampoco negarse la persistencia del Cambio Climático y los efectos que ya ha causado en el planeta, como el derretimiento de las capas de hielo y glaciares, el aumento de la temperatura del océano, cambios en las estaciones, sequias y olas de calor que afectan la seguridad alimentaria, los hábitats y ecosistemas con los servicios ambientales que prestan, la disponibilidad hídrica, entre otros; estos efectos generan consecuencias sobre la vida y salud, políticos y económicos asociados.

Debido a la velocidad a la que estos cambios están ocurriendo, es indispensable que se adapten e implementen medidas que tiendan a retomar los compromisos en la materia y a la gradual sustitución de las energías de fuentes sucias por fuentes limpias, de forma que lo contrario no transgreda las condiciones del medio ambiente y repercuta en afectaciones a nuestra salud como individuos y que se reflejen en los ecosistemas.

Los ecosistemas se ven impactados de manera directa por las actividades del hombre que impulsan una crisis en los ecosistemas, ya sea por la contaminación directa al mismo o al suelo o agua, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio de uso de suelo[[64]](#footnote-63). Además, existe un efecto indirecto, los ecosistemas son un conjunto de interacciones entre los factores bióticos y abióticos que los integran, estas relaciones sistémicas son frágiles y soportan el equilibrio ecosistémico, cualquier afectación y sobre todo una tan drástica como al clima pone en riesgo este frágil equilibrio[[65]](#footnote-64). Con el Cambio Climático se podría perder la interacción entre algunas especies lo que generaría modificaciones en los ecosistemas, lo que provocará el desplazamiento de especies o inclusive su extinción.

Las repercusiones nocivas del Cambio Climático en nuestra salud serán de manera directa (fisiológicos de calor y frío) o de manera indirecta alterando vectores y por consecuencia, agravando la propagación de enfermedades. Cada vez serán más frecuentes las sequías e inundaciones, lo que generaría que se extendieran algunas enfermedades.[[66]](#footnote-65) Además, con las altas temperaturas se pueden presentar fenómenos como las olas de calor que pueden generar cuadros de deshidratación, agotamiento, golpe de calor, calambres, arritmias, problemas renales, entre otros. También se incrementa las sequías, inundaciones y a la concentración de agentes patógenos, así como la redistribución de vectores transmisores de enfermedades, que al ser sensibles a la temperatura y clima pueden propagarse por territorios donde antes se veían impedidos por las barreras climáticas. Algunas de estas enfermedades son: paludismo, dengue, fiebre del valle del rift, entre otras[[67]](#footnote-66).

Es importante resaltar que la tesis XXVII.3o.14 CS (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, nos sirven de sustento para acreditar nuestro interés como individuos respecto a las afectaciones al medio ambiente sano como a nuestro derecho a la salud, puesto que esta, nos da la pauta para garantizar el pleno ejercicio de nuestro derecho al medio ambiente sano como personas integrantes de una sociedad, La tesis referida se cita en seguida:

**“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. FINALIDAD DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE AL ESTATUIRLO, EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES NACIONALES DE LA CONFORMIDAD DE LOS ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD CON SU PLENA REALIZACIÓN**. El artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que **toda persona tiene derecho** a un medio ambiente sano y, a su vez, **garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de protegerlo,** por lo que sus agentes deben asegurar su respeto y determinar consecuencias para quien provoque su deterioro, como medidas eficaces para su restauración. En estas condiciones, la intención del Constituyente Permanente, al estatuir el derecho humano mencionado, no se limitó a enunciar una norma programática, sino que se proyectó con plena eficacia, en un mandato concreto para **la autoridad, cuya innegable fuerza jurídica la vincula a preservar y conservar el medio ambiente,** lo cual permite que los tribunales nacionales puedan revisar si, efectivamente, las acciones u omisiones de aquélla resultan conformes con la plena realización del derecho humano aludido, a fin de garantizar a la población su desarrollo y bienestar. Así, la protección al medio ambiente así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico, son principios fundamentales que buscó tutelar el Constituyente, y si bien no determinó, concreta y específicamente, cómo debe darse dicha protección, precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación acorde con los principios que lo inspiraron.”[[68]](#footnote-67)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Ahora, es importante que mencionemos a su Señoría que mientras otras industrias buscan la disminución del combustóleo como lo es la Organización Marítima Internacional, no es entendible cómo es que la industria de la energía en México busque promover el consumo del mismo, el cual como se vio en las notas periodísticas que antecedieron, prova la muerte prematura de 25 mil personas anualmente a causa del uso de este combustible y el uso del mismo claramente va en contra de todos los compromisos de México en el plano internacional para atacar el Cambio Climático.[[69]](#footnote-68)

Por lo anterior y a modo de conclusión se puede establecer que los acuerdos emitidos por las responsables, violan mis derechos establecidos dentro del artículo 4 de nuestra CPEUM, así como distintos tratados internacionales y compromisos donde México tiene injerencia y obligación de cumplirlos ya que las autoridades **(i)** limitan y restringen la entrada de fuentes de energía renovables y **(ii)** con estas determinaciones, atentan directamente contra nuestro derecho a un medio ambiente sano y entorpecen los compromisos del país en el plano internacional, por lo que se solicita a su Señoría conceda el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para el efecto de restituirla en el goce de sus derechos fundamentales y revoque los acuerdos emitidos por las autoridades señaladas como responsables.

**TERCERO. SE VIOLA EN PERJUICIO DE LA PARTE QUEJOSA Y DE LA COLECTIVIDAD EL DERECHO HUMANO A LA AUDIENCIA PREVIA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL Y EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO EL DERECHO A LA CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, YA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CONAMER, DE FORMA DISCRECIONAL E INCONSTITUCIONAL DECIDE EXENTAR DE LA CONSULTA PÚBLICA DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS DEL IMPACTO REGULATORIO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 73 DE LA LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA AL ACTO RECLAMADO, AL CONSIDERAR QUE EL ACUERDO DE 15 DE MAYO DE 2020 ESTABLECE ELEMENTOS Y DIRECTRICES SIN QUE IMPLEMENTEN COSTOS DE CUMPLIMIENTO, A PESAR DE QUE EL MISMO ACUERDO TENDRÁ ENTRE SUS CONSECUENCIAS EL AUMENTO DE LA TARIFA POR CONSUMO ELÉCTRICO A TODOS LOS USUARIOS ASÍ COMO AFECTACIONES AL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO. LO ANTERIOR DEJA EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN A TODOS LOS CONSUMIDORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL IMPONER MEDIDAS PARA LA INDUSTRIA QUE SE TRADUCIRÁN EN NUEVOS COSTOS PARA EL CONSUMIDOR Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL AL PROVOCAR DIVERSAS REPERCUSIONES AL MEDIO AMBIENTE SIN HABER SIDO OÍDOS Y VENCIDOS PREVIAMENTE, YA QUE NO FUERON SUJETOS AL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA**

Los Actos Reclamados violentan en mi perjuicio el derecho que me compete al ser usuario del SEN a la garantía de audiencia previa que se encuentra reconocida en el artículo 14 de la CPEUM y en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En términos de tal garantía, se impone a toda autoridad independientemente de su naturaleza, la obligación de oír en defensa a los sujetos a los que se dirige su actuar cuando con su actuar se pretenda afectar su vida, libertad, derechos y/o posesione, que como se demostrará a continuación tiene un efecto negativo en la tarifa. Una vez escuchados sus argumentos, la misma autoridad debe vencerlos con fundamentos válidos y una motivación congruente y exhaustiva con la finalidad de otorgar seguridad jurídica, situación de la que fui privada por las Autoridades Responsables al ser omisas en sujetar los Actos Reclamados al procedimiento de consulta pública. En este caso, las Autoridades Responsables fueron omisas respecto de los procesos y formalidades establecidas en las leyes, tanto en presentar y consecuentemente hacer pública, la Manifestación de Impacto Regulatorio para la emisión de su respectivo Análisis de Impacto Regulatorio establecido en los artículos 69 y 73 de la Ley General de Mejora Regulatoria (en adelante “LGMR”) las cuales fungen como norma reflejo del 14 Constitucional y que establecen la consulta pública a las que deben ser sometidas todas las propuestas de carácter regulatorio.

**I. El artículo 14 de la Constitución Política Mexicana establece la garantía de audiencia y la posibilidad de defensa de los gobernados**

Es obligación de toda autoridad emitir sus actos apegándose a las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual constituye el estándar legal y convencional del debido proceso previsto en nuestra constitución y nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos. En consecuencia, para que un acto de autoridad sea constitucional y produzca consecuencias jurídicas a los gobernados, los Actos Reclamados debieron respetar el debido proceso; esto es, escuchar a las partes y vencer sus argumentos, así como recibir y valorar sus pruebas; si no, es evidente que estamos frente a un acto arbitrario.

Esta relación no puede sujetarse al simple arbitrio de la autoridad, sino a un debido proceso, en el cual, se escuchen los argumentos a esgrimir, para evitar que se deje en un estado de indefensión a los gobernados. En este sentido, el desarrollo que se ha dado de este derecho humano a la audiencia previa, ha ido reconociendo en este, estándares de trato a las partes que permiten garantizar la seguridad jurídica de los gobernados, tal como se ha sostenido en la siguiente jurisprudencia:

**“AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.** De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. **Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados.** Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, **se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige.** Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.**”[[70]](#footnote-69)**

[Énfasis añadido]

Es claro que de la simple lectura de la jurisprudencia, existe una clara relación entre el otorgar a los particulares una audiencia previa conforme al debido proceso y la seguridad jurídica, ya que un sistema que no motiva su actuar en lo contenido en las leyes resulta impredecible, y no puede derivarse de éste una racionalidad sistémica, lo que nos priva de nuestro derecho a la seguridad jurídica para los gobernados que lo sufren, como ha dejado la Autoridad Responsable (CONAMER) a la colectividad, al ser omisa en cumplir con las normas que protegen nuestros derechos humanos, como son los preceptos normativos aplicables de la LGMR como obligación de las autoridades de cumplir con el proceso de consulta pública necesario para oír en defensa a los afectados y no menoscabar sus derechos.

En ese tenor, la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reconocido en múltiples ocasiones como derecho humano el ser oído por la autoridad de manera previa a que sus derechos u obligaciones sean modificadas, y en caso de proceder dicha modificación que la misma esté fundada y motivada en el marco normativo aplicable; solo cumpliendo este proceso de manera debida se puede lograr que las decisiones de las autoridades sean conforme al Pacto de San José y la jurisprudencia Interamericana. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos de manera expresa señala que:

“Artículo 8. Garantías Judiciales

1. **Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.**”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Lo anterior implica que cualquier persona debe ser oída con las debidas garantías previo a cualquier acto que tenga algún tipo de incidencia sobre sus derechos patrimoniales. Los derechos humanos tutelados en el citado artículo y referidos como garantías judiciales, consideran un estándar en el nivel de trato al que debe sujetarse los actos de autoridad que puedan afectar la esfera de derechos de particulares, con la finalidad de que las personas estén posibilitadas a defender previa y adecuadamente sus derechos ante cualquier acto de autoridad que los pudiera afectar.

Todo acto de autoridad debe seguir las formalidades esenciales del procedimiento, siendo éstas las que resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada, que de manera genérica se resumen en: la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar; y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones que ha sido sometidas a debate, los cuales frente a los actos de las autoridades administrativas encuentran una defensa legal refleja en la LGMR. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin del debido proceso, en su faceta del derecho a audiencia, que implica ser oído y vencido con argumentos. Sirve como complemento a lo expresado la siguiente jurisprudencia:

**“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.** Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento**; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas** y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.”[[71]](#footnote-70)

[Énfasis y subrayado añadidos]

De la jurisprudencia transcrita, se desprende que toda autoridad, cualquiera que ésta sea e independientemente de su jerarquía, debe seguir las formalidades esenciales del procedimiento, para que su actuar esté dentro del marco jurídico de su competencia y a su vez pueda brindar con ello seguridad jurídica al gobernado.

A partir de las consideraciones vertidas en el presente concepto, podemos decir que un acto de autoridad ha seguido el debido proceso cuando la autoridad, además de citar los preceptos aplicables escucha los argumentos de las partes y de manera fundada y motivada, explica las razones y motivos que le llevan a considerarlos procedentes, improcedentes o inoperantes, por lo que hace a los argumentos, así como su valoración, igualmente fundada y motivada la racionalidad que le llevo a valorar aquellas en las que aplicó la libre valoración.

Esto implica a su vez que las autoridades deben actuar de una manera previsible, para que los particulares puedan tener la certidumbre jurídica de que el ordenamiento que ha sido decretado se aplicará, conducentemente y apegado al mismo. Los derechos de seguridad y certidumbre jurídica se encuentran establecidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM. Sirven de sustento los siguientes criterios:

**“CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD**. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.** Sin embargo, **no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades**. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos.”[[72]](#footnote-71)

[Énfasis añadido]

Es importante mencionar que la seguridad y certidumbre jurídica implican que los gobernados puedan predecir la forma en que el Estado actuará de acuerdo a lo establecido en nuestro marco Constitucional, dicha garantía encuentra su norma refleja en el principio de legalidad que conmina a las autoridades administrativas a aplicar la Ley con el fin de respetar las formalidades que han sido establecidas en ellas. Esto previene que las autoridades actúen discrecionalmente o con arbitrariedad, aunado al hecho de que esto genera estabilidad y previsibilidad en los gobernados respecto de sus actos, los cuales están determinados por el mismo marco normativo. Sirve de complemento a lo anterior el siguiente criterio:

**“SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.** De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, **se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16**, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual **consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una** **intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse**. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia **del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar**, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, **que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables**, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”[[73]](#footnote-72)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Por lo tanto, siguiendo los criterios interpretativos arriba transcritos, es de explorado derecho que nuestro ordenamiento de manera sistémica requiere de una coherencia y racionalidad respecto del actuar de las autoridades administrativas con el mismo ordenamiento.

**II. La LGMR establece las obligaciones de las autoridades de mejora regulatoria de todos los órdenes de gobierno en la implementación de instrumentos, herramientas y procedimientos de mejora regulatoria**

El artículo 25° de la CPEUM establece las bases de la rectoría económica del país para el desarrollo nacional de forma integral y sustentable, como a continuación se muestra:

“Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. **La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.**

**Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.**

**La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.**

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo**, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.**”

[Énfasis Añadido]

En cumplimiento de dicha obligación las autoridades instituidas del gobierno y obligadas por el artículo 25 de la CPEUM, han establecido una serie de ordenamientos normativos y disposiciones que buscan establecer un proceso de análisis de impactos regulatorios con participación ciudadana. La omisión total o parcial de estos, además de un exceso en el ejercicio de facultades, violan los derechos en su totalidad o de manera parcial, pero siempre siendo dicha violación inconstitucional por no ajustarse a lo establecido por el artículo 14 en comento.

Esto es que todas las autoridades, sin importar el orden de gobierno, sin importar el ámbito de su competencia, están obligadas a implementar políticas públicas de mejora regulatoria con atención a los objetivos de la Ley de la materia. Esto no solamente implica la implementación de políticas públicas de mejora regulatoria, sino que estás se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la Ley con atención a los fines que persigue. Es por lo anterior que dicho procedimiento debe forzosamente cumplir con lo establecido en las leyes que regulan el procedimiento establecido para ello. La LGMR en su artículo 2, establece los objetivos de la Ley:

“Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

1. **Establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las Regulaciones y la simplificación de los Trámites y Servicios;**
2. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;
3. **Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria;**
4. Establecer la creación y el funcionamiento del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, y
5. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los Trámites y la obtención de Servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información.”

[Énfasis Añadido]

Bajo ese orden de ideas, la Ley en comento tiene como objetivo establecer las obligaciones de las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la implementación de instrumentos, herramientas y procedimientos de mejora regulatoria. Esto significa que las disposiciones que se emitan en materia regulatoria se rigen por lo establecido en la Ley y que, al mismo tiempo establecen las formalidades bajo las cuales se definen los criterios a seguir en los procedimientos de dicha materia.

Ahora bien, para efectos del presente concepto de violación, entraremos a identificar el objetivo y la finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio, herramienta de mejora regulatoria establecida en la Ley que mide de forma integral la trascendencia de las propuestas regulatorias.

El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta en los procedimientos de mejora regulatoria que busca que las regulaciones generen el máximo beneficio con el menor costo posible; esto es que los impactos resulten proporcionales para el problema que busca resolver, así como para los sujetos regulados a los que se aplican. Dicho documento establece un marco en el cual se explica la problemática que da origen a la intervención estatal, así como las atenuantes a resolver analizando las alternativas regulatorias que podrían solucionar la problemática evaluando costos y beneficios de las mismas analizando los mecanismos y capacidades de implementación.

Las herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio fueron emitidas con el propósito de establecer un mecanismo que permita la instrumentación y protección de los derechos humanos de los particulares a la audiencia y a la mejora regulatoria con el objetivo de garantizar que los beneficios de las regulaciones a alternativas a una problemática específica en su implementación **sean superiores a sus costos y que a su vez se salvaguarde el interés general.**

Los sujetos obligados, en este caso las autoridades, sin importar el orden de gobierno al que correspondan, están obligadas a presentar junto con las propuestas regulatorias un Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos de ésta treinta días antes de la fecha en que se pretenda publicar dicha propuesta en un medio de difusión oficial, lo anterior de conformidad con el artículo 69 de la LGMR que establece a la letra:

“**Artículo 69.** Los Análisis de Impacto Regulatorio establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los siguientes elementos:

1. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención gubernamental y los objetivos que ésta persigue;
2. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la explicación de por qué la Regulación o Propuesta Regulatoria es preferible al resto de las alternativas;
3. La evaluación de los costos y beneficios de la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos que resulten aplicables para cada grupo afectado;
4. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección;
5. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la Regulación, y
6. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa llevados a cabo para generar la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de Agenda Regulatoria a que se refiere el artículo 64 de esta Ley.

Para efectos de lo previsto en el presente artículo las Autoridades de Mejora Regulatoria podrán requerir información diferenciada de acuerdo a la naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán establecer criterios que los Sujetos Obligados deberán observar a fin de que sus Propuestas Regulatorias mitiguen el impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.”

Como regla general, el Análisis de Impacto Regulatorio debe presentarse con anterioridad a su publicación en un medio oficial, salvo que se trate de una propuesta regulatoria que atienda una situación de emergencia y que esta a su vez: (i) busque evitar un daño inminente a la salud o bienestar de la población, medio ambiente o economía; (ii) tenga una vigencia no mayor a seis meses o renovable una sola vez por el mismo tiempo; (iii) no se haya emitido un acto de contenido equivalente en el tratamiento de la emergencia. Que en el presente caso no se actualizan ninguno de estos supuestos.

**Del mismo modo, la LGMR establece que en caso de que la propuesta regulatoria no implicará costos de cumplimiento para los particulares, previa consulta y aprobación de la autoridad de mejora regulatoria, estará exenta de dicho análisis,** cuestión que como veremos más adelante no se actualizó y por ende, dicha propuesta de mejora regulatoria, estaba OBLIGADA a presentar su respectivo análisis, así como hacerlo público para recibir comentarios antes de su publicación y dar respuesta fundada y motivada a estos; ya que de otra forma se privaría de mi derecho a la consulta y el de todos los afectados por esta medida, es decir, los usuarios y la población en general ya que al implicar el mismo la preferencia a plantas que producen con combustibles fósiles, al estar limitado el acceso a nuevas centrales limpias, al tener los fósiles a un mayor costo de producción, es evidente que siguiendo la metodología para el cálculo del a tarifa emitida por la CRE el costo de la energía y por ende la tarifa se elevaran en consecuencia.

Las propuestas regulatorias que se presentan en los Análisis de Impacto Regulatorio deben ser públicas desde que la Autoridad en materia regulatoria las recibe para que estas sean comentadas por los interesados y posibles afectados durante la consulta pública, la cual no podrá ser menor a veinte días tomando en consideración el impacto de dichas propuestas.

“**Artículo 73.** Las Autoridades de Mejora Regulatoria harán públicos, desde que las reciban, las Propuestas Regulatorias, el Análisis de Impacto Regulatorio, los dictámenes que emitan, las respuestas a éstos, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo y todas las opiniones y comentarios de los interesados que se recaben durante la consulta pública.

Para tal efecto, deberán establecerse plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte días, de conformidad con los instrumentos jurídicos que las Autoridades de Mejora Regulatoria establezcan en el ámbito de su competencia. La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las Propuestas Regulatorias, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante el Manual de Funcionamiento del Análisis de Impacto Regulatorio. Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente la aplicación de plazos mínimos de consulta pública menores a los previstos en esta Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan.”

La LGMR, establece que si el sujeto obligado, entiéndase por esto cualquier autoridad de cualquier orden, considera que la publicación de la propuesta regulatoria compromete los efectos de ésta, no se hará pública, disposición que también se aplicará cuando lo determine la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sin perjuicio de los Tratados Internacionales de los que se forme parte. Si la autoridad determina que la publicidad de dicha propuesta no se ubica en este supuesto se ajustará a los requisitos del Análisis de Impacto Regulatorio. Sin embargo, es importante señalar que el sujeto obligado una vez que se haga pública en un medio oficial la propuesta regulatoria, **deberá también hacer pública la justificación por el cual los efectos de la propuesta regulatoria al hacerla pública comprometían sus efectos,** como lo establece el artículo 74 de la LGMR. Situación que no aconteció en el presente caso.

“**Artículo 74.** (…)

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado que solicite dicho tratamiento, y su justificación será pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión”

Queda manifiesto que la LGMR establece que las autoridades que hayan considerado que la publicación de sus propuestas regulatorias comprometen los efectos de éstas, tendrán la obligación de justificar públicamente las consideraciones que llevaron a dichas autoridades a omitir la obligación de presentar para someter a consulta En este caso, actuando la presentación y publicidad de las propuestas regulatorias establecidas en los artículos 69 y 73 de la LGMR, como norma reflejo del artículo 14 Constitucional; por lo tanto, la Autoridad Responsable al momento de emitir el **[\*ACTO RECLAMADO\*]** de fecha **[\*FECHA DEL ACTO RECLAMADO\*]** violenta mi garantía de audiencia y de la colectividad, al contener éste una serie de propuestas de carácter de carácter regulatorio. Además de señalar que la Autoridad de Mejora Regulatoria discrecionalmente ha decidido no someterse a las formalidades que para ello ha establecido la Ley de la materia por una cuestión meramente nominal. Por lo anterior, a efecto de preservar y garantizar el debido ejercicio de mis derechos humanos, atentamente se pide a ese Juzgador Constitucional conceda el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para el efecto de restituirla en el goce de mis derechos fundamentales

**CUARTO. LOS ACTOS RECLAMADOS VIOLAN LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, EN VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE LEGALIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.**

Como quedará acreditado a lo largo del presente Concepto de Violación, los Actos Reclamados violan la Ley de la Industria Eléctrica, en específico los principios de confiabilidad y de acceso abierto y no discriminatorio, en relación con las Energías Limpias eólicas y fotovoltaicas, que son necesarias para cumplir con las obligaciones del Estado Mexicano en materia de transición energética, para que solo así se evite el aumento de las emisiones de CO2 antropogénicas provenientes de la quema de combustibles fósiles.

Para acreditar lo anterior, a continuación se analizará (i) por qué se abrió la industria eléctrica a los particulares para la generación y comercialización de energía eléctrica, (ii) por qué para proteger a los particulares se incluyó en la Ley de la Industria Eléctrica el principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, (iii) por qué se incluyó en la Ley de la Industria Eléctrica el principio de confiabilidad, (iv) qué mecanismos existen en la Ley de la Industria Eléctrica para garantizar el principio de confiabilidad, para finalmente concluir (v) por qué los Actos Reclamados violan la Ley de la Industria Eléctrica, en específico los principios de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio y confiabilidad, en perjuicio de la sociedad al pretender limitar del mercado eléctrico las Energías Limpias eólicas y fotovoltaicas.

El artículo 25 de nuestra Carta Magna establece que el Estado Mexicano tendrá a su cargo, entre otros, la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a saber:

“Artículo 25. […] El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. **Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución**.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Por su parte, los artículos 27 y 28 Constitucionales establecen lo siguiente:

“**Artículo 27.** (…) **Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica**; en estas actividades no se otorgarán concesiones, **sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica**.”

**Artículo 28.** (…) **No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas**: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; **la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica**, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

De lo anterior se desprende que tratándose de la planeación y control del sistema eléctrico nacional, únicamente las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica son áreas estratégicas, lo que se traduce en que el Estado Mexicano las ejerce de manera exclusiva. Sin embargo, los particulares pueden participar en las demás actividades de la industria, como lo son la generación y comercialización de energía eléctrica.

En este sentido, el artículo 2 de la Ley de la Industria Eléctrica (“LIE”) establece que las actividades que comprende la industria eléctrica son la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica:

“**Artículo 2**.- **La industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica**, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista.

El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público. **La planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, son áreas estratégicas. En estas materias el Estado mantendrá su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares en los términos de la presente Ley.** El Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Así pues, derivado de la reforma energética, se abrió la posibilidad de que los particulares realizarán las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, así como celebrar contratos con el Estado Mexicano respecto a las actividades de transmisión y distribución -al ser éstas últimas áreas estratégicas-.

El motivo de lo anterior, con el objetivo de *(i)* atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país, *(ii)* contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios, *(iii)* aumentar la sustitución de generación de energía a fuentes renovables, *(iv)* permitir la instalación de nuevas centrales eléctricas, a fin de suministrar en mayor potencia la energía eléctrica, *(v)* incrementar el mallado de la red de transmisión e interconectar las zonas del país con alto potencial de energías limpias, *(vi)* que los particulares y la CFE puedan celebrar contratos para el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y *(vii)* generar energía eléctrica bajo el principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a fin de permitir una reducción considerable en los costos de producción del sector eléctrico y hacer posible la mayor participación de energías limpias y más eficientes.

Esto, de conformidad con el documento emitido por el Estado Mexicano titulado “*Explicación ampliada de la Reforma Energética”,* misma que establece lo siguiente*:*

“**Más de 20% de la energía generada para el servicio público se ha generado a partir de combustóleo y diésel, con un costo significativamente mayor a las energías limpias y al gas natural.** **El lento ritmo en la sustitución de dichos combustibles se debe en gran parte a la exclusividad de la CFE para suministrar el servicio público de energía eléctrica.** Si bien ya se permitía la participación de particulares, los proyectos de mayor escala dependían de la planeación de la CFE y se limitaban por las restricciones presupuestales del Estado. **Esto se había convertido en un cuello de botella que impedía desarrollar con máxima velocidad las fuentes potenciales que podrían generar electricidad de bajo costo.**

**Otro de los grandes retos que enfrenta el sector es la falta de inversión en la red de transmisión. Se requiere incrementar el mallado de la red de transmisión e interconectar las zonas del país con alto potencial de energías limpias. Esta expansión debe tomar en cuenta todos los proyectos de generación, sean del Estado o de particulares, a fin de eliminar una de las barreras más importantes al desarrollo de proyectos de tecnología eólica y solar: la falta de capacidad de interconexión**. […]

**En materia de generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permite la apertura a la inversión privada. La participación de particulares, junto con la CFE, en la generación de energía eléctrica permite que la instalación de nuevas centrales se lleve a cabo de forma más flexible.** CFE podrá construir nuevas plantas, modernizar la base de generación e incrementar su competitividad, mientras los particulares podrán instalar nuevas plantas para vender su energía al Mercado Eléctrico Mayorista, a suministradores o usuarios calificados.

**La generación de energía eléctrica bajo reglas de acceso abierto e imparcial, aunado a la participación de particulares en los segmentos de transmisión y distribución y en el desarrollo de la infraestructura asociada, permitirá una reducción considerable en los costos de producción del sector eléctrico y hará posible la mayor participación de energías limpias y más eficientes**. Con la Reforma Energética en materia eléctrica, la planta productiva nacional y los hogares mexicanos contarán con electricidad de calidad, a mejor precio y proveniente de fuentes menos contaminantes.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Así pues, la necesidad de abrir el mercado eléctrico a particulares y permitir la inversión privada al sector energético resultaba una necesidad para mejorar el suministro de energía eléctrica, a fin de contar con mejores precios, calidad y fuentes menos contaminantes; toda vez que -*tal y como se establece en el texto citado-* la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer la demanda de energía dentro de nuestro país, y menos aún tratándose de Energías Renovables.

Lo anterior se robustece con la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, de fecha 29 de abril de 2014, misma que establece lo siguiente:

“**La reforma constitucional en materia de energía**, además de transformar sustancialmente el sector de los hidrocarburos, **modifica estructuralmente la industria eléctrica nacional, que es, sin duda, uno de los motores fundamentales de la planta productiva de nuestro país**.

En efecto, la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, que constituyen las actividades en las que se divide esta industria, representan áreas de oportunidad en las que, conservando la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional y la prestación del servicio público de la transmisión y distribución, **es viable y deseable que se permita la participación de los particulares, en aras de una mayor y mejor oferta de energía eléctrica para todos los mexicanos.**

**Con estas medidas se dará cumplimiento adecuado y efectivo a los principios y derechos fundamentales de carácter económico previstos en el nuevo texto constitucional, permitiendo la concurrencia de diversos actores del sector privado en las actividades e la industria eléctrica**, en los términos de la ley que se propone y, de manera simultánea, salvaguardando los intereses de la Nación y la seguridad, continuidad y eficiencia en el manejo y control de las redes del servicio público, mediante la rectoría del Estado.

**Por otra parte, el Estado deberá regular el acceso abierto a la red de transmisión eléctrica en términos no indebidamente discriminatorios.**”

[Énfasis y subrayado añadidos]

De conformidad con lo anterior, no solo era viable, sino deseable y necesaria la participación de los particulares en el sector energético, en aras de una mayor y mejor oferta de energía eléctrica para todos los mexicanos, así como, poder dar cumplimiento adecuado y efectivo a los principios y derechos fundamentales previstos en el texto constitucional. De manera que, se debe permitir el acceso a la red de transmisión eléctrica en términos no indebidamente discriminatorios, a fin de lograr los objetivos anteriormente planteados.

Dentro de la iniciativa referida nuevamente se establece la necesidad de intervención de los particulares para mejorar la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional, toda vez que el Estado Mexicano no cuenta con los recursos para hacerlo, a consecuencia de las restricciones presupuestales del gasto público, lo que impide desarrollar con máxima velocidad las fuentes de energía a bajo costo, atender la creciente demanda nacional de electricidad y cumplir con las obligaciones que tiene el Estado Mexicano de sustituir las fuentes de generación de energía a renovables:

“**Bajo el esquema constitucional que existía hasta antes de la reforma de diciembre del año pasado, los proyectos de construcción de plantas de generación de mayor escala dependían en exclusiva de la planeación y ejecución del Estado con las restricciones presupuestales naturales del gasto público. Esto se ha convertido en un cuello de botella que impide desarrollar con máxima velocidad las fuentes potenciales que podrían generar electricidad de bajo costo.**

(…)

**Con la reforma constitucional, se sientan las bases para que el andamiaje jurídico permita una mayor inversión en la infraestructura de generación de energía eléctrica, lo que incrementará la producción de electricidad a menores costos y, en consecuencia, generará beneficios tangibles para la población, a través del establecimiento de mejores tarifas para los consumidores de cualquier segmento.**

Asimismo, **como consecuencia de este nuevo escenario en la generación de energía eléctrica, la creación y operación de nuevas plantas en manos de particulares, complementará la capacidad pública, a fin de atender la creciente demanda nacional de electricidad y, en particular, en las regiones o poblaciones del territorio nacional que aún ameritan cobertura**.

**Otra de las problemáticas que han afectado al sector eléctrico nacional es la baja densidad de la red de transmisión. Actualmente, el crecimiento en la demanda de energía eléctrica por parte de la población y de la industria, resulta superior al crecimiento de capacidad de transmisión que se requiere para atenderla con eficiencia**. El proceso de planeación actualmente plantea una expansión de la red de transmisión a una tasa de 1.1% anual promedio al año 2026, lo que resulta menor por mucho al crecimiento esperando de la demanda de electricidad en el país, estimado en 4.1%.

**Con relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta además, que en la actualidad el 47% de las líneas de transmisión nacional tiene más de 20 años de antigüedad y únicamente el 8% han sido construidas en los últimos 5 años, por lo que resulta indispensable incrementar el mallado de la red de transmisión y modernizar su tecnología. En particular, se requieren inversiones importantes a fin de interconectar las zonas del país con alto potencial de energías limpias**.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Así pues, -*de conformidad con lo establecido por el mismo Estado Mexicano*- queda en evidencia que resulta indispensable para mejorar y promover el Sistema Eléctrico Nacional, y sobre todo, para modernizar la Red Nacional de Transmisión, la participación de los particulares, ya que el 47% de las líneas tenían más de 20 años de antigüedad y únicamente el 8% habían sido construidas en los últimos 5 años, antes de la reforma.

En dicho sentido, la Ley de la Industria Eléctrica emitida el 11 de agosto de 2014, establece como obligaciones del servicio público y universal el otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios, a saber:

**“Artículo 4.-** El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.

Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. **Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes**:

I. **Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios**;

II. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad;

III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley;

IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta Ley;

V. **Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables**, y

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE.

(…)

Artículo 33.- **Los Transportistas y los Distribuidores están obligados a interconectar a sus redes las Centrales Eléctricas cuyos representantes lo soliciten, y a conectar a sus redes los Centros de Carga cuyos representantes lo soliciten, en condiciones no indebidamente discriminatorias**, cuando ello sea técnicamente factible. (…)”

[Énfasis y subrayado añadidos]

De lo anterior se concluye que el acceso abierto no indebidamente discriminatorio implica que un interesado puede interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional, y debe de recibir el mismo trato que cualquier otro que se encuentre en las mismas condiciones.

No obstante ello, y como quedará desarrollado a lo largo del presente Concepto de Violación, los Actos Reclamados violan el principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio al pretender limitar la conexión de las Energías Limpias eólicas y fotovoltaicas al Sistema Eléctrico Nacional, bajo el infundado argumento que éstas violan el principio de Confiabilidad establecido en la Ley. Para acreditar lo anterior, a continuación se acredita qué es el principio de Confiabilidad, y como es que dichas Energías Limpias no lo violan, puesto que la propia Ley prevé mecanismos suficientes para satisfacer de manera confiable la demanda de energía en tiempo real.

El objetivo de la Ley de la Industria Eléctrica es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y **garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios**, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes, en los siguientes términos:

**“Artículo 1**.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta Ley son de interés social y orden público.

**Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.”**

[Énfasis y subrayado añadidos]

En dicho tenor, la Ley de la Industria Eléctrica define al principio de Confiabilidad de la siguiente manera:

“Artículo 3.- **Para los efectos de esta Ley, se entenderá por**: […]

(…)

X. **Confiabilidad: Habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho**, conforme a los criterios respectivos que emita la CRE; (…)”

[Énfasis y subrayado añadidos]

De conformidad con el artículo transcrito, la Confiabilidad es la habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios bajo condiciones de suficiencia y seguridad de despacho. A fin de entender en su totalidad el principio de Confiabilidad, es necesario remitirse a lo que establece la LIE por Sistema Eléctrico Nacional y Seguridad de Despacho:

“XLI. **Seguridad de Despacho: Condición operativa en la cual se pueden mantener la Calidad y Continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, en el corto plazo, frente a la falla de un elemento o múltiples elementos del mismo**, conforme a los criterios respectivos que emita la CRE.”

XLIV. **Sistema Eléctrico Nacional**: El sistema integrado por:

a) La Red Nacional de Transmisión;

b) Las Redes Generales de Distribución;

c) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución;

d) Los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y

e) Los demás elementos que determine la Secretaría; (…)”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Así, se desprende que la Seguridad de Despacho implica que se pueda mantener la Calidad y Continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional -arriba definido- en el corto plazo, frente a la falla de un elemento o múltiples elementos del mismo. De igual manera, la Ley define a la Calidad y Continuidad de la siguiente manera:

“II. **Calidad**: Grado en el que las características y condiciones del Suministro Eléctrico cumplen con los requerimientos técnicos determinados por la CRE con el fin de asegurar el correcto desempeño e integridad de los equipos y dispositivos de los Usuarios Finales; “

(…)

XI. **Continuidad**: Satisfacción de la demanda eléctrica de los Usuarios Finales con una frecuencia y duración de interrupciones menor a lo establecido en los criterios respectivos que emita la CRE”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Por todo lo anterior, se puede concluir que el principio de **Confiabilidad** es la habilidad del Sistema Eléctrico Nacional de satisfacer la demanda eléctrica bajo la condición de mantener una frecuencia y duración de interrupciones menor a lo establecido, en el corto plazo, frente a una falla de un elemento o múltiples elementos del Sistema Eléctrico Nacional. En otras palabras, **el principio de Confiabilidad no es otra cosa que la habilidad de mantener de manera continua la demanda de energía de los usuarios frente a una falla de un elemento o múltiples elementos del Sistema Eléctrico Nacional.**

Para asegurar el cumplimiento al principio de Confiabilidad, el legislador reguló diversos mecanismos para cumplir con la demanda de energía eléctrica, **mismas que aplican a todas las Centrales Eléctricas de manera objetiva y no discriminatoria, incluidas por supuesto la eólica y la fotovoltaica**. Lo anterior, puesto que todas las fuentes de energía tienen un grado de variabilidad o intermitencia, y por tanto el legislador previó figuras que pueden ayudar a mitigar dichos elementos que son innatos a las Energías Limpias, **con la finalidad que poder transitar a fuentes de energía renovable, sin afectar el servicio de energía eléctrica.**

Uno de los mecanismos previstos en la Ley de la Industria Eléctrica para cumplir con el principio de Confiabilidad es la figura del Suministrador de Último Recurso, que tiene como objeto asegurar la continuidad en el suministro de energía y en consecuencia asegurar la Confiabilidad del SEN, a saber:

“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: […]

(…)

XLV. **Suministrador**: Comercializador titular de un permiso para ofrecer el Suministro Eléctrico en la modalidad de Suministrador de Servicios Básicos, Suministrador de Servicios Calificados o **Suministrador de Último Recurso** y que puede representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos;

(…)

XLVIII. **Suministrador de Último Recurso: Permisionario que ofrece el Suministro de Último Recurso a los Usuarios Calificados y representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a los Generadores Exentos que lo requieran**. […]

(…)

LI. **Suministro de Último Recurso:** El Suministro Eléctrico que se provee bajo precios máximos a los Usuarios Calificados, por tiempo limitado, **con la finalidad de mantener la Continuidad del servicio cuando un Suministrador de Servicios Calificados deje de prestar el Suministro Eléctrico**;”

(…)

Artículo 48.- (…)

**Los Suministradores de Último Recurso ofrecerán el Suministro de Último Recurso a todos los Usuarios Calificados que lo requieran y cuyos Centros de Carga se encuentren ubicados en las zonas donde operen**, siempre que ello sea técnicamente factible y cumpla con las disposiciones aplicables, **en condiciones no indebidamente discriminatorias.**

En caso de que los Suministradores de Servicios Básicos o los Suministradores de Último Recurso nieguen o dilaten el Suministro Eléctrico, la CRE determinará si existe causa justificada para ello.

(…)

“Artículo 51.- **Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de suministro con un Suministrador**. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. **El Suministro de Último Recurso se preverá en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los Usuarios Calificados**.”

(…)

Artículo 55.- (…)

**Las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y filiales que sean suministradores garantizarán la prestación del Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales del Suministrador de Servicios Básicos** que se encuentre en liquidación hasta que sean transferidos a un nuevo Suministrador.

“Artículo 56.- En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago o de garantía de un Suministrador de Servicios Calificados, o **cuando un Suministrador de Servicios Calificados deje de prestar servicios a un Generador Exento o a un Usuario Calificado por cualquier motivo, sin que éstos hayan elegido otro Comercializador, el Suministrador de Último Recurso correspondiente comprará la producción de los Generadores Exentos y prestará el Suministro de Último Recurso a los Usuarios Calificados afectados, hasta en tanto éstos contraten la compraventa o el Suministro Eléctrico bajo cualquiera de las modalidades existentes**.”

Artículo 57.- **Cuando no exista un permisionario para proveer Suministro de Último Recurso en una zona geográfica o para una clase de usuarios, los Suministradores de Servicios Básicos estarán obligados a ofrecer el Suministro de Último Recurso**. Para este efecto, no se requerirá la separación a que se refiere el artículo 8 de esta Ley.

[Énfasis y subrayado añadidos]

Así, de conformidad con la LIE, el Suministrador de Último Recurso es el permisionario que ofrece suministro eléctrico bajo precios máximos, por tiempo limitado, con la finalidad de mantener la Continuidad del servicio cuando otro Suministrador deje de prestar dicho servicio; en otras palabras, es la figura que regula la LIE para mantener la continuidad del suministro de energía cuando el Suministrador no pueda seguir prestando el servicio por cualquier razón. Y, -de conformidad con el artículo 51 transcrito- la figura del Suministrador de Último Recurso debe preverse en los contratos de suministro de energía, a fin de evitar que el usuario final se quede sin energía eléctrica.

Dicho en otras palabras, el Suministrador de Último Recurso es una figura novedosa creada en la Ley de la Industria Eléctrica que tiene como finalidad atender a los usuarios cuyo suministrador de energía eléctrica privado deje de operar o deje de cumplir con sus obligaciones por cualquier motivo. El Suministrador de Último Recurso comprará la producción de los generadores exentos y prestará el suministro a los usuarios afectados, hasta en tanto a éstos se le provea de energía eléctrica, ya sea por el mismo suministrador o algún otro.

Por otro lado, se deben resaltar las Bases del Mercado Eléctrico, en específico la Base 6 “*Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional*”, dentro de la cual se establecen todos los escenarios y protocolos que deberá seguir el CENACE, a fin de garantizar la Confiabilidad en el SEN:

“6.1 Principios generales

6.1.1 Intervención mínima […]

(b) **El CENACE está obligado a aplicar las disposiciones contenidas en las Bases del Mercado Eléctrico y las demás disposiciones relacionadas en materia de Confiabilidad que emita la CRE**, y evitará realizar intervenciones al despacho económico que no sean estrictamente necesarias para su cumplimiento. […]

(d) **Cuando la intervención del CENACE sea necesaria para garantizar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, debe coordinar sus acciones con los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores y demás actores involucrados**, de acuerdo con lo establecido en el Código de Red y sus disposiciones operativas.”

(…)

(a) Estado Operativo Normal: En este estado operativo, el CENACE opera el Mercado Eléctrico Mayorista conforme a lo señalado en las Reglas del Mercado sin procedimientos excepcionales.

(b) **Estado Operativo de Alerta**:(…)

(ii) Durante el estado operativo de alerta, el CENACE tiene la autoridad para lo siguiente:

(A) **Implementar cualquier acción que impacte a la operación del Mercado Eléctrico Mayorista**, que sea razonable y técnicamente factible.

(B) **Aplicar criterios de excepción para emitir instrucciones de asignación y de despacho de Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito por Confiabilidad.**(…)

(F) Cambiar la topología del Sistema Eléctrico Nacional.

(G) Implementar cualquier otra acción razonable y técnicamente factible, en los términos del Código de Red y sus disposiciones operativas.

(…)

(c) **Estado Operativo de Emergencia**:(…)

(ii) Durante el estado operativo de emergencia, el CENACE tiene la autoridad para lo siguiente:

(A) **Realizar todas las acciones que correspondan al estado operativo de alerta**.

(B) **Despachar las Unidades de Central Eléctrica hasta sus límites de despacho de emergencia**.

(C) **Realizar compras de energía de emergencia**.

(D) Ordenar la desconexión de Unidades de Central Eléctrica con estatus de Operación obligada.

(E) **Ordenar el re-despacho de los recursos** incluidos en los Contratos de Interconexión Legados, en los términos definidos en los mismos contratos.

(F) Ordenar el aplazamiento o la terminación anticipada de las salidas de mantenimiento programadas.

(G) Ordenar la reducción de voltaje en las Redes Generales de Distribución.

(H) Ordenar el corte manual de carga considerada no controlable.

(iii) **El CENACE tendrá como prioridad restablecer el Sistema Eléctrico al Estado Operativo Normal, para poder restablecer la operación normal del Mercado Eléctrico Mayorista.**

(…)

(d) **Estado Operativo Restaurativo**:(…)

(ii) Durante el estado operativo restaurativo, el CENACE tiene autoridad para lo siguiente:

(A) **Realizar todas las acciones que correspondan al estado operativo de emergencia**.

(B) **Ordenar, en su caso, la reconexión manual** de carga considerada no controlable.

(C) **Emitir instrucciones de asignación y de despacho de Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito por Confiabilidad, que permitan llegar nuevamente a un estado operativo normal.**

(D) Modificar, interrumpir o restablecer Transacciones de Importación y Exportación con otros sistemas eléctricos.

(iii) El CENACE, Transportistas, Distribuidores y Participantes del Mercado deben aplicar los procedimientos de restablecimiento del Sistema Eléctrico establecidos en el Código de Red y sus disposiciones complementarias.

[Énfasis y subrayado añadidos]

De igual maneral, el artículo 135 de la LIE establece otro procedimiento para poder asegurar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, a saber:

“Artículo 135.- **El CENACE solicitará la autorización de la CRE para llevar a cabo subastas a fin de adquirir potencia cuando lo considere necesario para asegurar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional**.

Cuando, a juicio del CENACE, una Central Eléctrica cuyo retiro haya sido programado sea necesaria **para asegurar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, el Generador que la represente estará obligado a ofrecer su potencia en la subasta que al efecto se lleve a cabo, basada en los costos de dicha Central Eléctrica y en los términos que defina la CRE**.

**La CRE expedirá las disposiciones de carácter general para la subasta y podrá determinar mecanismos mediante los cuales los costos netos de estos contratos se compartan entre todos los Suministradores y Usuarios Calificados**, o bien, que se cobren a los Suministradores o Usuarios Calificados que, mediante el incumplimiento de sus obligaciones de potencia, hayan ocasionado la necesidad, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.

**La CRE expedirá protocolos para que el CENACE gestione la contratación de potencia en casos de emergencia**; en estos casos, no se requerirá la realización de las subastas a que se refiere el párrafo anterior. Los términos para efectuar la interrupción del servicio en caso de que el Sistema Eléctrico Nacional no esté en condiciones de suministrar la totalidad de la demanda eléctrica se establecerán en las Reglas del Mercado.”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Así, con el fin de dar cumplimiento a la Base 6 de las Bases del Mercado Eléctrico y al artículo 135 de la LIE, la Comisión Reguladora de Energía publicó el 17 de febrero de 2016 el “*Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide los protocolos correctivo y preventivo para que el Centro Nacional del Control de Energía gestione la contratación de potencia en caso de emergencia conforme disponen los artículo 12, fracción XXII, y 135 penúltimo párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica*”, dentro del cual, en el Considerando SEXTO se estableció lo siguiente:

“SEXTO. **Que, con el propósito de atender la Confiabilidad, Continuidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, como dispone el Artículo 42 último párrafo de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados, los protocolos correctivo y preventivo, para que el CENACE gestione la contratación de potencia en caso de emergencia, CONSTITUYEN LOS PROCEDIMIENTOS EXPEDITOS PARA RESPONDER, CUANDO SE PRESENTEN CONDICIONES INMINENTES DE RACIONAMIENTO DEL SUMINISTRO QUE PUEDAN INTERRUMPIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS USUARIOS DEL SEN**.”

[Subrayado añadido]

De lo anterior, se desprende que tanto la Ley de Industria Eléctrica, como las Bases del Mercado Eléctrico, regulan mecanismos y protocolos que se deben de cumplir a fin de que el SEN opere bajo el principio de Confiabilidad, y, además, la Comisión Reguladora de Energía emitió un acuerdo dentro del cual se regula tanto el protocolo preventivo como correctivo para que el CENACE gestione la contratación de potencia en caso de emergencia.

Es decir, ya existen regulaciones con el objetivo de que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia de todo el Sistema Eléctrico Nacional -sin importar la fuente de generación de las Centrales Eléctricas- se reduzcan a un mínimo.

Una vez acreditado qué se entiende por el principio de Confiabilidad establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, y cuáles son los mecanismos establecidos por el propio legislador para cumplir con dicho principio, previendo que las Energías Limpias pueden llegar a ser intermitentes, resulta clara la inconstitucionalidad de los Actos Reclamados al incluir elementos no previstos en la legislación aplicable, que violan no solo el principio de Confiabilidad, sino también el principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, al pretender eliminar del mercado las Energías Limpias derivadas de fuentes eólicas y fotovoltaicas.

Para acreditar lo anterior, resulta pertinente analizar el objetivo previsto dentro de los Actos Reclamados:

“**Que la presente Política contempla de manera más ordenada la penetración de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaicas y eólicas, previendo que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia se reduzcan a un mínimo de acuerdo a las experiencias internacionales, disminuyendo en lo posible las salidas forzadas asociadas a la generación, particularmente peligrosas en las rampas de salida y puesta del sol, así como en las horas críticas del Sistema Eléctrico Nacional y que exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico Nacional, así como a los Usuarios Finales**.”

1. Objetivo

1.1.  **El objetivo de la presente Política es establecer lineamientos generales que permitan a las autoridades competentes dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 de la LIE, a efecto de garantizar el suministro eléctrico, bajo el principio de Confiabilidad, según se define en ese mismo ordenamiento, en su artículo 3, párrafo primero, fracción X, a fin de operar, regular y supervisar el Funcionamiento Eficiente del SEN, en concordancia con los artículos 1, 25, 27 y 28 de la CPEUM y demás disposiciones citadas en los considerandos de la emisión de este instrumento.**

(…)

[Énfasis y subrayado añadidos]

Contrario a lo establecido por la Ley de la Industria Eléctrica respecto al significado del principio de Confiabilidad, y adicionando elementos no previstos en la legislación aplicable, la Secretaría de Energía identifica como “criterios de confiabilidad” para determinar la viabilidad de una solicitud de interconexión: la dispersión geográfica en la penetración de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia, las características climatológicas de cada punto de interconexión por zona, el espaciamiento entre las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, entre otros, con la única finalidad de excluir del mercado a las energías renovables eólicas y fotovoltaicas. Es decir, de conformidad con los Actos Reclamados, para definir que una Central Eléctrica cumple con el principio de Confiabilidad y por lo tanto es viable su interconexión, es necesario -supuestamente- estudiar las características climatológicas del punto de interconexión y la dispersión geográfica del solicitante.

Sobra decir que los elementos previstos en los Actos Reclamados -dispersión geográfica, características climatológicas o espaciamiento entre Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente- son requisitos no previstos en la legislación aplicable y va más allá de la misma, en violación al derecho humano de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Dicho en otras palabras, los supuestos “criterios de confiabilidad” establecidos en los Actos Reclamados limitan la interconexión de Energías Limpias eólicas y fotovoltaicas al Sistema Eléctrico Nacional, en violación a la legislación aplicable, en perjuicio de la sociedad, aumentando la quema de combustibles fósiles para el suministro de la energía eléctrica nacional, por pretender interpretar un principio que está muy claro en la Ley de la Industria Eléctrica, y donde se prevén mecanismos para mitigar cualquier intermitencia de cualquier Central Eléctrica, bajo el principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio.

Se insiste, las Energías Limpias eólicas y fotovoltaicas siempre han tenido intermitencia en su generación, por tanto y para cumplir con los compromisos internacionales, en la LIE se prevén los mecanismos arriba referidos para mitigar cualquier falta de generación de las mismas. Es decir, con los mecanismos ya establecidos en la normatividad vigente se garantiza el principio de Confiabilidad, entendido éste como la capacidad de satisfacer la demanda de los usuarios ante una falla de la infraestructura del SEN, por parte de cualquier Central Eléctrica -sin discriminación alguna-.

De considerar que los mecanismos establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica no son suficientes para garantizar el principio de Confiabilidad, será el poder legislativo quien tenga que modificar o ampliar dicha regulación, y no así las Autoridades Responsables a través de un acuerdo administrativo, para respetar el principio de división de poderes.

Lo anterior sin olvidar que *la ratio* de la apertura al sector privado al Mercado Eléctrico era que el Estado Mexicano no cuenta con los recursos suficientes para *(i)* cumplir con la demanda de energía eléctrica en el país, *(ii)* mantener una infraestructura óptima en el SEN para evitar la pérdida de energía y *(iii)* cumplir con las obligaciones de transición de energía a fuentes renovables, y, al limitar de manera arbitraria la participación de los particulares, en específico de Energías Limpias, no solo va en contra del objeto de la Ley de la Industria Eléctrica y los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna, sino que -*dicho por el mismo Estado Mexicano*- resultaría imposible que la Secretaría de Energía y las Empresas Productivas del Estado operaran de manera individual el Sistema Eléctrico Nacional.

Por lo anterior resulta claro que la emisión de los Actos Reclamados constituye un evidente retroceso al sector energético de nuestro país, y por lo tanto se solicita a su Señoría conceder el Amparo y Protección de la Justicia la Unión para dejar sin efectos los Actos Reclamados al violar la Ley de la Industria Eléctrica, en específico el principio de confiabilidad y de acceso abierto y no discriminatorio, en relación con las Energías Limpias eólicas y fotovoltaicas, que son necesarias para cumplir con las obligaciones del Estado Mexicano en materia de transición energética, para que solo así se evite el aumento de las emisiones de CO2 antropogénicas provenientes de la quema de combustibles fósiles.

**QUINTO. LOS ACTOS RECLAMADOS VIOLAN LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL ESTADO MEXICANO DE TRANSITAR A FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS -TRANSICIÓN ENERGÉTICA-**

Como quedará acreditado a lo largo del presente Concepto de Violación, los Actos Reclamados violan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de Paris, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, así como la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Limpios y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, en violación a los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 133 de nuestra Carta Magna.

Aunado a la violación internacional y nacional referida, los Actos Reclamados pretenden generar energía eléctrica aumentando la quema de combustibles fósiles -combustóleo y diésel-, generando Gases Efecto Invernadero, aumentando las emisiones de CO2 antropogénicas, y afectando en consecuencia al Planeta Tierra, a los ecosistemas y la vida humana, obviando que en la legislación mexicana se prevén mecanismos para compensar e integrar diversas fuentes de energía intermitente para satisfacer la demanda y cumplir con los principios de confiabilidad y seguridad de despacho, y así mantener la calidad y continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional.CC

A fin de entender en su totalidad el impacto negativo que tienen los Actos Reclamados -no solo frente a México, sino ante el mundo-, resulta necesario mencionar qué son los Gases de Efecto Invernadero (“GEI”) y cuál es la importancia de mantener los niveles de sus emisiones dentro de los límites establecidos por las organizaciones mundiales.

Los Gases de Efecto Invernadero son cualquier compuesto gaseoso atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo, atrapando y manteniendo el calor de la atmosfera; estos compuestos gaseosos pueden ser el vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano, óxido de nitrógeno, etcétera.

Es importante resaltar que los Gases Efecto Invernadero son necesarios para mantener la temperatura promedio de la superficie terrestre. Sin embargo, la concentración atmosférica del dióxido de carbono ha aumentado de manera anormal por las emisiones de CO2 antropogénicas (creadas por la actividad humana), mismas que provienen de la quema de combustibles fósiles, tales como el petróleo, carbón y gas natural, provocando que la temperatura de la Tierra aumente a niveles por encima de los que, tanto los humanos como todos los seres vivos, podemos resistir.

Por lo anterior, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (“IPCC”) emitió el *“informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1.5°C por encima de los niveles preindustriales y las vías de emisión de gases de efecto invernadero globales relacionadas, en el contexto del fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza”*, a fin de establecer *(i)* cuál es la importancia de no pasar lo niveles máximos de temperatura -por debajo de los 1.5°C-; *(ii)* cuáles serían los posibles impactos y riesgos de sobrepasar las temperaturas máximas -tanto para el planeta como para la salud-; *y (iii)* la necesidad de transitar de la fuente de generación de energía de combustión de combustible fósil (petróleo, carbón, gas natural) a energía renovable (eólica, fotovoltaica), a saber:

*“El clima global ha cambiado en relación con el período preindustrial, y existen múltiples líneas de evidencia de que estos cambios han tenido un impacto en los organismos y ecosistemas, así como en los sistemas humanos y el bienestar. […]*

***El sobrepasar plantea grandes riesgos para los sistemas naturales y humanos, especialmente si la temperatura en el calentamiento máximo es alta, porque algunos riesgos pueden ser duraderos e irreversibles, como la pérdida de algunos ecosistemas.*** *La tasa de cambio para varios tipos de riesgos también puede tener relevancia, con riesgos potencialmente grandes en el caso de un aumento rápido de las temperaturas excesivas, incluso si se puede lograr una disminución de 1.5 ° C a fines del siglo XXI o más tarde. Si se va a minimizar el exceso, el presupuesto equivalente de CO 2 restante disponible para emisiones es muy pequeño,* ***lo que implica que se requieren esfuerzos globales grandes, inmediatos y sin precedentes para mitigar los gases de efecto invernadero****. […]*

***Se prevé que el calentamiento más fuerte de los extremos calientes se produzca en el centro y el este de América del Norte, el centro y el sur de Europa, la región del Mediterráneo (incluido el sur de Europa, el norte de África y el Cercano Oriente), Asia occidental y central y el sur de África****.* ***Se espera que el número de días excepcionalmente calurosos aumente más en los trópicos, donde la variabilidad de temperatura interanual es más baja;*** *Por lo tanto, se prevé que las olas de calor extremas emerjan más temprano en estas regiones, y se espera que ya se generalicen allí a 1.5 ° C de calentamiento global.* ***Limitar el calentamiento global a 1.5 ° C en lugar de 2 ° C podría ocasionar que alrededor de 420 millones de personas menos estén expuestas con frecuencia a olas de calor extremas, y aproximadamente 65 millones de personas menos expuestas a olas de calor excepcionales, asumiendo una vulnerabilidad constante****.”*

*“****La transición del sistema energético que se requeriría para limitar el calentamiento global a 1.5 ° C por encima de las condiciones preindustriales está en marcha en muchos sectores y regiones de todo el mundo. La viabilidad política, económica, social y técnica de las tecnologías de almacenamiento de energía solar, eólica y electricidad ha mejorado drásticamente en los últimos años, mientras que la captura y almacenamiento de energía nuclear y dióxido de carbono (CCS) en el sector eléctrico no han mostrado resultados similares****.”*

*(Énfasis añadido)*

De esta manera, de conformidad con lo establecido por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, para mantener las emisiones de CO2 antropogénicas a los niveles máximos establecidos y la necesidad de transitar las fuentes de generación de energía a renovables -eólica y fotovoltaica- es de suma importancia, toda vez que, de no hacerlo podría significar la pérdida de diversos ecosistemas e incluso la muerte de miles de millones de personas. Es decir, solucionar el problema del calentamiento global se vuelve crucial para mantener nuestra propia supervivencia como humanidad, y con esa seriedad debe ser juzgado.

Por lo anterior, con el propósito de reducir las emisiones de CO2 antropogénicas, transitar a nuevas fuentes de generación de energía y evitar que aumente la temperatura de la Tierra -*ya que causaría desastres irreversibles para la humanidad*-, se han celebrado distintos tratados internacionales a fin de solucionar este problema, -mismos que el Estado Mexicano ha ratificado-.

En 1992 se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (“Convención Marco sobre Cambio Climático”) -*México ratifica en 1994*- con el objeto de lograr la estabilidad de las concentraciones GEI antropogénicas, dentro del cual se establecieron distintos Principios entre los Estados Parte, tales como proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras. De igual manera, en el artículo 4, numeral 2, inciso a) de la Convención Marco sobre Cambio Climático se pactó el siguiente Compromiso:

*“2. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes incluidas en el anexo I se comprometen específicamente a lo que se estipula a continuación:*

*a)* ***Cada una de esas Partes adoptar políticas nacionales y tomar las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero****. Esas políticas y medidas demostraron que los países desarrollados (sic) está tomando la iniciativa en lo que respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropogénicas de manera acorde con el objetivo de la presente Convención […]”*

*(Énfasis añadido)*

Aunado a lo anterior, en 1997 se celebra la adhesión a la referida Convención, el “Protocolo de Kyoto” -*México ratifica en el año 2000*-, mismo que se crea con el propósito de establecer compromisos jurídicamente vinculantes sobre la reducción y/o limitación de emisiones GEI y establecer un calendario de cumplimiento.

Dicho calendario cuenta con dos periodos de cumplimiento, el primero va del 2008 al 2012 y el segundo que va del 2013 al 2020– acordado en la 18va Conferencia de las Partes del Convención Marco sobre Cambio Climático por medio de la Enmienda de Doha en Qatar- -*México ratifica en 2014*-; el cual tiene como objetivo crear instrumentos que fomenten las acciones en contra del cambio climático y reducir el total de emisiones de Gases Efecto Invernadero en un 18%, por debajo de los niveles que se tuvieron en 1990.

Por otro lado, en el 2015 se celebró la 21va Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático con el fin de crear el Acuerdo de Paris -*México ratifica en el 2016*- con el fin de asumir compromisos en contra del cambio climático y en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable; **es importante resaltar que dentro de dicho documento el Estado Mexicano se comprometió a reducir un 25% los Gases Efecto Invernadero, generar el 35% de la energía mediante energías limpias para el 2024 y el 43% de la energía limpia para el 2030.**

Así pues, el interés de mantener las emisiones de CO2 antropogénicas a los niveles máximos establecidos y la necesidad de transitar las fuentes de generación de energía a renovables, es una preocupación internacional que lleva más de una década, donde países de todo el mundo -incluido México- han buscado que se tomen las medidas tanto internacionales como nacionales para hacer frente a este problema que atenta con nuestra supervivencia.

Es importante recordar que las emisiones de CO2 antropogénicas provienen de la combustión de combustibles fósiles, tales como el petróleo, carbón y gas natural, provocando que la temperatura de la Tierra aumente a niveles por encima de los que, tanto los humanos como todos los seres vivos, podemos resistir.

Derivado de los tratados internacionales que ha firmado y ratificado el Estado Méxicano, se ha adaptado una política nacional correspondiente a mitigar el cambio climático, limitar las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, transitar a energías renovables, y proteger el medio ambiente.

Así pues, los artículos 2 fracción II, 7 fracción VI, 33 fracción III, 34 y 102 fracción III de la Ley del Cambio Climático establecen lo siguiente:

*“Artículo 2.* ***Esta Ley tiene por objeto****: […]*

***II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático****”*

*“Artículo 7.* ***Son atribuciones de la federación*** *las siguientes: […]*

*VI.* ***Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con*** *esta Ley,* ***los tratados internacionales aprobados*** *y demás disposiciones jurídicas aplicables, en las materias siguientes: […]”*

*“Artículo 33.* ***Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son****: […]*

*III.* ***Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS DEL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA****;”*

*“Artículo 34.* ***Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes*** *[…]”*

*“Artículo 102.* ***En materia de mitigación al cambio climático*** *la evaluación se realizará respecto de los objetivos siguientes: […]*

*III.* ***SUSTITUIR DE MANERA GRADUAL EL USO Y CONSUMO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES POR FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA****;”*

*(Énfasis añadido)*

De lo anterior se desprende que, - a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 inciso a) de la Convención Marco sobre Cambio Climático- se emitió la Ley General del Cambio Climático, a fin de regular las emisiones de Gases Efecto Invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de concentraciones en la atmósfera a nivel internacional, por lo que, se le atribuyó a la Federación la facultad de establecer, regular e instrumentar las acciones necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con los tratados internacionales aprobados, con el propósito de **promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía.**

Aunado a lo anterior, el artículo Tercero Transitorio del referido ordenamiento establece las metas que el Estado Mexicano deberá cumplir para el año 2020 y 2024 -*mismas que se pactaron en el Acuerdo de Paris*-:

*“ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. […]*

*c)* ***Para el año 2020****, acorde con la meta-país en materia de reducción de emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,* ***deberán haber generado en forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles****;*

*d)* ***Para el año 2020****, acorde con la meta-país en materia de reducción de emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía,* ***deberán tener constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, la solar y la minihidráulica por parte de la Comisión Federal de Electricidad,*** *y*

*e)* ***La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024****.”*

*(Énfasis añadido)*

Así pues, de conformidad con la Ley General del Cambio Climático y los tratados internacionales que el Estado Mexicano es parte, para el año en cuestión -2020- el Estado Mexicano debió haber generado en forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles y la eficiencia energética, así como tener constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, solar y minihidráulica. Y, de igual manera para el año 2024, la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad promoverán las acciones necesarias para que la generación eléctrica provenga de fuentes de energías limpias por lo menos el 35% de la energía total -situación que es limitada y violada por los Actos Reclamados-.

Por otro lado, y a fin de apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático y los tratados internacionales que el Estado Mexicano es parte, así como promover el aprovechamiento energético de recursos renovables, se emitió la Ley de Transición Energética, misma que regula lo siguiente:

*“Artículo 2.- Para los efectos del artículo anterior, el objeto de la Ley comprende, entre otros: […]*

*VII.* ***Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de reducción de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia****; […]*

*(…)*

*IX.* ***Promover el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos****”*

*“Artículo 14.- Para efectos de esta Ley,* ***corresponde a la Secretaría****: […]*

*IV.* ***Promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de generación y Aprovechamiento de Energías Limpias y el Aprovechamiento sustentable de la energía****, […]*

*VII.* ***Incorporar la instalación de Centrales Eléctricas con Energías Limpias en la planeación indicativa del crecimiento de la infraestructura eléctrica*** *[…]*

*XVI.* ***Promover,*** *en condiciones de sustentabilidad económica,* ***la construcción de las obras de infraestructura eléctrica que redunden en un beneficio sistémico y faciliten la interconexión de Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional****;”*

*(Énfasis añadido)*

De conformidad con el ordenamiento citado, es obligación de la Secretaría de Energía *(i)* promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de generación y aprovechamiento de energías limpias, *(ii)* incorporar la instalación de Centrales Eléctricas con Energías Limpias -eólicas y fotovoltaicas- en la planeación indicativa del crecimiento de la infraestructura eléctrica y, *(iii)* promover la construcción de las obras de infraestructura que faciliten la interconexión de Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional.

Aunado a lo anterior, los artículos 21 y 22 del citado ordenamiento jurídico establecen que la Secretaría de Energía deberá emitir instrumentos de planeación de la política nacional de energía en materia de *Energías Limpias y Eficiencia Energética*, mismas que deberán constituirse en políticas obligadas para el desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector energético, a saber:

“*Artículo 21.-* ***Son instrumentos de planeación de la política nacional de energía en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética los siguientes:***

*I. La Estrategia […]”*

*“Artículo 22.-* ***Los instrumentos de planeación listados en el artículo 21 de esta Ley deberán constituirse en políticas obligadas para el desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector energético*** *y otros sectores que contengan elementos* ***en materia de Energías Limpias*** *que influyan en políticas públicas […]”*

*(Énfasis añadido)*

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Energía el 26 de abril de 2018 emitió la “*Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Limpios*” (la “Estrategia”), donde se establecen las metas que debe cumplir el Estado Mexicano respecto a la implementación de energías limpias, de conformidad con los tratados internaciones y la legislación aplicable:

*“Numeral 5.2. LAS METAS.*

***Los escenarios y metas que se establecen en la Estrategia parten de manera fundamental de lo que fijan la LTE y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), y se reflejan en una contribución de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Cambio Climático (LGCC), y en instrumentos que de ellas derivan, tales como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y la Contribución Nacionalmente Determinada de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).****”*

*“Numeral 5.3. ENERGÍAS LIMPIAS.*

***En lo que corresponde a energías limpias, el artículo tercero transitorio de la LTE mandata a la SENER a fijar como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024.****”*

*(Énfasis añadido)*

Por consiguiente, de conformidad con el numeral 5.3 de la Estrategia emitida por SENER -*así como del artículo TERCERO TRANSITORIO de la Ley del Cambio Climático y el Acuerdo de Paris*-, **la Secretaría de Energía debe realizar y promover las acciones necesarias para obtener una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 30% para 2021 y del 35% para el 2024.**

De igual manera, la Secretaría de Energía el 31 de mayo de 2018 emitió el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (“PRODESEN”), donde se estableció lo siguiente:

*“Capítulo IV.* ***Nueva Política Energética en Materia de Electricidad****.*

*Principios.* ***Aumentar la generación eléctrica con energías limpias y renovables, y cumplir con los compromisos en relación al cambio climático y reducción de emisiones****”*

*“IV. 3* ***Política de transición energética*** *[…]*

***La Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático en sus artículos transitorios, establecen que para el año 2024, México deberá tener una participación mínima de Energías Limpias en la generación de energía eléctrica de al menos 35%, meta que se establece en el presente PRODESEN****.”*

*(Énfasis añadido)*

De lo anterior no queda la menor duda que dentro de las obligaciones que tiene la Secretaría de Energía en materia de transición energética, es obtener una participación de energías limpias para la generación de energía eléctrica del 25% para 2018, de 30% para 2021 y 35% para 2024.

A fin de robustecer y evidenciar aún más las obligaciones que tiene el Estado Mexicano -y en específico la Secretaría de Energía- de cumplir las metas pactadas relativas a la transición energética, resulta necesario resaltar lo establecido en el artículo 33 fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

*“Artículo 33.-* ***A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos****: […]*

*IV.* ***Promover que la participación de los particulares en las actividades del sector sea en los términos de la legislación y de las disposiciones aplicables****;*

*V. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las disposiciones aplicables.* ***La planeación energética deberá atender los siguientes criterios:*** *la soberanía y la seguridad energéticas, el mejoramiento de la productividad energética, la restitución de reservas de hidrocarburos, la diversificación de las fuentes de combustibles,* ***la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la mayor participación de las energías renovables en el balance energético nacional****, la satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la mayor eficiencia de su producción y uso, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado del sector energético, y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales en materia energética;”*

*(Énfasis añadido)*

Por todo lo anterior, se concluye que el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones a nivel internacional:

1. De conformidad con laConvención Marco sobre Cambio Climático, el Estado Mexicano se comprometió a adoptar políticas nacionales y tomar medidas correspondientes para mitigar el cambio climático, limitando las emisiones antropogénicas de Gases Efecto Invernadero, es decir, limitar y reducir la combustión de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural) y fomentar la energía renovable (eólica, fotovoltaica),y,
2. De conformidad con el Acuerdo de Paris, el Estado Mexicano se comprometió a reducir en un 25% los Gases Efecto Invernadero y generar el 25% de la energía eléctrica mediante energías limpias para el año 2018, 35% para el año 2024 y el 43% de la energía para el 2030, de manera progresiva. .

Asimismo, y en cumplimiento a sus compromisos internacionales, a nivel nacional se establecen las siguientes obligaciones:

1. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático.
2. Establecer las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con los tratados internacionales.
3. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía; así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía.
4. Para el año 2020 haber generado un sistema de subsidios que promuevan las mayores ventajas del uso de combustible no fósiles, así como constituido un sistema de incentivos que promuevan y permitan hacer rentable la generación de electricidad a través de energías renovables como eólica y fotovoltaica.
5. Para el 2024 promover que la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes de energías limpias alcance por lo menos el 35% del total de la energía.
6. Promover los compromisos internacionales en materia de generación y aprovechamiento de energías limpias.
7. Incorporar la instalación de Centrales Eléctricas con Energías Limpias en la planeación indicativa del crecimiento de la infraestructura eléctrica.
8. Promover la construcción de las obras de infraestructura que faciliten la interconexión de Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional.
9. Realizar la planeación energética bajo el criterio de reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, y la mayor participación de energías renovables en el balance energético nacional.

Dichas obligaciones se incumplen por parte de las Autoridades Responsables dentro de los Actos Reclamados, toda vez que los mismos tienen por objeto implementar nuevos criterios para definir la viabilidad de las solicitudes de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional por parte de Energías Limpias provenientes de centrales eólicas y fotovoltaicas. Es decir, los Actos Reclamados limitan el acceso a las Centrales Eléctricas eólicas y fotovoltaicas, al pretender establecer como base para decidir la procedencia de la interconexión, la variabilidad climatológica del punto de interconexión del solicitante, factor que es únicamente relevante para dichas Energías Limpias -eólica y fotovoltaica-..

Dicho en otras palabras, las Autoridades Responsables pretenden a través de los Actos Reclamados restringir de manera injustificada el acceso al Sistema Eléctrico Nacional únicamente a las Centrales Eléctricas con energías limpias eólicas y fotovoltaicas, bajo el infundado argumento que éstas tienen energía intermitente derivado de variables climatológicas.

Es importante mencionar que todas las fuentes de energía tienen un grado de variabilidad o intermitencia, pero se prevé en diversas legislaciones internacionales, incluida por supuesto en la mexicana, la integración de diversas fuentes de energía para crear un sistema eléctrico que pueda satisfacer de manera confiable la demanda de energía en tiempo real. Así, y como quedará desarrollado en el siguiente Concepto de Violación, la normativa mexicana prevé la intermitencia de las energías eólicas y fotovoltaicas y por tanto prevé mecanismos para compensar e integrar diversas fuentes de energía para satisfacer la demanda y cumplir con los principios de confiabilidad y seguridad de despacho, para mantener la calidad y continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

No obstante lo anterior, es decir que existen mecanismos en la normatividad aplicable para cumplir con los principios de confiabilidad y seguridad de despacho en relación con energías eólicas y fotovoltaicas, las Autoridades Responsables pretenden dentro de los Actos Reclamados negar el acceso a las Centrales Eléctricas de energías limpias atendiendo a variables climatológicas y dispersión geográfica. Lo anterior, trae como consecuencia que, contrario a las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano, aumenten las emisiones de CO2 antropogénicas provenientes de la quema de combustibles fósiles para obtener el restante 100% de la energía eléctrica nacional.

Es decir, la negativa por parte de las Autoridades Responsables de conectar al Sistema Eléctrico Nacional las Energías Limpias, como se prevé en los Actos Reclamados, implica necesariamente que la energía eléctrica nacional provenga de la combustión de energías fósiles (Gases Efecto Invernadero), con ello violando el Acuerdo de Paris, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, entre otros, donde el Estado Mexicano se comprometió a reducir en un 25% los Gases Efecto Invernadero y generar el 25% de la energía eléctrica mediante energías limpias para el año 2018, 35% para el año 2024 y el 43% de la energía para el 2030, de manera progresiva -y nunca de manera regresiva-.

Los Actos Reclamados aunado a violar la normatividad internacional y nacional referida, **van a provocar que la temperatura de la Tierra aumente a niveles por encima de los que, tanto los humanos como todos los seres vivos, podemos resistir.**

Por todo lo anterior, resulta inconcuso que los Actos Reclamados violan los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha ratificado, así como la Ley General del Cambio Climático y la Ley de Transición Energética.

Asimismo, y por lo que hace a la Autoridad Responsable Secretaría de Energía, viola la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y revoca sus propias determinaciones establecidas en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Limpios y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, violando a su vez el derecho humano de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 Constitucional.

Se insiste, la peor afectación por parte de los Actos Reclamados, no es la violación al derecho humano de legalidad y seguridad jurídica -que sin duda se actualiza-, sino la afectación a la Tierra, a los ecosistemas y la vida humana, al pretender aumentar la quema de combustibles fósiles para satisfacer la demanda de energía eléctrica nacional, cuando las Energías Limpias pueden cumplir con el mismo objetivo. Resulta claro que los factores climatológicos son un pretexto para sacar del mercado a las Energías Limpias, ya que en la legislación mexicana se prevén mecanismos para compensar e integrar diversas fuentes de energía para satisfacer la demanda y cumplir con los principios de confiabilidad y seguridad de despacho, y así mantener la calidad y continuidad de la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Por lo anterior, se solicita a su Señoría conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para dejar sin efectos los Actos Reclamados, al violar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de Paris, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, así como la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Limpios y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, en violación a su vez de los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 25, 27, 28 y 133 de nuestra Carta Magna. Lo anterior, aunado a la afectación a la Tierra, los ecosistemas y la vida de los seres humanos, al pretender emitir sin límite alguno Gases Efecto Invernadero.

**SEXTO. LOS ACTOS Y OMISIONES SON CONTRARIOS A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y VIOLAN EL DERECHO HUMANO DE LA PARTE QUEJOSA AL ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU VERTIENTE DE POBREZA ENERGÉTICA.**

**I. EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN SU VERTIENTE DE POBREZA ENERGÉTICA.**

**La energía eléctrica representa un insumo esencial** para el desarrollo de una persona y de una sociedad. En una era tecnológica como la que vivimos, la “luz” representa el presupuesto para la satisfacción de necesidades básicas y múltiples satisfactores como lo son: la conservación de alimentos, medicinas, ventilación, servicios de seguridad, telecomunicaciones, higiene y el funcionamiento del entramado industrial del país, imprescindibles para mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de crecimiento. En otras palabras, **ante su ausencia, se carecería de servicios básicos para la vida digna**. Esto es, se viviría en una condición de pobreza provocada por la ausencia del servicio esencial que es la energía limpia y asequible[[74]](#footnote-73).

**¿Cómo sería su vida si viviera en un hogar sin servicio de energía eléctrica?** No podría refrigerar alimentos, incluso cocinarlos, no tendría acceso a los medios de comunicación electrónicos, no correo, no laptop, no celulares, no redes sociales, no formas de entretenimiento, no televisión, no radio, no Internet, se dificultaría el suministro de agua, las posibilidades de estudiar o trabajar por las partes se verían radicalmente reducidas, se limitaría el transporte, en las noches prácticamente no se podrían llevar a cabo las actividades y aumentaría el índice de seguridad, por poner algunos ejemplos [[75]](#footnote-74).

Cuando las personas que habitan un hogar no satisfacen las necesidades absolutas de energía -“Subsistencia”, “Protección”, “Entendimiento”, “Placer” y “Creación”-, relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales, entonces podemos decir que ese hogar se encuentra en pobreza energética.[[76]](#footnote-75) Es decir, **si una persona no satisface las necesidades humanas relacionadas con los usos de energía, no ejerce entonces sus derechos, lo cual implica una situación de pobreza**[[77]](#footnote-76)**.**

La demanda para satisfacer las necesidades energéticas de una población se erige entonces como una tarea de Estado insoslayable y prioritaria. La discusión versa sobre la forma en que los Estados procuran abastecer de este bien esencial a la población. Al respecto, las preocupaciones ambientales a nivel mundial han generado un gran cambio en la forma de encarar el futuro energético, por lo que actualmente se busca un desarrollo sustentable que proporcione el crecimiento económico que se requiere, pero con respeto al medio ambiente y con equidad social, el cual permita satisfacer las necesidades de nuestra sociedad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras[[78]](#footnote-77) .

El presente concepto de violación tiene por objeto demostrar cómo es que los Actos Reclamados **violan el derecho humano de acceso a la energía eléctrica que lejos de plantear políticas que con miras a superar la pobreza energétic**a, **la acrecientan**, violando con ello, los artículos, 4,5,6 y 7 de la Constitución, y en los distintos tratados internacionales que promueven los derechos sociales, económicos y culturales, como lo son, los artículos 11 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 11, numeral 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador, el artículo 2, inciso h de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social; así como el derecho al mínimo vital con el que cuenta toda persona para contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Lo anterior, por **encarecer su costo injustificadamente, y reducir las posibilidades de la parte quejosa para satisfacer de forma asequible las necesidades absolutas de energía con energía limpia y asequible**.

Para ello, el presente concepto se divide en los siguientes apartados: **(i)** los fundamentos del derecho humano al acceso a la energía eléctrica; **(ii)** la energía eléctrica que merecemos; **(iii)** la pobreza energética, **(iv)** las energías renovables como opción ante la pobreza energética; y **(v)** cómo los Actos Reclamados violan el derecho humano de acceso a la energía de la parte quejosa y acrecientan la pobreza energética.

1. **El derecho humano al acceso a la energía eléctrica.**

En el presente apartado se describirán los fundamentos en los ámbitos nacional e internacional del derecho humano de acceso a la energía eléctrica como derecho social, y como producto del avance y progreso científico y tecnológico.

La Constitución Federal reconoce derechos económicos, sociales y culturales que se consideran derechos de igualdad material por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna.

El hecho que un derecho humano como el del acceso a la energía eléctrica no esté reconocido expresamente en la Constitución no significa que no esté protegido. Las normas de derecho fundamental pueden dividirse en dos grupos: 1) las normas de derecho fundamental directamente estatuidas por la Constitución y 2) las normas adscritas de derecho fundamental. Es decir, no toda norma iusfundamental se encuentra estatuida directamente en la Constitución, pues existen normas de ese carácter que derivan de las normas fundamentales [[79]](#footnote-78) y que por ello también tienen la categoría de normas iusfundamentales a condición de que pueda aducirse una fundamentación iusnaturalistamente correcta. Su carácter depende de la argumentación de derecho fundamental que sea posible aducir a su favor[[80]](#footnote-79)..

El derecho de acceso a la energía eléctrica es un derecho humano que ese encuentra **implícitamente** **reconocido en una serie de derechos humanos existentes**[[81]](#footnote-80) protegidos por nuestra Constitución -sin perder su propia identidad-, como la alimentación; la vivienda; la educación; la salud; la vivienda digna y decorosa; el ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; el acceso a la cultura; el acceso a la información; la libertad de expresión e imprenta y la libertad de profesión; industria, comercio y trabajo, el acceso a Internet[[82]](#footnote-81):

**Artículo 4º.**

[…]

Toda persona tiene **derecho a la alimentación** nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda Persona tiene **derecho a la protección de la salud**. […]

Toda persona tiene **derecho a un medio ambiente sano** para su desarrollo y bienestar. […]

Toda persona tiene **derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua** para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. […]

**Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa**. […]

**Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura** y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, **así como el ejercicio de sus derechos culturales**. […]

**Artículo 5o**. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique **a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos**. […]

**Artículo 6o.** **La manifestación de las ideas** no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. **El derecho a la información será garantizado por el Estado**. […]

[…]

**El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet**. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

**Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.** No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

**Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución**. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito

[Énfasis añadido]

**El ejercicio de los derechos** **depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica**. En efecto, el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones.

Luego, es innegable que **el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano** por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. Así lo han reconocido nuestros más altos tribunales en el siguiente criterio.

**ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES**[[83]](#footnote-82). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, **en el** **estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana** para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones. **Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales.**

En el mismo, sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de Río Negro vs Guatemala del 25 de mayo de 2017, **reconoció el acceso a la energía eléctrica como fundamental para la garantía de otros derechos humanos** y retomó la observación 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el que se reconoció la relación inescindible entre energía eléctrica y vivienda digna, su asequibilidad y la necesidad de su prestación ininterrumpida.

35. **El acceso a la energía eléctrica es fundamental para la garantía de otros derechos humanos**. Así, la Observación general No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales **reconoce que la disponibilidad de energía eléctrica para la cocina y el alumbrado se encuentra entre los requerimientos para una vivienda digna**. En lo que respecta a la asequibilidad de la energía eléctrica, la referida observación general No. 4 reconoce que los Estados deben adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda, incluyendo la energía eléctrica, sean soportables por las personas, y conmensurados con los niveles de ingreso. Igualmente, el suministro de la energía eléctrica debe ser de carácter ininterrumpido.

Lo anterior, se ve fortalecido con la obligación por parte de los Estados de satisfacer los derechos sociales y culturales para garantizar una mejor calidad de vida o un nivel de vida adecuado bajo los estándares internacionales.

1. **Declaración Universal de los Derechos Humanos**

**Artículo 22**

**Toda persona, como miembro de la sociedad**, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, **la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.**

[**Artículo 25.**](https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/#health)

**1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado** que le asegure, así como a su familia, **la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesario**s; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

[…]

[Énfasis añadido]

1. **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**

**Artículo 11**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto **reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia**. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

[…]

**Artículo 15**. Derecho a participar en la vida cultural y **a gozar del progreso científico**. Comprende el derecho a la protección de los intereses morales y materiales por las obras científicas o artísticas producidas. Establece la implementación de medidas sobre conservación, desarrollo y difusión científico-cultural y el respeto a las libertades de investigación científica y de creación.

[Énfasis añadido]

1. **Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador:**

**Artículo 11 Derecho a un medio ambiente sano**

1. Toda persona tiene **derecho** a vivir en un medio ambiente sano y **a contar con servicios públicos básicos.**

[Énfasis añadido]

1. **Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer**

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales **a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho** a:

[…]

h) **Gozar de condiciones de vida adecuadas**, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, **la electricidad** y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

[Énfasis añadido]

Llamamos la atención del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la observación general número 4[[84]](#footnote-83), sobre el “derecho a una vivienda adecuada”, sostuvo que **el derecho a la vivienda** no se puede equiparar al mero hecho de tener un tejado encima de la cabeza. **Debe considerarse el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte**. Es por ello, que el concepto de vivienda adecuada significa “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, *iluminación y ventilación* adecuadas, una *infraestructura básica* adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los *servicios básicos*, todo ello a un costo razonable".

7. En **opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad**. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, **el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto.** Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: **"el concepto de "vivienda adecuada"**... significa **disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable**"[[85]](#footnote-84).

[Énfasis añadido]

A mayor abundamiento, la observación profundiza sobre los factores que se deben tomar en cuenta para determinar si una **vivienda** puede considerarse **“adecuada**”. Entre otros factores se encuentra el rubro de “Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura”, en el que señala que los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada **deben tener acceso permanente** a recursos naturales y comunes, agua potable, **a energía** **para la cocina, la calefacción y el alumbrado, almacenamiento de alimentos**, etc. Reconoció, que el derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aisladamente de los demás derechos, pues parte como premisa del concepto de dignidad humana y el principio de no discriminación[[86]](#footnote-85).

8. Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una **serie de factores que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda se pueden considerar que constituyen una "vivienda adecuada"** a los efectos del Pacto. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:

[…]

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios **indispensables** para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición**.** Todos los beneficiarios del derecho a **una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente** arecursos naturales y comunes, a agua potable, **a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado**, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia[[87]](#footnote-86).

[Énfasis añadido]

La relación entre la energía eléctrica y una vivienda digna, de igual forma ha sido reconocido por nuestros tribunales. En el siguiente criterio se resolvió que la negativa a prestar el suministro de energía eléctrica conculcaba el derecho humano contenido en el artículo 4 constitucional, párrafo séptimo, consistente en que todas las personas tienen **derecho a contar con una vivienda** que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada digna y decorosa, entre los que se encontraba **la electricidad,** iluminación y ventilación adecuadas. El criterio se lee como sigue:

**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE NIEGA A PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLICITADO POR EL QUEJOSO**[[88]](#footnote-87)**.** Cuando el acto reclamado consiste en la negativa a prestar el servicio de suministro de energía eléctrica solicitado por el quejoso, la Comisión Federal de Electricidad actúa como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque se cumplen los requisitos del artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, en virtud de que aquélla es un organismo del Estado, regulado por la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento que, al negarse a celebrar un contrato de suministro crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Además, ese acto puede llegar a conculcar **el derecho humano contenido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las personas cuenten con una vivienda que tenga los elementos mínimos necesarios para ser considerada digna y decorosa, es decir, los que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, entre los que se encuentran la electricidad, iluminación y ventilación adecuadas,** máxime que la comisión mencionada es el único organismo estatal que puede prestar ese servicio, de acuerdo con la invocada ley y con los artículos 25, párrafo quinto; 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[Énfasis añadido]

Adicionalmente, hoy día existen satisfactores que son productos de la tecnología y que igualmente son indispensables según el contexto y el estilo de vida las personas. Sin excepción, los aparatos tecnológicos desde el más precario hasta el más sofisticado, requiere de la energía para su funcionamiento. Sin ir más lejos podemos señalar a las **comunicaciones y el Internet**. Éste último, ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión, atento a sus características singulares, como su velocidad, alcance mundial y relativo anonimato. **El Comité de Derechos Humanos de la ONU**, ha señalado que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y **asegurar su acceso**. Que a su vez es una herramienta para garantizar el principio de flujo de información.

**FLUJO DE INFORMACIÓN EN RED ELECTRÓNICA (INTERNET). PRINCIPIO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA POSIBLE**[[89]](#footnote-88). Atento a la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten la existencia de una red mundial en la que pueden intercambiarse ideas y opiniones, **conforme a lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas**, **el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar a los particulares el acceso a éstos**, pues precisamente el intercambio instantáneo de información e ideas a bajo costo, a través del Internet, facilita el acceso a información y conocimientos que antes no podían obtenerse lo cual, a su vez, contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de la sociedad en su conjunto, a lo que se debe que el marco del derecho internacional de los derechos humanos siga siendo pertinente y aplicable a las nuevas tecnologías de la comunicación; de hecho, puede afirmarse que **el Internet** ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión, atento a sus características singulares, como su velocidad, alcance mundial y relativo anonimato. Por tanto, **en atención a ese derecho humano, se reconoce que en el orden jurídico nacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, existe el principio relativo a que el flujo de información por Internet** debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, para proteger otros derechos humanos.

[Énfasis añadido]

En la “Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad (Resolución 3384 de la Asamblea General 72 de la Organización de Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 1975)”, los Estados se comprometieron a garantizar que los logros de las ciencia y tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales de todos los sectores de la población, a cooperar para fortalecer su fortalecimiento y desarrollo con miras a acelerar la realización de los derechos sociales y económicos de los pueblos y a **extender a todos los estratos los beneficios de la ciencia y la tecnología**.

3. Todos los Estados adoptarán medidas con objeto de **garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales** y espirituales de todos los sectores de la población.

[…]

5. Todos los Estados **cooperarán en el establecimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo**, **con miras a acelerar la realización de los derechos sociales** y económicos de los pueblos de esos países.

[…]

6. Todos los Estados adoptarán medidas tendientes **a extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología** y a protegerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su integridad física e intelectual.

[Énfasis añadido]

En conclusión, podemos afirmar que el derecho al acceso a la energía eléctrica está tutelado por la Constitución mexicana y diversos tratados internacionales de forma implícita a través de otros derechos de carácter social sin perder su individualidad, como la alimentación, la vivienda; la educación; la salud; la vivienda digna y decorosa; el ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; el acceso a la cultura; el acceso a la información; la libertad de expresión e imprenta y la libertad de profesión; industria, comercio y trabajo, el acceso al Internet. Adicionalmente, la energía eléctrica es fruto del progreso y de la ciencia que las personas tenemos derecho a gozar y a disfrutar.

Considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, se justifica en la medida en que, a partir de este derecho, las personas pueden tener una mejor calidad de vida y cerrar las brechas de la desigualdad. Es por eso, que los gobiernos se ven obligados a generar políticas públicas enfocadas a procurar de la mejor manera su satisfacción. Entonces al ser **la energía eléctrica un presupuesto indispensable para el goce de múltiples derechos fundamentales es incuestionable su carácter de derecho humano y lo prioritario de su protección**.

1. **La calidad de energía eléctrica que merecemos.**

En el presente apartado, se retomará de forma breve las premisas desarrolladas a lo largo de la presente demanda sobre los compromisos adoptados por México para el combate al cambio climático, a fin de concluir que el tipo de energía eléctrica a la que tiene derecho la parte quejosa debe ser asequible, eficiente, sostenible y limpia.

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se estableció la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la obligación de otorgarles el mismo peso y consideración que los derechos civiles y políticos. Los Estados Parte al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo, entre ellos México, asumieron el compromiso de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados (legislativos, judiciales, administrativos, económicos, sociales y educativos) la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Lo anterior, se reiteró en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se lee como sigue:

**Artículo 26. Desarrollo Progresivo**

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, **para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales** y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados

[Énfasis añadido]

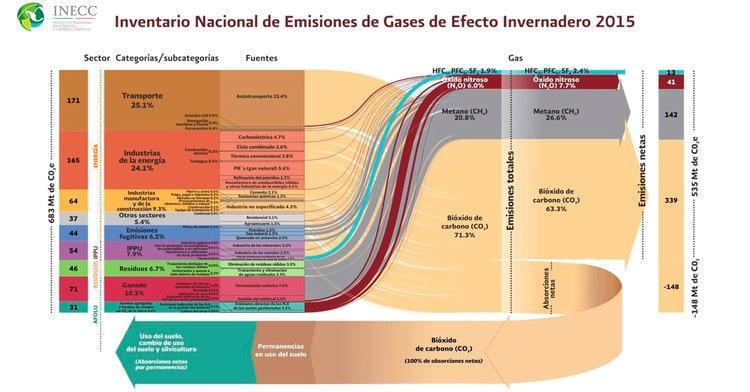
Los Estados Parte se comprometieron a lograr **progresivamente la plena efectividad** de los derechos que derivan de las normas sociales y económicas, entre los que se encuentra, **el derecho de acceso a la energía eléctrica** presupuesto del ejercicio de un cúmulo de derechos indispensables para el desarrollo integral de las personas. El sentido de progresividad de los derechos también ya ha sido desarrollado en otro concepto de violación al cual remitimos para evitar ser repetitivos.

En tal sentido, México como Estado parte de la Convención tiene el compromiso a nivel constitucional e internacional de darle plena efectividad a dicho derecho por todos los medios apropiados y con base en los recursos de los que disponga. La pregunta por resolver **es cómo debe garantizar ese derecho**. Particularmente, si se puede valer de cualquier medio para hacerse de energía eléctrica, aunque con ello, afecte y dañe otros derechos o bien, existen ciertos parámetros que le exigen que esa calidad reúna determinadas características para que su desarrollo sea sostenible.

Sin más rodeos, en otros conceptos de violación de la presente demanda, se han señalado los compromisos internacionales asumidos por México para combatir los Gases Efecto Invernadero (GEI) para mantener la temperatura de la superficie terrestre y reducir los impactos del calentamiento global de 1.5 grados en la escala de Celsius. En virtud de dichos compromisos, el Estado mexicano se comprometió a reducir en un 25% los GEI y generar **el 25% de la energía eléctrica mediante energías limpias para el año 2018, 35% para el año 2024 y el 43% de la energía para el 2030**, **de manera progresiva y nunca de manera regresiva**. Así también, se ha detallado cómo los Actos Reclamados dañan el derecho al medio ambiente sano y a la salud en términos del artículo 4 constitucional, conceptos a los cuales remitimos para evitar ser repetitivos.

El modelo de desarrollo contemporáneo requiere de grandes cantidades de energía para producir para cubrir las necesidades humanas básicas (por ejemplo, de alumbrado, cocina, ambientación, movilidad y comunicación) y para los procesos productivos. Desde 1850, aproximadamente, la utilización de combustibles de origen fósil (carbón, petróleo y gas) en todo el mundo ha aumentado hasta convertirse en el suministro de energía predominante, situación que ha dado lugar a un rápido aumento de las emisiones del dióxido de carbono (CO2) situación que ha dado lugar a un progresivo aumento de las emisiones de GEI[[90]](#footnote-89).

Según datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INECC) del 2015, del total de emisiones 64% correspondieron al consumo de combustibles fósiles. Específicamente, la generación eléctrica representa la segunda fuente principal con el 24.1% de las emisiones totales a nivel nacional[[91]](#footnote-90).



El incremento en las emisiones se debe, entre otras razones, a la demanda creciente de energía, cuestión que es lógica dado el crecimiento poblacional y la consecuente demanda de más bienes y más servicios conforme al modelo de desarrollo imperante[[92]](#footnote-91). Es decir, el crecimiento de la demanda máxima y el consumo de electricidad están sujetos entre otras variables a: a) el crecimiento económico, b) el crecimiento poblacional, c) factores climáticos, d) eficiencia energética, e) precios del combustible, f) el tipo de consumidor final y g) el precio de la electricidad, en ésta variable, el importe de las tarifas de cada uno de los sectores de consumo influye en forma importante en la cantidad y ritmo de crecimiento del consumo, así como en la demanda de electricidad.[[93]](#footnote-92)

Ante un panorama en donde el cambio climático y sus consecuencias son inminentes, surge el cuestionamiento de **cómo disminuir las emisiones de GEI del sector energético, sin dejar por ello de cubrir la demanda de servicios derivado de éste**. Las energías renovables aparecen entonces como una cartera de opciones de mitigación de las emisiones de GEI, ya que además de su gran potencial para mitigar los efectos negativos del cambio climático, pueden incluso aportar otros beneficios al desarrollo sostenible de manera directa[[94]](#footnote-93).

Entonces, es imperante que necesitamos de energías limpias cuya fuente sean fenómenos de la naturaleza disponibles de forma continua o periódica, que al generarse no liberan emisiones contaminantes[[95]](#footnote-94). Lo anterior, favorece no sólo al medio ambiente de México y el mundo, sino a la eficiencia energética que tiene como propósito reducir la cantidad de energía empleada en la producción de bienes y servicios que se ve reflejada en un ahorro.

En virtud de lo anterior podemos concluir que la energía eléctrica a la que tiene derecho la parte quejosa, como derecho de última generación, debe ser: **asequible**, esto es, que pueda ser adquirido a un precio razonable por razones de justicia social; **eficiente**, **sostenible**, porque la satisfacción de las necesidades de la generación presente no debe comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, **limpia**, porque nos encontramos a nivel medioambiental en un punto sin retorno, donde no podemos seguir quemando más combustibles fósiles sin poner en peligro el derecho al medio ambiente y el desarrollo sostenible de los pueblos; fiable y moderno, porque no sólo se trata de satisfacer las necesidades básicas sino los satisfactores económicos generados como producto del progreso científico que hacen posible una mejor calidad de vida.

1. **La pobreza energética.**

En el presente apartado se desarrollará a grandes rasgos cómo ha evolucionado el concepto de pobreza energética en la literatura para pasar posteriormente al caso mexicano.

* 1. **Evolución del concepto pobreza energética.**

La pobreza energética es un fenómeno real debido a sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. Ésta ha evolucionado en torno a los dos principales enfoques teóricos y metodológicos con los cuales se ha abordado su estudio: el enfoque de subsistencia (o biológico) y el enfoque consensual. Los trabajos pioneros en torno a la pobreza energética adaptaron el enfoque de subsistencia, según el cual “un hogar es pobre cuando sus ingresos no alcanzan a cubrir una serie de satisfactores básicos que son necesarios para mantener la eficiencia física de las personas” [[96]](#footnote-95)

Los trabajos de investigación que abordan el tema de la pobreza energética también llamada pobreza de combustible, bajo el enfoque de subsistencia, estiman una línea de pobreza con base en un umbral de temperatura necesario para alcanzar el confort térmico que se considera adecuado, o bien con el porcentaje del ingreso del hogar destinado al gasto de combustible requerido para alcanzar dicho nivel de confort[[97]](#footnote-96).

Algunos trabajos como los de Whyley y Callender (1997), Clinch y Healy (1999 y 2001), Healy y Clinch (2002a, 2002b y 2003), Healy (2004) y García (2012), cuestionan el enfoque de subsistencia en el estudio de la pobreza de combustible Los argumentos vertidos por estos autores tienen que ver con la dificultad metodológica que significa obtener datos precios sobre la temperatura de confort interior en las viviendas, el tiempo de ocupación de las personas que las habitan, así como la disponibilidad de datos y tipo de ingreso del hogar considerado[[98]](#footnote-97).

Reconociendo estas limitantes metodológicas, Healy (2004) propone una nueva línea de investigación que aborda la pobreza de combustible, la cual es llamada “**enfoque consensual**”. La base teórica de esta propuesta es el enfoque de “privación relativa” desarrollado en el estudio de la pobreza por el científico social Peter Townsend. Este autor señala que además de las necesidades físicas, hay también necesidades sociales que dependen de la estructura social e institucional de un lugar y tiempo determinado, ya que la sociedad cambia e impone nuevas obligaciones a sus miembros (Townsend, 1962, 1971 y 1979)[[99]](#footnote-98). Las personas sufren entonces de **privación relativa cuando no satisfacen las necesidades que en su momento son consideradas básicas o indispensables de acuerdo a las costumbres y cultura de la sociedad** (Townsend, 1962)[[100]](#footnote-99).

Al respecto, Amartya Sen apunta que la idea relativa complementa pero no elimina la visión absoluta de privación, ya que hay un *núcleo reducible de privación absoluta* el cual existe antes de cualquier percepción relativa de pobreza (Sen, 1981). Esto quiere decir que la pobreza es un fenómeno absoluto expresado en términos relativos. En este sentido, Max-Neef, M. et al. (1991: 26) señalan que un error fundamental en la literatura de las necesidades humanas es que *no se hace explícita la diferencia entre necesidades y satisfactores*. Adaptando estas ideas al campo de la pobreza energética, si no se cubren las necesidades absolutas relacionadas con el consumo de energía se está en un estado de privación absoluta, pero la forma en que estas necesidades se satisfacen es lo que cambia de acuerdo a la cultura y costumbres en un lugar y tiempo determinado(a través de los satisfactores), y esto es precisamente lo que es relativo[[101]](#footnote-100).

El enfoque consensual de la pobreza energética propone un índice que pondera una serie de indicadores objetivos y cualitativos. Los indicadores objetivos miden las condiciones de equipamiento de la vivienda, mientras que los subjetivos estiman cualitativamente el sentimiento de privación de las personas acerca de su situación de pobreza energética[[102]](#footnote-101).

Por otro lado, la privación social de los servicios que brinda el uso de energía es retomada por Rigoberto García Ochoa[[103]](#footnote-102) (2011 y 2014) para desarrollar **el método “Satisfacción de necesidades absolutas de energía”**[[104]](#footnote-103)**,** en el cual se propone un índice multidimensional denominado “Pobreza energética en el hogar”. Bajo este enfoque, la pobreza energética se ubica en el campo de los derechos sociales. Si una persona no satisface las necesidades humanas relacionadas con los usos de energía, no ejerce entonces sus derechos, **lo cual implica una situación de pobreza**[[105]](#footnote-104).

Señala que el **punto clave** es **definir las necesidades y satisfactores en función de los usos de energía**, pero sobre todo, se requiere determinar cómo la privación de estas necesidades implica vivir en pobreza energética.

Max-Neefn et al. (1991: 40) argumentan que cualquier necesidad fundamental que no es cubierta a plenitud revela un determinado nivel de pobreza. Así, desagregan l**as necesidades en dos categorías posibles: existenciales y axiológicas**. Las primeras tienen que ver con el ser, tener, hacer y estar; mientras que las segundas las identifican con necesidades de subsistencia, protección, afecto, entretenimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. El principal postulado que plantean estos autores respecto a las necesidades humanas fundamentales es que son “finitas, pocas y clasificables” y, además, “son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos”.

Los satisfactores, por su parte, expresan la forma, estilo o moda en que una determinada sociedad le da significado a sus necesidades, y no existe una “correspondencia biunívoca” entre ellos, es decir, **los satisfactores pueden cubrir varias necesidades**. **Esta satisfacción de necesidades se logra a través de los bienes económicos**, los cuales son equipos, objetos o artefactos que incrementan o reducen la eficiencia de los satisfactores, mismos que tienen que ver con la forma en que una sociedad expresa sus necesidades, mientras que los bienes económicos son el medio por el cual las personas potencian los satisfactores para cubrir sus necesidades, y “esto es lo que cambia a través del tiempo y de las culturas”[[106]](#footnote-105).

Con base en los planteamientos de Sen (1981) y Max-Neef et al. (1991) respecto a las necesidades humanas, García Ochoa propone la siguiente definición de pobreza energética: “*Un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales*”. Los supuestos implícitos en esta definición se describen a continuación[[107]](#footnote-106):

1. Las necesidades básicas o fundamentales relacionadas con los usos de energía son absolutas, pocas y diferenciadas, y son las mismas en todas las culturas y periodos históricos. Esto representa entonces el núcleo irreductible de privación absoluta relacionado con la pobreza energética.

2. La dimensión relativa que implica el sentimiento de privación de las necesidades de energía, por su parte, se manifiesta en los bienes económicos y satisfactores, ya que son éstos los que cambian de acuerdo a las costumbres y cultura de las sociedades.

Entonces, **las necesidades absolutas** **de energía (NAE**), finitas y clasificables, son las mismas en todas las culturas y períodos históricos. Las NAES consideradas son “Subsistencia”, “Protección”, “Entendimiento”, “Placer” y “Creación”. **Los satisfactores** por su parte cubren estas NAEs y cambian a través del tiempo de acuerdo a las percepciones culturales y sociales. Aquí es precisamente donde aparece la **visión relativa** que, como se explicó en la sección anterior, es lo que actualiza la forma en que se satisfacen las NAEs de acuerdo a las convenciones culturales en un lugar y tiempo determinado. Los satisfactores tomados en cuenta son: “Alimentación”, “Trabajo”, “Descanso”, “Cuidado” (atención de la persona), “Humor”, “Descanso”, “Tiempo libre”, “Salud física”, “Salud mental”, “Literatura”, “Investigación”, “Estudio”, “Juego” y “Creatividad”.

La elección de los **bienes económicos**, por su parte, se basa en el supuesto de que estos **son los equipos y electrodomésticos relacionados con los usos finales de energía más importantes**. De esta manera, se asegura que se cubren los principales servicios que brinda el consumo de energía para mejorar la calidad de vida de las personas. Los bienes económicos seleccionados son “Refrigerador”, “Computadora (PC o Laptop) con acceso a internet”, “Calentador de agua de gas o eléctrico”, “Ventilador” o Aire Acondicionado”, “Calefactor”, “Foco o Lámpara Fluorescente”, “Televisión” y “Estufa de Gas o Eléctrica”. Un supuesto metodológico de gran importancia en esta propuesta es que los bienes económicos “Ventilador” y “Aire acondicionado”, “Calefactor” y, “Calentador de agua”, son esenciales sólo en localidades donde el clima amerite su uso[[108]](#footnote-107).

Existen todavía una serie de vacíos conceptuales y metodológicos que requieren ser abordados científicamente. Por ejemplo, hay que realizar esfuerzos para mejorar la elección de bienes económicos y satisfactores, sobre todo aquellos que dependen del clima. En este sentido, habría que mejorar la metodología de clasificación de las zonas climáticas, aplicando para ello encuestas representativas a nivel de conglomerados de acuerdo a las zonas climáticas encontradas. Estas encuestas podrían complementarse con estudios cualitativos tendientes a integrar los bienes económicos que, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales, son considerados como esenciales por parte de la población. Esto sería el siguiente paso para proponer una mejor clasificación de las necesidades absolutas, satisfactores y bienes económicos.

* 1. **Caso mexicano.**

En el caso de México, el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social establece que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social debe definir, identificar y medir la pobreza considerando con al menos ocho indicadores, uno de los cuales es **“Acceso a los servicios básicos en la vivienda**” que se compone a su vez por: (i) acceso al agua, (ii) contar con drenaje, (iii) **disposición de electricidad** y (iv) servicio de combustible para cocinar. Se destaca entonces que, aunque no se define explícitamente un indicador de pobreza energética, la metodología propuesta por el Coneval considera que **la privación social del acceso a la electricidad y el tipo de combustible para cocinar (gas o electricidad) es un elemento que contribuye a la pobreza en México**.

**De la Definición y Medición de la Pobreza**

**Artículo 36**. Los **lineamientos y criterios** que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al **menos sobre los siguientes indicadores**:

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa;

**VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa**;

**VII. Acceso a la alimentación** nutritiva y de calidad

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, basándose en distintos documentos emitidos por los órganos de las Naciones Unidas, se ha pronunciado en el sentido de que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa no se agota en una infraestructura básica, **sino que debe comprender el acceso a servicios públicos**, entre los que se incluyen enunciativamente, **la iluminación**[[109]](#footnote-108).

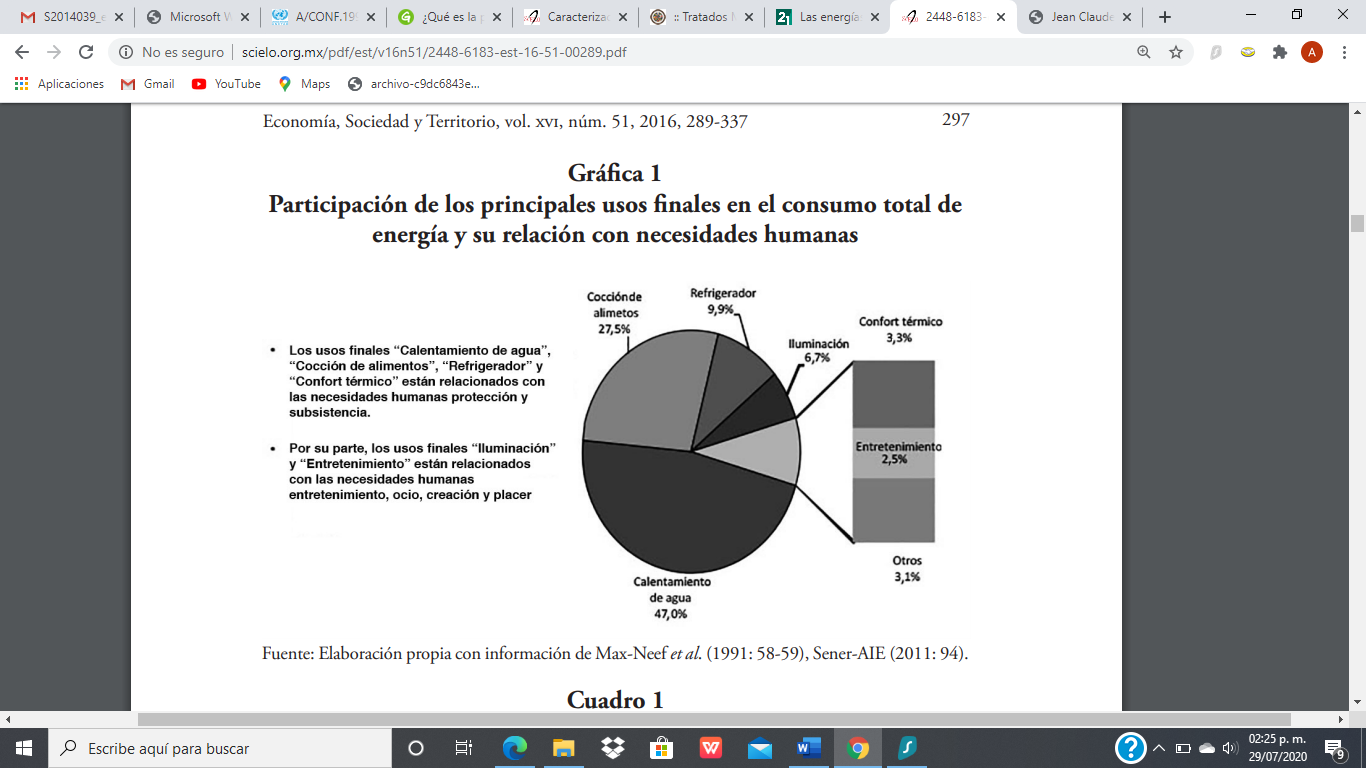
Recordemos lo previsto en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador en el artículo 11, **que protege el derecho a contar con servicios públicos básicos**, entre los que se encuentra el acceso a la energía eléctrica.

Adicionalmente, y con el mismo enfoque podemos señalar que el derecho de acceso a la energía eléctrica, está contenido dentro del **mínimo vital** al que tiene derecho toda persona para que pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano **por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna**.

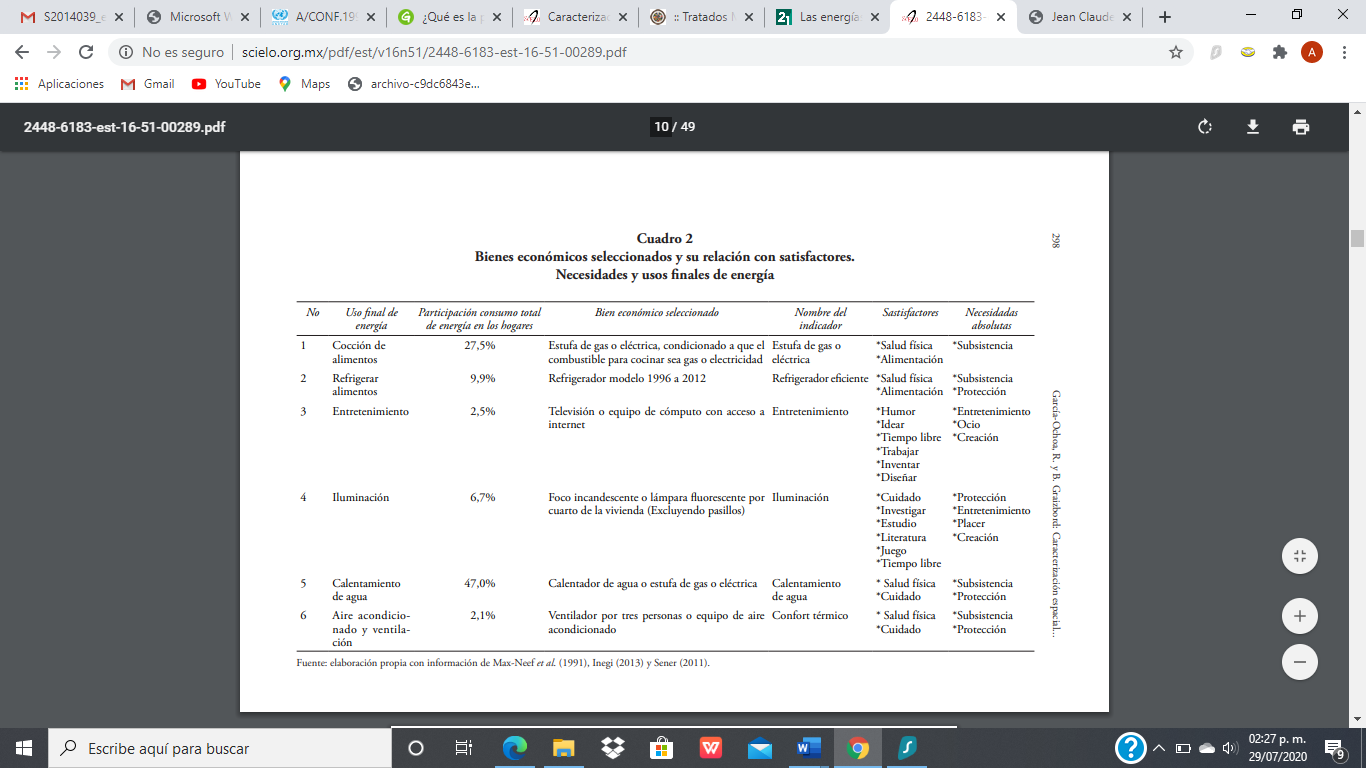
**DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO**[[110]](#footnote-109). El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. **Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna**. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean.

Ahora bien, teniendo esto en cuenta, pasemos a la metodología de “**Satisfacción de necesidades absolutas de energía”** propuesta por Rigoberto García Ochoa, respecto a las **necesidades energéticas** en México. Con base en este método el autor hizo un ejercicio de medición de pobreza energética en México. Lo anterior, teniendo en cuanta que, si las prácticas de consumo de energía varían en función del contexto social y cultural, así como del nivel de vida o estatus de las personas y familias, existe un amplio espectro de opiniones y percepciones acerca del significado de privación o carencia. Esta situación plantea una serie de desafíos conceptuales y metodológicos para determinar los bienes económicos o servicios energéticos cuya privación implique pobreza energética. Ante la imposibilidad de realizar por ahora una investigación de esta naturaleza en un país tan extenso y diverso como México, se resumieron los bienes económicos y satisfactores seleccionados, con las necesidades absolutas de energía determinadas con base a los usos finales de la energía según información de la Secretaría de Energía[[111]](#footnote-110).

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Energía, los usos finales de energía más importantes en el sector residencial son: 1. Calentamiento de agua; 2. Cocción de alimentos; 3. Refrigerador; 4. Iluminación; 5. Confort térmico (aire acondicionado)6 y 6. Entretenimiento. Considerando las necesidades axiológicas propuestas por MaxNeef et al. (1991) se propone que las **necesidades protección, subsistencia, entendimiento, ocio, creación y placer** cuya privación implica vivir en pobreza energética[[112]](#footnote-111).



Establecidas las necesidades humanas relacionadas con los usos de energía, para determinar los **bienes económicos** que actualizan y potencian los satisfactores que cubren estas necesidades, se consideraron los equipos relacionados con los usos finales de energía más importantes en los hogares. La fuente de información utilizada para México fue el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares correspondiente al 2012. Entre los bienes económicos se encuentran: la estufas, refrigerados, televisión o equipo de cómputo con acceso a internet, focos, calentador de agua, ventilador[[113]](#footnote-112).



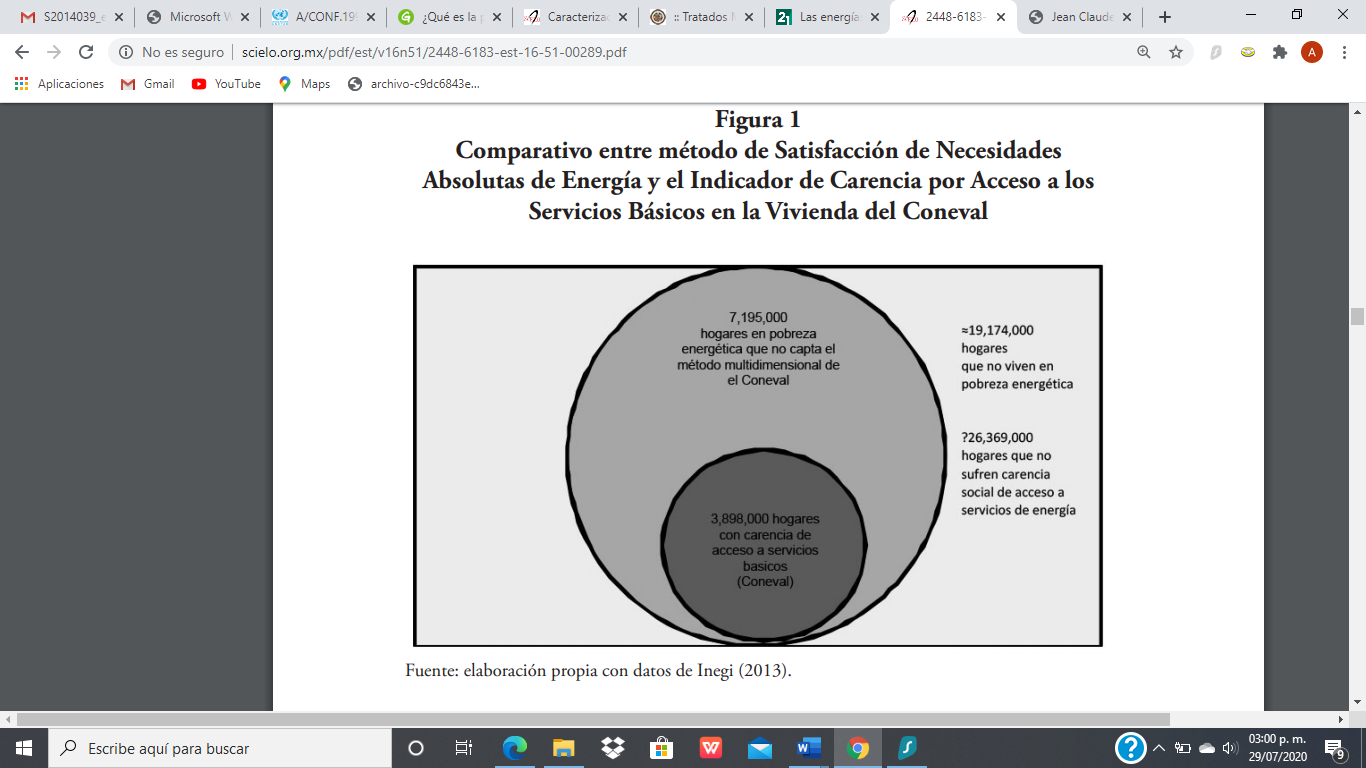
Definidos los bienes económicos, los satisfactores y las necesidades absolutas de energía, el último paso de este método consiste en presentar una función de agregación o medición de la pobreza energética con base en fórmulas matemáticas previamente diseñadas[[114]](#footnote-113).

Con base en esa metodología, a continuación, se comparten algunos de los resultados obtenidos por Rigoberto García con datos a 2013 que sirven como referente y antecedente de pobreza energética en nuestro país. Algunos de los resultados obtenidos son los siguientes:

1. **11,093,000 hogares, los cuales representan 36,7% del total nacional, viven en pobreza energética en México**. El hecho de que una cantidad tan importante de hogares **experimente la privación de al menos uno de los bienes económicos relacionados con los satisfactores y necesidades absolutas de energía** representa un problema social relevante, debido a la asociación que tiene el uso de energía limpia y asequible para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población.
2. Se observan también diferencias significativas en la privación de los diferentes bienes económicos, lo cual indica que existen impactos diferenciados de cada uno de estos bienes sobre el índice general de pobreza energética. Los bienes económicos con mayor privación en los hogares son “Confort térmico” (33%),12 “Refrigerador eficiente” (21,1%) y “Estufa de gas o eléctrica” (16,6%); mientras que “Calentamiento de agua” (8,7%), “Entretenimiento” (5,5%) e “Iluminación” (2,2%) son los que presentan menor privación[[115]](#footnote-114).



1. De acuerdo al indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda del Coneval, hay aproximadamente **3,898,000 hogares en México que no cuentan con acceso a electricidad** en sus viviendas o usan leña o carbón como combustible para cocinar. De acuerdo al método Satisfacción de Necesidades Absolutas de Energía hay casi 11,093,000 hogares en situación de pobreza energética. Esto significa que hay aproximadamente 7,195,000 hogares en pobreza energética que el Coneval considera no sufren privación social por los servicios básicos de energía.



El autor concluye que, desde la perspectiva de sus trabajos, los resultados obtenidos evidencian que **la accesibilidad a energéticos de calidad es una condición necesaria que dista mucho de ser suficiente para que las personas cubran sus servicios básicos relacionados con el consumo de energía**. La relación entre energía y pobreza demanda un enfoque integral que incorpore transversalmente los impactos económicos, sociales y ambientales del consumo de energía. Sólo de esta manera se puede producir un mejor conocimiento de cómo los usos de energía contribuyen a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población[[116]](#footnote-115).

1. **Las energías renovables como opción ante la pobreza energética.**

En el presente apartado, describiremos los compromisos adoptados por los distintos países encaminados para tener un mundo mejor para todos, y por ende, erradicar la pobreza y garantizar un desarrollo sustentable cuidando del medio ambiente.

* 1. **El Plan de Acción universal asumido por los países de la ONU.**

La relación entre energía y pobreza es un tema que empieza a tomar importancia a nivel mundial en el campo de la política pública. El reconocimiento del papel que desempeñan los servicios de energía limpios y asequibles para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población, parte del hecho de que la energía está relacionada con prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana de las personas[[117]](#footnote-116).

En septiembre del año 2000 se celebró, en Nueva York, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. En dicho evento, los líderes de 189 naciones, entre ellas México, se comprometieron con el contenido de la **Declaración del Milenio** compuesta por los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS)[[118]](#footnote-117) para el 2015[[119]](#footnote-118) en donde el pacto fue ofrecer un mundo mejor para la humanidad. Los ODS no se abandonan, sino que complementan y profundizan el trabajo. Los ODS buscan terminar la labor que comenzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin dejar a nadie atrás.

En el Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002, se resaltó que la Cumbre en relación con el compromiso de desarrollo sostenible y erradicar la pobreza, destaca la propuesta para proporcionar **servicios de energía seguros, limpios y accesibles**, como una condición necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducción de la pobreza mundial. Particularmente se sostuvo lo siguiente:

9. Adoptar medidas conjuntas y mejorar las iniciativas de cooperación a todos los niveles **para aumentar el acceso a servicios energéticos fiables y de costo razonable, para el desarrollo sostenible, que faciliten el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio**, incluido el de reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza antes del año 2015, y como medio de generar otros servicios importantes que mitiguen la pobreza, **teniendo en cuenta que el acceso a la energía facilita la erradicación de la pobreza**. Ello entrañaría la adopción, en todos los planos, de medidas encaminadas a:

1. **Mejorar el acceso a servicios y recursos energéticos fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias de cada país**, por diversos medios, como la electrificación rural y los sistemas descentralizados de energía**, un mayor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables, el uso de combustibles líquidos y gaseosos menos contaminantes y el incremento de la eficiencia energética,** intensificando la cooperación regional e internacional en apoyo de iniciativas nacionales por medios tales como el fortalecimiento de la capacidad, la asistencia financiera y tecnológica y mecanismos innovadores de financiación, en particular a nivel microeconómico y mesoeconómico, en que se reconozcan los factores específicos que deben tenerse en cuenta para proporcionar acceso a los pobres;

[…]

1. **Promover la utilización sostenible de la biomasa y, cuando corresponda, otras fuentes de energía renovables mejorando las modalidades de utilización actuales por medio de la ordenación de los recursos**, un mejor aprovechamiento de la leña y el uso de productos y tecnologías nuevos o mejorados;

[…]

20. Instar a los gobiernos, así como a las organizaciones regionales e internacionales competentes y otras partes interesadas, a que, teniendo en cuenta las características y circunstancias concretas de cada país y región, **apliquen las recomendaciones y conclusiones aprobadas por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible** en su noveno período de sesiones so**bre la utilización de la energía para el desarrollo sostenible,** incluidas las cuestiones y opciones que se indican a continuación, **teniendo presente que los Estados, en vista de que contribuyen en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas**. Ello entrañaría la adopción, en todos los planos, de medidas encaminadas a:

[…]  
c) **Idear y difundir tecnologías alternativas con objeto de aumentar la proporción de la producción de energía correspondiente a las fuentes renovables, incrementando la eficiencia energética y utilizando en mayor medida tecnologías avanzadas, como las tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles;**

d) **Combinar, cuando proceda, el uso más amplio de recursos energéticos renovables**, la utilización más eficiente de la energía, una mayor aplicación de las tecnologías más modernas, como las tecnologías avanzadas y menos contaminantes para el aprovechamiento de los combustibles fósiles y la utilización sostenible de los recursos energéticos convencionales, que podrían satisfacer la necesidad cada vez mayor de energía a largo plazo para lograr el desarrollo sostenible;

e) Diversificar el suministro de energía perfeccionando las tecnologías existentes o ideando otras menos contaminantes y más eficientes, accesibles y económicas, en particular las que se utilizan para el aprovechamiento de los combustibles fósiles y las fuentes de energía renovables, incluida las de energía hidroeléctrica, y transfiriéndolas a los países en desarrollo en condiciones favorables mutuamente convenidas. **Aumentar considerablemente, con carácter urgente, la proporción de fuentes renovables de energía utilizadas en todo el mundo con miras a acrecentar su contribución a la oferta total de energía**, teniendo en cuenta la importancia de los objetivos nacionales, así como los objetivos fijados y las iniciativas tomadas voluntariamente a nivel regional, si ese fuera el caso, y **velando por que las políticas energéticas sirvan de apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo por erradicar la obreza, y evaluar periódicamente los datos disponibles para examinar los progresos realizados;**

[…]

g) Aprovechar y utilizar las infraestructuras y las fuentes de energía locales para diversos usos a ese nivel y promover la participación de las comunidades rurales, incluidos los grupos locales previstos en el Programa 21, con el apoyo de la comunidad internacional, **en el desarrollo y utilización de tecnologías para la explotación de fuentes de energía renovables a fin de encontrar soluciones sencillas para atender las necesidades energéticas cotidianas de la población local;**

h) Establecer programas nacionales de aumento de la eficiencia energética, acelerando, cuando corresponda, y con el apoyo necesario de la comunidad internacional, la difusión de tecnologías apropiadas para ese fin;

i**) Agilizar el desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnologías menos contaminantes y de costo accesible para aumentar la eficiencia energética y la conservación de energía** y promover la transferencia de esas tecnologías, en particular a los países en desarrollo, en condiciones favorables e incluso concesionarias y preferenciales convenidas de común acuerdo;

j) Recomendar que, en sus políticas, las instituciones financieras internacionales y otros organismos apoyen a los países en desarrollo y a los países de economía en transición en sus **esfuerzos por crear marcos normativos y regulatorios que establezcan un mejor equilibrio entre las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética, las tecnologías de avanzada,** incluidas las tecnologías más modernas y menos contaminantes para la utilización de los combustibles fósiles y los sistemas energéticos centralizados, distribuidos y descentralizados;

k) **Promover la intensificación de las actividades de investigación y desarrollo en el campo de la tecnología energética, como las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías de avanzada, incluidas las tecnologías más modernas y menos contaminantes para la utilización de los combustibles fósiles, tanto en el plano nacional como en el marco de la colaboración internacional**; fortalecer las actividades de las instituciones y los centros nacionales y regionales de investigación y desarrollo en lo que respecta a un suministro de energía para el desarrollo sostenible que sea fiable, de costo accesible, económicamente viable, socialmente aceptable y ecológicamente racional;

l) Promover los contactos entre los centros especializados sobre cuestiones relativas a la energía para el desarrollo sostenible, incluidas las redes regionales, estableciendo vínculos entre los centros que se ocupan de la tecnología de aprovechamiento de la energía para el desarrollo sostenible y que pudieran apoyar y promover las actividades de fortalecimiento de la capacidad y de transferencia de tecnología, particularmente de países en desarrollo, y servir como centros de información;

m) Promover la educación para proporcionar tanto a los hombres como a las mujeres información sobre las fuentes de energía y las tecnologías disponibles;

[Énfasis añadido]

Conforme a lo transcrito se colige, que desde el año 2000 ya se había planteado como una necesidad en el **acceso a servicios y recursos energéticos** **fiables**, de costo razonable, económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales, **y por supuesto un mayor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables**.

La Cumbre de Rio +20 del año 2012, marcó una guía crítica para que los Estados miembros elaboraran el concepto de objetivos de desarrollo sostenibles que fueran coherentes e integrados a la Agenda de Desarrollo Post-2015. Por medio de las negociaciones de Rio +20, los Estados miembros también identificaron áreas de prioridad para el desarrollo sostenible: la erradicación de la pobreza; la seguridad de los alimentos y la sostenibilidad de la agricultura; agua y sanidad; **energía**; turismo sostenible; transporte sostenible; ciudades y asentamientos sostenibles; población y salud; empleo productivo y decente para todos y protección social; mares y océanos, entre otros.

El enfoque del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -la económica, la social, y la del medio ambiente, se ha erigido como uno de los principios clave en los ODS planteados por los Estado Partes. **La sostenibilidad implica asegurar la justicia inter-generacional con el fin de crear un mundo futuro que sea adecuado para los niños y niñas**. Esto implica garantizar un futuro sostenible en el cual los niños y niñas podrán crecer de manera saludable, nutrirse bien, ser resistentes, estar bien educados, ser sensibles a las diferentes culturas, protegiéndolos contra la violencia y el abandono. Los niños y niñas necesitarán acceso a ecosistemas no contaminados y seguros que deberán ser protegidos ahora y en el futuro, con agua, océanos y aire limpios.

La deliberación sobre un nuevo “Marco de Desarrollo Post 2015” fue un proceso de diálogo global en el que participaron no solamente los Estados Miembros de la ONU a través de sus representantes gubernamentales, sino otros actores interesados en la conformación de una nueva agenda de desarrollo mundial, incluyendo a las diferentes Agencias del Sistema de Naciones Unidas, a la sociedad civil y al sector privado. El proceso de reflexión y conformación de la primera llamada “Agenda de Desarrollo Post 2015”, actualmente conocida como “**Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”**, duró cerca de 5 años, si partimos del mandato que el Secretario General de la ONU recibiera de la Asamblea General en 2010 de comenzar a formular recomendaciones para la promoción de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015[[120]](#footnote-119)..

Derivado de ese mandato, el Secretario General incluyó en su Informe Anual de 2011 ante la Asamblea General las primeras sugerencias de “consideraciones fundamentales” para un nuevo programa internacional de desarrollo, así como de “procesos de consulta apropiados” en el entendido de que a medida que se aproximaba el plazo de 2015 para el cumplimiento de los ODM, también llegaba el momento de analizar “el futuro del programa”. En el V apartado de su Informe, bajo el rubro de “Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015”, **el Secretario** hizo un reconocimiento a la pertinencia del marco de los ODM pero **señaló problemas que debían ocupar un lugar central en la nueva agenda** para el desarrollo **puesto que en el programa de los ODM no se había prestado atención suficiente a** algunos valores y objetivos fundamentales de la Declaración del Milenio entre los que incluyó **el acceso sostenible a la energía (respeto de la naturaleza)**[[121]](#footnote-120).

En la Cumbre Mundial del 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron la **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también considera fortalecer la paz y el acceso a la justicia. La Agenda 2030, incluye **17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y 169 metas** de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, **que los gobiernos se han comprometido a cumplir en los siguientes 15 años**. Si bien no tiene un carácter vinculante, se reiteró que implica un **compromiso común y universal** y que los Estados se han comprometido a movilizar los medios necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas en las necesidades de los más pobres y vulnerables[[122]](#footnote-121).

El Objetivo 7 fue *“Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y moderna para todos”*. Incluye metas como 7.a que establece: “**De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables**, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias”[[123]](#footnote-122).

Las dimensiones económica, social y medioambiental de la Agenda 2030 están vinculadas con los tres pilares del **desarrollo sostenible**, el que como vimos se ha definido como el *desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.*

**La Agenda 2030** para el Desarrollo Sostenible es de la mayor importancia ya que al ser adoptada por todos los Estados Miembros de la ONU, desarrollados y en desarrollo, **se convirtió en el nuevo Marco de Acción en materia de Desarrollo a todos los niveles**: mundial, regional, nacional y subnacional; se trata de **un plan que deberá orientar las políticas públicas** en todas las materias, los marcos normativos, los presupuestos, así como los proyectos de desarrollo[[124]](#footnote-123).

La participación ciudadana en el monitoreo y mecanismos para exigir la rendición de cuentas tiene que ser un aspecto central para la implementación efectiva de la Agenda 2030, ya que la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios públicos pueden contribuir a un marco de implementación accesible e inclusivo, que facilite la rendición de cuentas. La inversión en el monitoreo ciudadano asegura que las lecciones aprendidas en contextos locales puedan influir en el diseño e implementación de las políticas públicas.

* 1. **Las energías renovables como punta de lanza del desarrollo sustentable y combate a la pobreza.**

Las energías renovables son un elemento clave para el objetivo de “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” (ODS 7). Muchas soluciones basadas en energías renovables son rentables, ya están disponibles y pueden adaptarse fácilmente para prestar servicios energéticos que sustenten medios de subsistencia y mejoren el bienestar de los seres humanos. Las energías renovables contribuyen a la sostenibilidad ambiental al reducir los efectos locales y globales asociados al consumo de energía[[125]](#footnote-124).

De igual manera, las renovables crean condiciones para promover el desarrollo humano al facilitar el acceso a servicios básicos, mejorar la salud humana e incrementar los ingresos y la productividad. Las energías renovables también crean nuevos puestos de trabajo y fomentan la aparición de nuevas industrias a nivel local[[126]](#footnote-125).

Las energías renovables ofrecen soluciones igualmente eficaces a los problemas de sostenibilidad local y global del medio ambiente. A nivel global, el efecto más importante de la producción y consumo de energía es su contribución al cambio climático (ODS 13). Las energías renovables, junto con la eficiencia energética, ofrecen al mundo una oportunidad realista de mantener el aumento de la temperatura a nivel global por debajo de 2°C, así como de reducir la contaminación atmosférica. A nivel local, las energías renovables desempeñan un papel clave en la transición a una energía urbana sostenible (ODS 11), **incluida la energía para calefacción y refrigeración, la generación de electricidad a nivel local y energía para impulsar vehículos eléctrico**s. Los proyectos de energías renovables bien diseñados pueden evitar los efectos negativos que la producción y consumo de energía tienen sobre los ecosistemas y la biodiversidad (ODS 15)[[127]](#footnote-126).

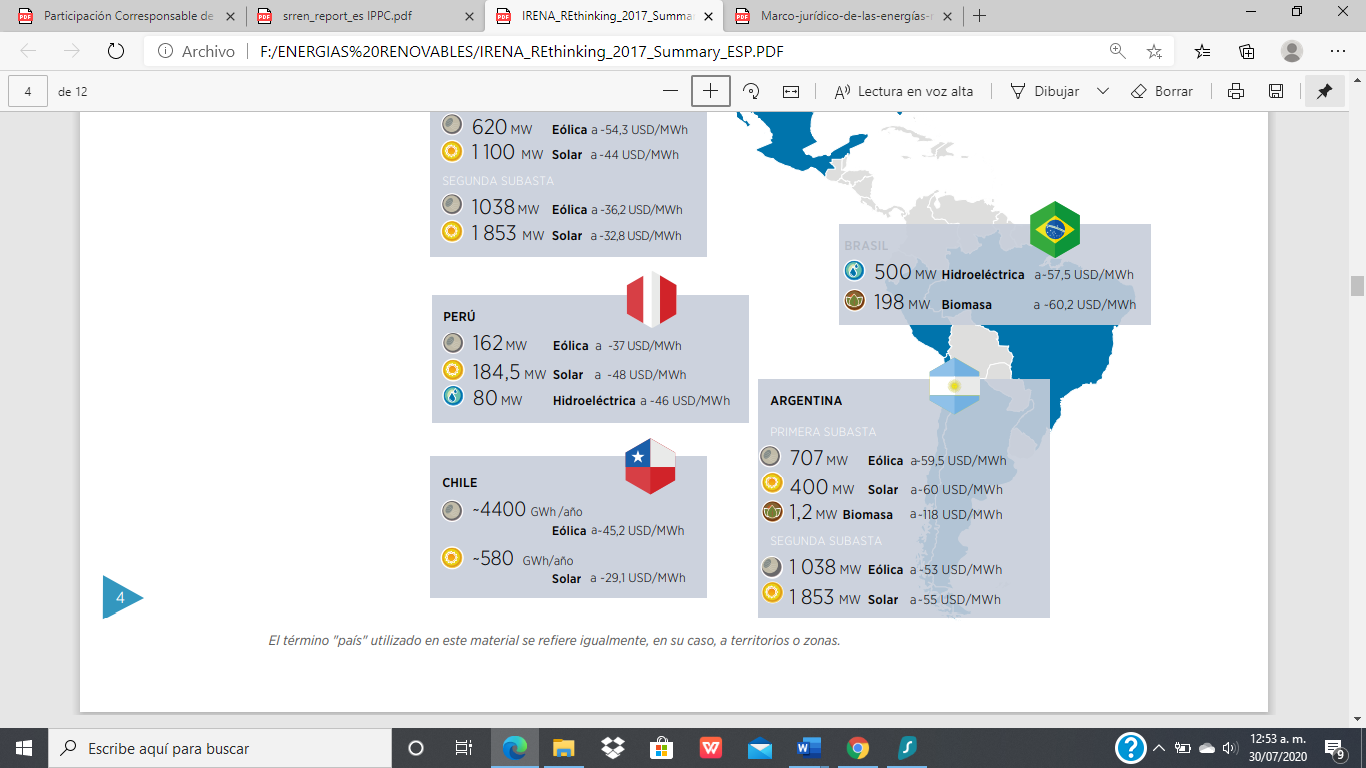
Las energías renovables contribuyen al desarrollo y bienestar humanos**. Al satisfacer las necesidades energéticas básicas de forma limpia y sostenible,** las energías renovables brindan beneficios de índole general en materia de salud, igualdad de género y oportunidades de educación. Más de cuatro millones de personas mueren prematuramente cada año debido a enfermedades atribuibles a la contaminación del aire en interiores producida por cocinar con biomasa tradicional y cocinas poco eficientes. Este peligro puede reducirse mediante las energías renovables no conectadas a la red para uso doméstico, combinadas con cocinas mejoradas (ODS 3). Para los mil millones de personas que dependen de centros de salud en zonas alejadas y rurales que actualmente carecen de electricidad, las renovables pueden mejorar los servicios de salud. Al reducir o eliminar el tiempo necesario para recoger leña, las energías renovables modernas también pueden liberar a las mujeres y niñas para que obtengan una educación (ODS 4 y 5) o realicen actividades lucrativas. **La electricidad brinda igualmente una iluminación de alta calidad en la escuela y el hogar, así como acceso a las tecnologías de la información.**

Estudios recientes de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA[[128]](#footnote-127)) y sus asociados muestran claramente que las energías renovables son competitivas y atractivas para los inversionistas, y crean millones de nuevos puestos de trabajo[[129]](#footnote-128). Las energías renovables ya constituyen una fuente importante de nuevos puestos de trabajo, creando aproximadamente 9,4 millones de empleos sólo en 2015 (incluidas las grandes centrales hidroeléctricas). Asia es la región líder y la energía solar fotovoltaica y la bioenergía son sus principales tecnologías. Si la cuota de renovables alcanza el 36% para 2030, se estima que se podrían crear unos 24,4 millones de puestos de trabajo[[130]](#footnote-129).

Duplicar la cuota de renovables haría que el PIB mundial aumentara más de un punto porcentual en 2030 con respecto a las previsiones iniciales, es decir, 1,3 billones de dólares (USD) en 2015, lo que equivale a la suma de las economías de Chile, Sudáfrica y Suiza. También ayudaría a ahorrar 4,2 billones de dólares USD anuales en gastos relacionados con el cambio climático y la contaminación atmosférica. Asimismo, la reducción acumulada de las emisiones de carbono (CO2) del sector energético podría llegar a 12 gigatoneladas[[131]](#footnote-130).

Las energías renovables son la primera opción para ampliar, incrementar o modernizar los sistemas de generación de electricidad en todo el mundo. Las **energías eólica y** solar, en relación con fuentes convencionales de electricidad, **han reducido sus costos considerablemente en los últimos años**. El precio de las turbinas eólicas ha disminuido casi un tercio desde 2009 y el de los módulos solares fotovoltaicos se ha reducido en un 80%. Esta evolución se refleja en el costo nivelado de la electricidad, y en algunos casos, ciertas tecnologías han alcanzado paridad en la red. Actualmente, la energía eólica terrestre, la biomasa, la energía geotérmica y la energía hidroeléctrica son competitivas o más económicas que las centrales eléctricas de carbón, petróleo o gas, incluso sin ayudas financieras y a pesar de los precios relativamente bajos del petróleo.

A finales de 2016, al menos 67 países habían celebrado subastas, en comparación con las 6 celebradas en 2005. En las subastas de electricidad procedente de energía solar fotovoltaica y energía eólica celebradas en 2016 se alcanzaron precios sumamente bajos. Algunos de los precios más bajos de electricidad procedente de energía eólica se registraron en el Norte de África, y en Marruecos se alcanzó un precio medio de 30 dólares por megavatio/hora, por ejemplo. Los precios de la electricidad procedente de energía solar fotovoltaica alcanzaron nuevos mínimos en varios países, entre ellos una oferta sin precedentes en los Emiratos Árabes Unidos (29,9 dólares por megavatio/hora). Comprender los factores en los que se sustentan estos resultados puede ayudar a formular futuras subastas y a acelerar el despliegue de las energías renovables[[132]](#footnote-131).



Algunas soluciones para integrar fuentes distribuidas y variables de energías renovables ya se están poniendo en práctica en algunos estados de los Estados Unidos, así como en Dinamarca, Italia y Alemania, por ejemplo. **Las experiencias obtenidas hasta ahora indican que integrar grandes cuotas de energías renovables no resulta tan complejo desde un punto de vista técnico** como se pensaba. Los operadores de redes han logrado integrar cuotas de energías renovables **superiores al 30%** sin aumentar considerablemente las capacidades de almacenamiento. Por ejemplo, la red que funciona bajo la suministradora eléctrica alemana de 50 Hz, la “Red Europea de Operadores de Redes de Transporte de Electricidad” (TSO), puede absorber una penetración de hasta **el 70% de energías renovables** sin almacenamiento. Dinamarca, Irlanda, Italia, España y Portugal han logrado integrar con éxito la energía renovable en sus redes nacionales. En dicho proceso, el sistema y funcionamiento del sistema debe amoldarse en última instancia al incremento de la energía renovable y no al contrario. Paralelamente, las soluciones deben ser rentables, fomentar la fiabilidad y la adecuación del sistema, y conseguir una distribución justa y equitativa de los costos y beneficios entre todos los consumidores[[133]](#footnote-132).

Los responsables de formular las políticas deben examinar más detenidamente el potencial de las renovables para calefacción y refrigeración de los edificios, la industria y para el transporte. Conjuntamente, estos dos sectores de uso final generan la mayoría (60%) de las emisiones de CO2 del sector de la energía. La movilidad eléctrica, así como las soluciones térmicas basadas en energías renovables desempeñarán un papel crucial en el futuro sistema energético. Asimismo, las sinergias potenciales entre el sector eléctrico y los sectores de uso final exigen que la política energética se aborde mediante un enfoque más integral. Junto con los continuos avances de la eficiencia energética, el acoplamiento entre sectores muy probablemente resultará clave para aprovechar plenamente las energías renovables en el sistema energético en general.

Otro de los beneficios, es la espectacular **reducción de costos** ha provocado un rápido crecimiento en nuevos mercados. El costo de la energía solar fotovoltaica (que actualmente solo representa el 50% de los costos en 2010) podría descender otro 60% en los próximos 10 años. Los proyectos a escala de distribución pueden competir económicamente con las nuevas instalaciones de generación basadas en combustibles fósiles, y la energía solar fotovoltaica compite sin ayudas financieras incluso en regiones en las que abundan los recursos fósiles. La energía solar fotovoltaica está destinada a revolucionar el sistema eléctrico, permitiendo a los consumidores producir electricidad para sus propias necesidades y transferir la energía sobrante a la red.

La electricidad procedente de instalaciones fotovoltaicas distribuidas a pequeña escala es más económica que la electricidad de la red de varios países, y es la opción menos costosa para regiones alejadas o no conectadas a la red. Las innovaciones en las técnicas de producción y el desarrollo de tecnologías más eficientes, adaptables, ligeras y económicas permitirá usar la energía solar fotovoltaica no solo en el suelo y los tejados, sino también en las fachadas y ventanas de edificios, carreteras y otras superficies, lo que hará posible la integración a gran escala de esta energía en ciudades y territorios del mundo entero.

La energía solar fotovoltaica será las que más crezca en términos de capacidad y producción. La energía solar fotovoltaica representará nada menos que el 7% de la generación mundial de electricidad en 2030, lo que implica su sextuplicación con respecto a la cifra actual. Las innovaciones tecnológicas en curso, las continuas economías de escala, la mayor automatización de la producción y las presiones económicas harán que los costos bajen aún más. IRENA estima que el costo medio de la electricidad procedente de centrales fotovoltaicas podría descender más del 50% entre 2015 y 2025, y que la capacidad mundial de generación de electricidad solar fotovoltaica podría llegar a 1.760 GW en 2030.

En conclusión, resulta evidente que las energías renovables son la clave del desarrollo sostenible del sector energético. Garantizan una energía limpia, a precios asequibles. Son generadoras de trabajo, de tecnología de punta, de eficiencia energética, que permite el ahorro de costo y energía, lo que redunda en el cuidado medio ambiental. Con menos, las personas hacen más a un menor costo, y satisfacen las necesidades absolutas de energía.

* + 1. **Los Actos Reclamados violan el derecho humano de acceso a la energía de la parte quejosa y acrecientan la pobreza energética.**

En el presente apartado se demostrará cómo es que los Actos Reclamados vulneran el derecho de la parte quejosa al acceso a la energía eléctrica limpia y asequible, reduciendo sus posibilidades para satisfacer sus necesidades absolutas de energía, y con ello, violando su derecho a vivir una vida digna y en paz.

En principio, debemos decir que tanto el Acuerdo CENACE como la Política SENER tienen como verdadera finalidad favorecer la participación de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y sus empresas subsidiarias en el mercado eléctrico. Son la respuesta a una instrucción dada desde el Poder Ejecutivo, en el Plan Nacional de Desarrollo en el cual se estableció que uno de los objetivos de la Economía, sería “Rescatar el sector energético” alegando que la reforma energética del régimen anterior le causó un daño gravísimo por los “designios privatizadores”.

Ahí quedó establecido que el propósito de importancia estratégica era que CFE volviera a operar como palanca del desarrollo nacional”. Asimismo, quedó dicho que CFE revisaría recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y que se revisaría sus cargas fiscales, claro está para lograr el efecto contrario, pagar menos impuestos.

“Rescate del sector energético

La reforma energética impuesta por el régimen anterior causó un daño gravísimo a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, empresas productivas del Estado que ya venían sufriendo el embate de los designios privatizadores. En el sexenio pasado la producción petrolera cayó en una forma tan sostenida que México pasó de ser exportador a importador de crudo y combustibles refinados. Sin embargo, la producción de las entidades privadas fue insignificante, a pesar de las ventajosísimas condiciones en las que recibió las concesiones correspondientes.

Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. En ese espíritu, resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisará sus cargas fiscales.

Se buscará la rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para apoyar a productores agrícolas.

Se superarán mediante el diálogo los conflictos con poblaciones y comunidades generados por instalaciones de Pemex y la CFE, así como las inconformidades sociales por altas tarifas. La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos millones de habitantes. La transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese ramo, así como para alentar la reindustrialización del país.

Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales. Esa situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier perspectiva económica: para los propios informales, que viven en un entorno que les niega derechos básicos, para los productores, que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores, y para el fisco, que no puede considerarlos causantes.

El sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte de los empleos) y reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.

El gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria por encima del desarrollo sustentable del sector eléctrico y del despacho eficiente, busca fortalecer la participación y desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas subsidiarias, lo que podría ocasionar que se limite el despacho de las centrales eólicas y solares ya existentes, al impedirles ofrecer su energía sin importar si son más eficientes, lo que podría implicar un desconocimiento de transacciones y contratos realizados por los titulares de estas plantas, así como la constitución de una barrera para el acceso abierto del mercado eléctrico mayorista; y que se favorezca el despacho de centrales eléctricas convencionales.

La participación ciudadana en el monitoreo y mecanismos para exigir la rendición de cuentas tiene que ser un aspecto central para la implementación efectiva de la Agenda 2030, ya que la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios públicos pueden contribuir a un marco de implementación accesible e inclusivo, que facilite la rendición de cuentas. La inversión en el monitoreo ciudadano asegura que las lecciones aprendidas en contextos locales puedan influir en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Es el caso que los actos y omisiones reclamadas alterarán el **funcionamiento del mercado** en términos de libre concurrencia y competencia económica, consistentes en la generación de fenómenos monopólicos que a la postre, pueden provocar el alza injustificada de precios y la reducción en la eficiencia de la prestación del servicio, en **perjuicio de los usuarios finales**. Tal afirmación será motivo de pruebas periciales que al respecto ofrezca oportunamente la parte quejosa.

De igual forma, la protección de la estabilidad en el mercado eléctrico es un interés social, pues al establecerse **barreras de entrada** al **mercado eléctrico mayorista**, éste **no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica**, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad.

**Es previsible que se extienda el período de contingencia** por un lapso que en este momento es indefinido, y por ende, la posibilidad de que se impida el acceso al mercado a las quejosas durante ese lapso, y se retrase su eventual participación en la producción de energía renovable, parece **acrecentar la ponderación** **de su apariencia del buen derecho**, pues su afectación no consiste en una modificación o restricción de su actividad, sino un **impedimento total** en su potencial entrada en operación, por un periodo de tiempo que aunque señalado, es indeterminado.

Así las cosas, el marco jurídico y regulatorio existente, contempla ya los mecanismos para asegurar la confiabilidad, calidad, sustentabilidad, eficacia y seguridad en el despacho, como las reglas del mercado y el Código Red, que permiten la entrada de fuentes limpias, mitigando los riesgos generados por la práctica de las pruebas pre-operativas, como la implementación de los **Esquemas de Acción Remedial** (EAR); lo cual indicaría que la autoridad decidió eliminar ese riesgo sin hacer uso de esos mecanismos, **por razones de carácter económico** y técnico.

Los Actos Reclamados **violan el derecho humano de acceso a la energía eléctrica que lejos de plantear políticas que con miras a superar la pobreza energétic**a, **la acrecientan**, violando con ello, los artículos, 4,5,6 y 7 de la Constitución, y en los distintos tratados internacionales que promueven los derechos sociales, económicos y culturales, como lo son, los artículos 11 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 11, numeral 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador, el artículo 2, inciso h de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social; así como el derecho al mínimo vital con el que cuenta toda persona para contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Lo anterior, por **encarecer su costo injustificadamente, y reducir las posibilidades de la parte quejosa para satisfacer de forma asequible las necesidades absolutas de energía con energía limpia y asequible**.

Ello va de la mano con el derecho a un mínimo vital de la parte quejosa y, en general, de la colectividad, pues el encarecimiento de la energía eléctrica vulnerará indefectiblemente el acceso a la energía eléctrica en su vertiente de pobreza energética, por lo que su Señoría deberá de conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa.

**SÉPTIMO. LOS ACTOS RECLAMADOS VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y LA NO REGRESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y A LA SALUD.**

En este concepto de violación se demostrará que los actos reclamados consistentes en el Acuerdo del CENACE, la Política de SENER y la Resolución de la CRE vulneran el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad en relación con mis derechos al medio ambiente y a la salud.

Para acreditar lo anterior, en un primer momento se dará cuenta de la metodología desarrollada por la Primera Sala para el análisis de las obligaciones que se derivan de derechos sociales -proteger el núcleo esencial, progresividad y no regresividad- para posteriormente acreditar que en el caso concreto se ha vulnerado el principio de no regresividad.

**I. Obligaciones de las autoridades frente al derecho a un medio ambiente sano y a la salud**

Como señaló la Suprema Corte en el amparo en revisión 566/2015, para determinar si ha habido un incumplimiento por parte de las autoridades respecto de un determinado derecho social, debe de analizarse de manera sucesiva: **(1)** si las autoridades han garantizado el núcleo esencial del derecho, **(2)** si se han adoptado políticas razonables para, de manera progresiva, alcanzar el pleno ejercicio del derecho en cuestión y **(3)** no adoptar medidas regresivas sin una estricta justificación constitucional. En dicha sentencia se lee:

De acuerdo con lo expuesto anteriormente,puede decirse que existe unadistinción entre distintos niveles de protección en los derechos sociales: **(i)** un *núcleo esencial* que protege la *dignidad de las personas* e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en caso de una vulneración; **(ii)** cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar *progresivamente* la plena realización del derecho; y **(iii)** un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas.[[134]](#footnote-133)

Al respecto, es importante destacar que los deberes mencionados no se limitan a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), sino que también deben de ser aplicados a cualquier medida relacionada con la protección y salvaguarda de los derechos humanos -obligaciones positivas-, como claramente lo prevé el artículo 1 constitucional.[[135]](#footnote-134)

Sirve de sustento a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J.86/2017(10a.) de rubro “**PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES”.**

**a. Núcleo Esencial**

En su Observación General No. 3, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló:

“(…) corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. …. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser.”

En el mismo sentido, en los amparos en revisión números 323/2014, 750/2015 y 378/2014, la Suprema Corte ha sostenido que los derechos sociales tienen un *núcleo esencial* que debe ser protegido por el Estado, que tienen un “contenido mínimo” que debe ser resguardado absolutamente y que el estado tiene la obligación mínima de asegurar la satisfacción de “niveles esenciales” de dichos derechos.

La Corte ha señalado que “para poder determinar los elementos mínimos necesarios para exigir un derecho fundamental, es necesario buscar e identificar lo que se ha denominado: el núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales”, es decir, “aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que dan vida al derecho resulten real, concreta y efectivamente protegidos”.

Así, el núcleo esencial de los derechos puede entenderse como aquellas condiciones mínimas que el Estado debe garantizar para que determinado derecho pueda cobrar vigencia y efectividad.

**b. Principio de Progresividad**

A efecto de exponer el principio en cuestión, resulta fundamental tener en cuenta el texto del artículo 1° constitucional, cuyo tenor literal es el siguiente:

**Artículo 1°.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

**Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de** universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

[Énfasis añadido]

La disposición en cita contiene el mandato a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Establece que, ante su transgresión, el Estado deberá ordenar la adecuada reparación en favor de los gobernados.

En el mismo sentido, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto **se compromete a adoptar medidas**, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, **hasta el máximo de los recursos de que disponga,** **para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,** inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” señala:

Artículo 1

Obligación de Adoptar Medidas

Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos **se comprometen a adoptar las medidas** necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, **hasta el máximo de los recursos disponibles** y tomando en cuenta su grado de desarrollo, **a fin de lograr progresivamente**, y de conformidad con la legislación interna**, la plena efectividad de los derechos** que se reconocen en el presente Protocolo.

[Énfasis añadido]

Y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, **para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura**, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

[Énfasis añadido]

De los artículos que preceden se advierte el principio de progresividad, el cual impone la obligación de los estados de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos. Concretamente, a través de este principio, todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, están constreñidas a incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

En la Observación General No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se señala que, en virtud de la obligación de progresividad de los derechos humanos, “se impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo”. Por su parte, en el amparo en revisión 566/2015, la Suprema Corte señaló:

El deber de progresividad en relación con la satisfacción del contenido de los derechos sociales implica que **tiene que existir una política pública razonable** para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión. En este sentido, los tribunales deben analizar si la medida impugnada se inscribe dentro de una política pública **que razonablemente busque alcanzar la plena realización del derecho social**.”

Específicamente en materia ambiental, el principio de progresividad se encuentra recogido en el acuerdo de París, en la Ley de Cambio Climático y en general, en todos los compromisos del Estado Mexicano de reducción paulatina de emisiones a la atmósfera.

De lo anterior se desprende que, si bien a los estados no les puede ser exigible el cumplimiento inmediato de los derechos económicos, sociales y culturales -entre ellos, el derecho al medio ambiente sano y a la salud- sí les es exigible que realicen el máximo de sus esfuerzos para lograr eventualmente su plena efectividad, lo que implica que el estado cuente con políticas públicas para ello, las cuales deben de enmarcarse en un parámetro de razonabilidad.

Bajo esta línea y como lo señaló la Corte en el amparo en revisión 566/2015, si bien es cierto que la autoridad administrativa es quien se encuentra mejor posicionada para determinar que políticas públicas adoptar, dicha decisiones no escapan del escrutinio y control judicial en cuanto al análisis de la razonabilidad de aquellas medidas encaminadas a alcanzar la plena realización del derecho social en cuestión.

**c. Prohibición de Adoptar Medidas Regresivas**

Dado que el principio de progresividad exige a las autoridades incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, también les está impedido adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado Mexicano, es decir, el principio de progresividad impone un deber correlativo de no regresividad.[[136]](#footnote-135)

En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 3, señaló que en virtud del principio de progresividad de los derechos humanos:

(…) todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.

Al respecto, la Suprema Corte en el Amparo en Revisión 566/2015 señaló que el mandato de la no regresividad implica que:

(…) una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.

Y que:

(…) en la adopción de medidas que resulten regresivas, corresponde al Estado justificar con información suficiente y argumentos pertinentes la necesidad de dar un paso regresivo en el desarrollo de un derecho social. En tal sentido, la constitucionalidad de una medida regresiva en materia de derechos económicos, sociales y culturales depende de que supere un test de proporcionalidad, lo que significa que la medida debe perseguir un fin constitucionalmente válido, además de idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.

[Subrayado añadido]

Así, el fundamento o la justificación de la prohibición de regresividad descansa, por un lado, en la noción de seguridad jurídica y protección de la confianza; también identificada con la garantía de previsibilidad. Es decir, una nota de estabilidad en las cartas de triunfo obtenidas. Asimismo, esa estabilidad hace posible la garantía de que las condiciones mínimas fijadas no serán reducidas.[[137]](#footnote-136)

De esta forma, las autoridades únicamente pueden adoptar medidas regresivas cuando las mismas cumplan con un deber de motivación reforzado, justificando debidamente que dichas medidas persiguen fines constitucionales y que son idóneas, necesarias y proporcionales, deber que como se demostrará a lo largo de este concepto, no ha sido cumplimentado por las autoridades responsables.

Es importante destacar que es posible distinguir entre dos tipos de regresividad: la de resultados y la normativa. En el primer caso, existe regresividad cuando los resultados de una política pública empeoran la satisfacción de un derecho social. En el segundo caso, existe regresividad normativa simplemente cuando cuna norma posterior suprime, limita o restringe los derechos o beneficios que se habían otorgado anteriormente al amparo del derecho social.[[138]](#footnote-137)

En el presente caso se argumenta que nos encontramos frente medidas que son regresivas por resultados y normativamente.

En conclusión, los actos reclamados (i) no tiene como finalidad garantizar en un mayor grado derechos humanos -finalidad- (ii) no lograrán un mejor acceso a mejores precios de la energía eléctrica (iii) existían medidas menos restrictivas para abordar los supuestos problemas que se quieren abordar -intermitencia de las fuentes de energía renovables y su ubicación-; (iv) se afecta de manera totalmente desproporcional el derecho al medio ambiente y a la salud y, en consecuencia, se trata de medidas que violan el principio de no regresividad.

Se trata de una medida regresiva que carece de una justificación racional de cara a mis derechos a la salud y al medio ambiente y, en consecuencia, resulta arbitraria e inconstitucional.

**OCTAVO. LOS ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA EN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE LA PARTE QUEJOSA**

A través del presente concepto de violación se demostrará que los actos reclamados vulneran en mi perjuicio los principios de competencia y libre concurrencia establecidos en los artículos 1°, 25, 27 y 28 de la Constitución General, con relación con los principios de legalidad y seguridad jurídica, derivado del incumplimiento con los artículos 1º, 2º, 10, 12, 52 y 94, de la LFCE, así como con los artículos 4°, 105, 159 y Cuarto Transitorio de la LIE. Disposiciones legales que prevén de modo específico la aplicabilidad de los principios constitucionales de competencia y libre concurrencia en el SEN.

Específicamente, los actos reclamados resultan violatorios de derechos de los agentes económicos participantes en el mercado eléctrico nacional (“**MEM**”) y, de manera correlativa, del derecho de los consumidores y usuarios finales de los servicios de energía eléctrica, a beneficiarse del proceso de competencia y libre concurrencia en este mercado.

Lo anterior, pues los actos reclamados generan una **ventaja desproporcionada en favor de las energías generadas con combustóleo en contraposición a aquellas que se generan mediante energías limpias.**

**El perjuicio se advierte con mayor claridad si se considera que las energías generadas con combustóleo son, -*en su mayoría-* propiedad de la CFE y su fortalecimiento fomenta la creación de un monopolio estatal, además de que aumentan injustificadamente las tarifas de transmisión a las centrales de generación con fuentes de energía renovable, lo que además genera un efecto inflacionario en los precios por consumo de electricidad**. Situaciónque evidenciala correlativa violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, debido a la falta de motivación de dichas medidas.

A efecto de evidenciar las violaciones que se hacen valer, el tramo argumentativo se dividirá conforme a lo siguiente. En el **apartado I** se desarrollará el marco normativo que da contenido a los principios de competencia y libre concurrencia. En el **apartado II** se explicará brevemente en qué consiste la prohibición constitucional de monopolios y de otorgamiento de ventajas exclusivas indebidas por sus efectos anticompetitivos. A partir de la conceptualización del principio de interdependencia de los derechos fundamentales, mediante el **apartado III** se coligarán los principios de competencia y libre concurrencia con los derechos de los consumidores. Posteriormente, en un **apartado IV** se analizará la aplicabilidad de dichos principios al SEN derivado de la Reforma Energética de 2014. Y, finalmente, en el **apartado V** se evidenciará la inconstitucionalidad de los actos reclamados en el caso concreto.

**I. Los principios de competencia y libre concurrencia en el marco constitucional.**

El marco normativo que da fundamento al sistema de competencia y libre concurrencia se encuentra principalmente en el artículo 28 de la CPEUM y tiene como finalidad salvaguardar el funcionamiento eficiente de los mercados. Dicha disposición constitucional despliega un ámbito de protección amplio sobre los mercados garantizando que se mantengan abiertos, y que los agentes económicos que participen en ellos puedan desarrollarse libremente, realizando sus actividades y satisfaciendo necesidades.

El proceso de competencia y libre concurrencia no es otra cosa que la serie de actos o esfuerzos que realizan los agentes económicos rivales, situados en posiciones contrapuestas, por capturar la preferencia de los consumidores, por obtener, lo que se conoce como el voto económico de los consumidores. Tal y como ha sido explorado por los especialistas en la materia, obtener el voto económico de los consumidores constituye un incentivo poderoso para que los agentes económicos inviertan en el desarrollo de más y mejores bienes y servicios, y los ofrezcan a precios más competitivos.

Así, los principios de competencia y libre concurrencia protegen precisamente al consumidor, a los propios agentes económicos que participan en el mercado, y a la sociedad en general, ya que protegen la integridad de una estructura en la que cada participante desempeña un papel indispensable para el funcionamiento eficiente del mercado. Eficiencia que se entiende en términos prácticos como la reducción de los precios, la maximización del desarrollo y la constante innovación en la oferta de bienes y servicios, todo ello en beneficio de los consumidores.

Resulta inconcuso que el artículo 28 de la Constitución General prescribe un derecho humano a beneficiarse de mercados competidos, o bien, un derecho humano a participar en mercados donde rija el proceso de competencia y libre concurrencia. Como ha quedado establecido antes, un mercado competido es aquél que permite libremente la entrada o salida sin obstáculos ni barreras artificiales -*creadas, ya sea por las autoridades en la emisión de actos y de normas generales que contravienen los principios de la competencia económica o por agentes económicos que actúan en contravención a la legislación de competencia*-. Es decir, aquél en el que no ha arraigado un monopolio, en el que se persiguen con efectividad las prácticas monopólicas, y en el cual no se otorgan ventajas indebidas a determinadas personas o a determinadas clases sociales. Dicho con otras palabras, se trata de una prerrogativa tanto de consumidores como de agentes económicos de participar libremente en el mercado, es decir, libres de actos de autoridad, regulación y conductas anticompetitivas, lo cual resulta indispensable para su desarrollo integral como individuos y empresas económicamente activas.[[139]](#footnote-138)

Los consumidores y los agentes económicos deben tener la libertad de poder acceder a un mercado no capturado por agentes dominantes.

Conforme a lo previsto por el artículo 28 constitucional, los principios de competencia y libre concurrencia derivan en el derecho a acceder a un mercado abierto, en el que no existan obstáculos o barreras artificiales, es decir, en el que consumidores puedan acceder libremente a una variedad de ofertas, a productos de alta calidad, y precios bajos merced a la competencia. Además, en el que los agentes económicos no se atengan a otra cosa más que al voto económico del consumidor, quien debe poder aprovechar los beneficios económicos que le reporta la competencia entre agentes económicos. Este derecho implica asimismo igualdad de oportunidades: la ausencia de ventajas para unos y desventajas para otros.[[140]](#footnote-139)

Es precisamente en beneficio de los consumidores, de los agentes económicos que concurren al mercado, y de la sociedad en general que se dispuso un regulador autónomo en la materia. La COFECE debe velar porque no se formen monopolios, ni se cometan prácticas monopólicas o se otorguen ventajas exclusivas e injustificadas a unos agentes económicos sobre otros, fomentando, en cambio, que todos los participantes en el mercado compitan en igualdad de condiciones para satisfacer la demanda de los consumidores por bienes y servicios.

Ahora, los principios de competencia y libre concurrencia deben garantizarse y preservarse de manera transversal en todos los mercados de bienes y servicios -*especialmente en el MEM como se expondrá más adelante*-. De este modo, dichos principios rigen el grueso de las actividades económicas.

Refuerza esta interpretación lo dispuesto por el artículo 1° de la LFCE el cual establece que sus disposiciones son de orden público y de interés social, aplicables a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.

Por ello, **la obligación de ceñirse a los principios constitucionales, y a las disposiciones legales en materia de competencia económica** no sólo **debe ser observada** por los agentes económicos que participan en el mercado, sino **también por las autoridades, en la emisión de leyes, reglamentos y actos administrativos**. Así, existe una obligación de carácter negativo para los entes públicos, que habrán de abstenerse de intervenir en los mercados obstaculizando el proceso de competencia. Ya sea mediante el fomento o el otorgamiento de ventajas exclusivas indebidas a favor de una persona determinada *-a una empresa productiva del Estado como la CFE, por ejemplo*- en perjuicio de la colectividad.

En esa medida, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de competencia, en la revisión de los actos de autoridad o de las normas generales de las que llegasen a conocer.

Así lo han considerado los juzgados de distrito y tribunales colegiados administrativos especializados en materia de competencia, radiodifusión y telecomunicación, al admitir amparos indirectos no solo en su carácter de juzgadores de alzada respecto a las resoluciones definitivas de las agencias reguladoras en dichas materias (COFECE e IFT), sino también para revisar la constitucionalidad de actos de otras autoridades, que pudieran poner en riesgo el proceso de competencia y libre concurrencia.

Por ejemplo, la SCJN ha precisado que entre los bienes tutelados por el artículo 28 Constitucional, se encuentran los derechos del consumidor y de la sociedad, sin que ello implique que se trata de la única protección perseguida por dicha norma. Esto, en la medida que el texto constitucional también reconoce los principios relativos a la competencia y libre concurrencia, pues en la medida en la que existen estos últimos, el consumidor y la sociedad en general, como eslabones de una cadena de producción, se benefician.

En otras palabras, como se expondrá en líneas siguientes, los conceptos de competencia y libre concurrencia invariablemente van unidos a la pretensión de no afectar a los consumidores y al público en general por la realización de actos que no permitan la adquisición de bienes y servicios en condiciones de competencia.[[141]](#footnote-140)

En estos términos el parámetro de control constitucional planteado para analizar la regularidad de los actos reclamados consistirá en evaluar si materialmente o en sus resultados frustran o impiden el ejercicio de la libertad de comercio en un ambiente de competencia efectiva.

Con motivo de la reforma constitucional en materia de competencia económica y telecomunicaciones, particularmente de cara a lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional, se ha incorporado expresamente en la esfera de derechos de los agentes económicos el derecho fundamental a la prestación de sus servicios en un mercado en el que existan condiciones de competencia efectiva y libre concurrencia. Sobre el tema, al resolver el Amparo en Revisión 1414/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido:

“Sin embargo, no debe confundirse un escenario de competencia y libre concurrencia, con uno en el que todos los competidores se encuentren en absoluta igualdad de condiciones. Esto es, la exigencia constitucional no implica que todos los participantes de un mercado deban encontrarse en las mismas condiciones, o que deban contar exactamente con la misma infraestructura y con medios idénticos, sino que se entenderá que en un mercado se respetan tales principios, cuando existen las condiciones necesarias para que los participantes compitan entre sí de manera efectiva, excluyendo todos aquellos elementos que se traduzcan en impedimentos para ingresar al mercado y que, en última instancia, impliquen la exclusión de ciertos agentes del mismo.

Esto es, cuando en un mercado en concreto no existan barreras a la competencia para ingresar al mismo –cumpliendo con los requisitos legales para tal efecto–, ni se impida la competencia efectiva, no podrá alegarse una vulneración al texto constitucional, con independencia de que, precisamente con motivo del proceso de competencia, cierto agente goce de mayor preferencia dentro de los consumidores.

…. Así, no solamente se requiere que el mercado se encuentre fragmentado, esto es, que existan varios oferentes y demandantes, sino que adicionalmente, es necesario que ninguno cuente con poder sustancial dentro del mercado, para que no sea capaz de determinar unilateralmente los precios.[[142]](#footnote-141)

Ahora bien, justamente la presencia de tales barreras para que existiera una efectiva competencia […], fue una de las razones que suscitaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones…”

Así, el órgano jurisdiccional de amparo ha de revisar si los actos reclamados limitan o restringen los principios que deben regir en los mercados a la luz del texto constitucional.

1. **La prohibición de monopolios y de otorgamiento de ventajas exclusivas indebidas.**

Bajo esta tesitura es que el propio artículo 28 de la CPEUM prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, así como todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social, ya que por sus características y efectos dichas situaciones entorpecen el proceso de competencia y libre concurrencia.

Lo anterior porque constituyen obstáculos que impiden el acceso a mercados que debieren ser abiertos, y debilitan -*o del todo anulan-* la capacidad de los agentes económicos para competir. Ello daña el proceso de competencia y libre concurrencia, en la medida que concurren menos participantes al mercado, pero más importante, redunda en completo perjuicio de los consumidores o de los usuarios finales quienes ven tanto la variedad como la calidad de los bienes y servicios a los que tienen acceso también reducirse, y se ven obligados a pagar precios más elevados.

En apoyo de lo anterior, conviene referir lo resuelto por la Segunda Sala de la SCJN en los amparos en revisión 839/2014 y 289/2015:

* Amparo en revisión 839/2014 p.48

“…se tiene que el artículo 28 Constitucional en su primer párrafo es claro en prohibir entre otros, los monopolios y las prácticas monopólicas, los cuales, por su naturaleza, se entienden como todo acto que evita o tiende a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas. Esto es, se trata de actos que atentan contra el proceso de competencia y la libre concurrencia, afectando el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios…”.

(Énfasis añadido)

* Amparo en revisión 289/2015 p. 40

“…Ello se explica porque, todos los actos que constituyan monopolio o práctica monopólica, por sus características, disminuyen el proceso de competencia y libre concurrencia, afectando el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, esto es, afectando las cadenas de producción y, por ende, al último eslabón de éstas, es decir, al consumidor, porque no reflejan el costo real de los bienes y servicios, el cual sólo existe en un ambiente de competencia… pues con ello desconoce que los actos que prohíbe la Constitución son los que constituyan ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas…”.

Efectivamente, la creación de un monopolio, entendido como cualquier acto que constituya una ventaja exclusiva en favor de una a varias personas, sea por la conducta de uno o varios agentes económicos dominantes o debido a la emisión de legislación o regulación anticompetitiva, distorsionan el proceso de competencia. Esto, en tanto que erigen barreras artificiales que impiden la libre entrada y salida del mercado, es decir, desplazan competidores de manera indebida, dañado en última instancia a los consumidores, a quienes se les dificulta o incluso imposibilita beneficiarse de sus efectos, al serles negados productos nuevos a precios más bajos.

Esas prohibiciones fundamentales son, por supuesto, correlativas de un mandato a las autoridades competentes –*entre otras, la COFECE*- de perseguir con severidad y eficacia **todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social**. Es decir, se ordena a las autoridades competentes perseguir con contundencia y a sancionar cualquier intento de creación de un monopolio.

Esta -*interpretación encuentra sustento en los criterios de la Segunda Sala de la SCJN*-, que, al resolver el amparo en revisión 289/2015, estimó que la interpretación correcta del artículo 28 Constitucional exige reconocer que el bien jurídico que se pretende tutelar no se limita a ciertas prácticas monopólicas específicas, tal como podrían ser el acaparamiento de bienes necesarios o las prácticas monopólicas absolutas, sino que su ámbito de protección al consumidor es más amplio, puesto que busca garantizar un estructura de mercado abierta, que permita a participantes y consumidores y usuarios concurrir libremente para desempeñar sus actividades y satisfacer sus necesidades.

Con base en este mandato amplio de combatir la creación de monopolios y la comisión de prácticas monopólicas, garantizando la competencia y la libre concurrencia, y por consiguiente el funcionamiento eficiente de los mercado, el mismo artículo 28 constitucional crea la COFECE como órgano constitucional autónomo, con las atribuciones de **(i)** perseguir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; **(ii)** recibir de cualquier persona denuncias por prácticas monopólicas -*artículo 67 de la LFCE*-, e investigar y sancionar las que encontrare; **(ii)** presentar controversia constitucional contra cualquier acto o disposición general, incluso del Ejecutivo Federal, que vulnere sus atribuciones -*último párrafo del artículo 95 de la LFCE*-, **(iii)** resolver sobre las condiciones de competencia efectiva en los mercados, **(iv)** emitir y publicar opiniones en materia de libre concurrencia y competencia respecto de actos administrativos de carácter general conforme a lo previsto el artículo 12 fracción XV; y de **(v)** ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia conforme al procedimiento previsto en el artículo 94 de la LFCE.

Para la consecución de sus distintas atribuciones, la COFECE se vale, pues, de distintas herramientas, usualmente disponibles para el regulador de competencia, como son la regulación de acceso abierto, la compartición de infraestructura, la regulación asimétrica, y la imposición de multas y sanciones, entre otras.

En este sentido, los actos reclamados vulneran los principios de competencia y libre concurrencia, además de hacer patente el incumplimiento por parte de la COFECE, quien, como órgano constitucional autónomo, encargado de salvaguardar el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados –es decir, de fomentar que todos los participantes en el mercado compitan en igualdad de condiciones para satisfacer la demanda de los consumidores por bienes y servicios–, incumple con su obligación de velar porque no se formen monopolios, se cometan prácticas monopólicas o se otorguen ventajas exclusivas e injustificadas a agentes económicos sobre otros.

Lo anterior, al omitir dar respuesta y trámite a los escritos/denuncias de fecha \_\_\_ de \_\_\_\_ de 202X, presentados respectivamente la COFECE, el C. Titular de la Autoridad Investigadora de la COFECE, entre otras.

1. **Los consumidores como últimos destinatarios de la tutela del proceso de competencia y libre concurrencia.**

Como se expuso, una de las finalidades que persigue el artículo 28 Constitucional mediante la tutela del proceso de competencia y libre concurrencia, proteger a los consumidores al garantizar su derecho a acceder a más y mejores bienes y servicios a precios competitivos, pero también a los agentes económicos que concurren a él en tanto se mantiene a salvo su derecho a competir en igualdad de condiciones y en un clima de apertura.

En otras palabras, los multicitados artículos constitucionales protegen el proceso de competencia y libre concurrencia en *pro* del funcionamiento eficiente de los mercados, **los beneficiarios últimos de dicha tutela son los consumidores o los usuarios finales de bienes y servicios**. Mediante la salvaguarda de una estructura de mercado abierta y que privilegia la concurrencia en igualdad de condiciones –el proceso de competencia y libre concurrencia–, la norma constitucional proporciona a los consumidores la garantía de que podrán beneficiarse de una mayor oferta de bienes de mejor calidad, y a precios más bajos. Asimismo, ofrece a los participantes en el mercado la seguridad de que no encontrarán barreras a la entrada de los mercados, y que nadie que concurra obtendrá beneficios, prebendas o ventajas exclusivas en perjuicio de sus competidores.

Esto no es más que consecuencia de la interdependencia de los derechos fundamentales, a partir de la cual no es dable entender los principios de competencia y libre concurrencia en forma aislada. Contrario a ello, se erigen en garantía para los usuarios finales y consumidores de bienes y servicios.

Un mercado funcional, en el que prevalece la libre competencia, genera incentivos para que los agentes económicos busquen atraer la preferencia de sus clientes. Cuando un servicio o producto se ofrece en condiciones de calidad y precio atractivas para los consumidores, los agentes económicos encuentran un incentivo natural para invertir en la mejora de sus bienes y servicios y, con ello, se amplía constantemente la oferta en beneficio de los consumidores.

Retomemos el pronunciamiento de la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 289/2015 y 839/2014, que para su pronta referencia se transcribe en lo que interesa:

* Amparo en revisión 289/2015

“…los conceptos de competencia y libre concurrencia invariablemente están vinculados a la figura del consumidor, ya que en la medida de que la competencia y libre concurrencia se respeten, éste accederá a unas condiciones de mercado que le permitan adquirir bienes y servicios en condiciones de libertad… …reconocen la protección que el artículo 28 constitucional busca para los consumidores y la sociedad en general, pues fija las reglas para la existencia de procesos de competencia y libre concurrencia, los cuales garantizan la adquisición de bienes y servicios en condiciones equilibradas…”.

* Amparo en revisión 839/2014

“…También es importante indicar que esta Suprema Corte no desconoce que **uno de los bienes jurídicos tutelados en el artículo 28 constitucional, es el consumidor y la sociedad**, pero ello no implica afirmar que se trate de la única protección que persigue la Constitución, pues también reconoce la competencia y libre concurrencia, y esto es lógico porque en la medida en que exista un ambiente de competencia y libre concurrencia, el consumidor y la sociedad en general como eslabones de un cadena de producción, se verán beneficiados porque no serán afectados por prácticas monopólicas. Es decir, los conceptos de competencia y libre concurrencia invariablemente van unidos a la búsqueda de no afectar a los consumidores y al público en general por la realización de actos que no permitan la adquisición de bienes y servicios en condiciones de competencia.”

(Énfasis añadido)

La violación que los actos reclamados generan en los derechos humanos de los consumidores y/o usuarios finales de los servicios de energía eléctrica se desarrollará en apartados subsecuentes. No obstante, se adelanta que la política gubernamental seguida en el sector de energía eléctrica, concretamente el Acuerdo CENACE, la Política SENER y la Resolución de Tarifas de la CRE, resultan en una ventaja desproporcionada en favor de las energías generadas con combustóleo en contraposición a aquella generada mediante energías limpias. Como se expuso, al ser las primeras en su mayoría propiedad de la CFE, fomentan la creación de un monopolio estatal y se traducen en el aumento injustificado en las tarifas de transmisión a las centrales de generación con fuentes de energía renovable, lo que genera un efecto inflacionario en los precios por consumo de electricidad.

En otras palabras, los actos reclamados generan una barrera a la competencia y libre concurrencia en el MEM que, en última instancia, impide a los consumidores y/o usuarios finales acceder a mejores servicios a precios más competitivos. Es decir, abiertamente violan su derecho humano a beneficiarse del proceso de competencia y libe concurrencia en el mercado eléctrico mexicano.

1. **Los actos reclamados violan el derecho humano de los agentes económicos que concurren al mercado eléctrico de beneficiarse del proceso de competencia y libre concurrencia.**

Por otro lado, los actos reclamados violan flagrantemente el derecho del que son titulares los agentes económicos competidores que concurren al mercado eléctrico en México –*específicamente, los generadores de energías limpias o renovables*– consistente en poder acceder libremente al mercado, en igualdad de condiciones que el resto de los competidores, y sin que su actividad sea obstaculizada por barreras artificiales como normas o disposiciones generales claramente anticompetitivas, es decir, su derecho a participar en mercado competidos. Esto, en correlación con los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben prevalecer en el actuar de las autoridades y las sujetan a actuar conforme al marco normativo válido y vigente aplicable, lo que no sucedió en la especie.

1. **Afectación de los derechos de los consumidores / usuarios finales del servicio público de energía eléctrica en relación con los principios de competencia y libre concurrencia.**

Finalmente, los actos reclamados infringen los derechos de los consumidores y usuarios finales de los servicios de energía eléctrica -*situación que me acontece-* a beneficiarse de mercados eficientes merced a un robusto proceso de competencia y libre concurrencia. Como se explicó en apartados precedentes, los consumidores tienen derecho a desenvolverse en mercado competidos, en los que, por virtud de la rivalidad entre agentes económicos, puedan acceder a bienes y servicios en condiciones de calidad y a precios cada vez más bajos, incluso a precios marginales. Mercados en los que la competencia reduzca los precios a niveles menores de los que dichos consumidores estarían dispuestos a asumir, el llamado “beneficio del consumidor” o “*consumer surplus*”.

En la cúspide del marco normativo aplicable, el artículo 25 de la CPEUM establece el principio de Rectoría Económica del Estado, donde convergen los sectores público, privado y social. Si bien en estos elementos no aparece específicamente el término “consumidor”, sí se determina que el objetivo de dicha rectoría es que se permita el “pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos (…) cuya seguridad protege esta Constitución”. Adicionalmente, este artículo establece que las funciones de regulación del Estado se orientarán a que los ciudadanos puedan ejercer y ampliar sus libertades. Estos dos últimos aspectos son clave en el marco de las reformas al artículo 1º Constitucional en el que se establece el principio *pro persona*, pues ubican al consumidor en una posición central para la competencia económica y para la regulación.

El artículo 28 de la Constitución General abre la puerta a la protección de los consumidores, al precisar que: “La Ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”.

Esto es, la “garantía de los consumidores” se encuentra a nivel constitucional y sus derechos básicos ameritan una tutela especial del Estado, al nivel de derechos humanos, lo que se acentúa si se considera que el principio *pro persona* implica maximizar siempre los derechos de las personas, ya sea mediante el diseño e instrumentación de regulaciones, como mediante la resolución de situaciones de conflicto.

En resumen, los actos reclamados resultan violatorios de los derechos humanos de los consumidores y los usuarios finales -situación que me acontece-, así como de los agentes económicos participantes a beneficiarse del proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico nacional **porque resultan en el otorgamiento de una ventaja indebida exclusiva a las energías generadas con combustóleo (la mayoría propiedad de la CFE), en detrimento de aquella generada mediante energías limpias**

Atendiendo a lo expuesto en el presente concepto de violación, resulta procedente que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, desincorporando los actos reclamados de miesfera jurídica.

**NOVENO. LOS ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS SON VIOLATORIAS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MATERIA DE PORTEO VERDE**

**I. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELÉCTRICA**

**1 Iniciativa para reformar el régimen constitucional de la energía eléctrica.** El 12 de agosto de 2013, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Senadores una Iniciativa de Decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la CPEUM (en adelante la “Iniciativa Presidencial”), en cuya primera página destacan sus objetivos:

“(…)

(ii) Crecimiento económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos en favor de **mayor inversión y generación de mas empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos**.

(…)

(iv) Seguridad Energética: Se debe aprocechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para **lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético** para ésta y las siguientes generaciones.

(…)

(vi) **Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias**.

(…)”.

[Énfasis añadido]

**2 Exposición de motivos.** Un grupo de legisladores de la LXII Legislatura presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la “Exposición de Motivos”).

La Exposición de Motivos expresó el siguiente objetivo:

“El sector energético de México se encuentra en un momento coyuntural. **Los retos que se presentan en materia de** desarrollo de los hidrocarburos, **abastecimiento de la energía eléctrica y combate al cambio climático son desafíos que rompen con los paradigmas que han dominado hasta ahora el debate nacional**. Estos retos **DEBEN ATENDERSE CON PREMURA Y CON ACCIONES CONTUNDENTES**, realizando cambios estructurales y de diseño institucional, **a través de una reforma integral que recoge los objetivos que deben estar contemplados en toda política energética moderna: seguridad de suministro, competitividad, sustentabilidad** y viabilidad fiscal. En este sentido, la presente iniciativa abarca tres aspectos: el petróleo y los hidrocarburos, el sector eléctrico y un nuevo diseño institucional en materia energética.

(…)

Para lograr lo anterior, el Partido Acción Nacional fiel a sus principios democráticos y con la convicción de ante poner el interés nacional sobre los intereses particulares, propone un paquete de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas fundamentalmente a otorgar al Estado mexicano de los elementos necesarios para aprovechar al máximo todos los recursos con los que el país cuenta, allegarse de nuevas tecnologías, de inversiones productivas, acabar con los monopolios de Estado, **ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones de vida, en un ambiente de libre competencia que detone nuevas fuentes de trabajo y el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes, reduzca el costo de la energía eléctrica y consolide nuestra independencia energética**.

(…)”.

[Énfasis añadido]

Posteriormente, específicamente en relación con el sector eléctrico nacional, a fojas 45 y 46, la Exposición de Motivos señaló:

“Así, como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, deberá regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el **desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y los particulares**. Con la reforma propuesta dicha Comisión será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realice el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta.

**Fomentará una sana competencia entre los distintos operadores**, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegerá los intereses de los usuarios, **propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios**.

En ese sentido, **la reforma permitirá**, como se mencionó líneas arriba **que haya nuevos operadores en materia eléctrica, que participarán en los procesos de generación y comercialización de la energía eléctrica**. Así, en pocos años los mexicanos podremos elegir de manera libre la empresa que nos **brindará las mejores condiciones en precio, suministro y atención a las necesidades propias de cada familia o industria para el consumo de energía eléctrica**.

Con esta reforma, **la Comisión Federal de Electricidad usará de manera más eficiente sus recursos** para potenciar al máximo las actividades eléctricas en las que participe. Esto es, podrá destinar su capital humano y económico, en aquellas actividades en las que ha resultado mucho más eficiente. **Pero al mismo tiempo, el capital privado podrá intervenir en aquellas otras actividades en las que pudiera resultarle a dicha Comisión mucho menos atractivo o más onerosa su participación**.

(…)

Acción Nacional ha planteado con claridad y firmeza su **compromiso con un desarrollo humano sustentable, considerado como aquél conjunto de condiciones sociales, políticas y económicas que permiten el crecimiento de las personas de la generación actual sin comprometer el potencial de las futuras, lo cual implica la preservación y defensa del medio ambiente** y la recuperación de los recursos naturales que la actividad del hombre ha consumido, **para garantizarles a ambas generaciones una vida digna**.

Esta propuesta de reforma energética **está basada en el interés nacional, que fortalezca la seguridad energética y enfatice el uso eficiente de energía, así como la creciente sustitución de la producción de la energía eléctrica basada en fuentes fósiles por fuentes renovables**, estimulando en ello la producción y exploración de gas natural.

En este sentido, **no puede entenderse una reforma energética que no atienda a un compromiso del Estado, la sociedad y los inversionistas en materia ambiental, es necesario garantizar que en todo proceso productivo que genere riqueza para el país haya un compromiso social de protección, salvaguarda y, en su caso, reparación del daño al medio ambiente**.

**Este ha sido un reclamo social que ha cobrado gran relevancia sobre todo en los últimos 20 años**, en donde la participación social ha sido el factor detonante para que los gobiernos de todo el mundo hayan iniciado programas de concientización **respecto al grave deterioro ambiental ocasionado por los procesos industriale**s. Así, durante décadas no se consideró que la industrialización, además de propiciar el bienestar de la población, producía también una degradación de los sistemas naturales. El impacto ambiental producido por los energéticos comprende los efectos de todas y cada una de las fases de un ciclo energético, como son: la exploración, extracción, refinamiento, transporte, almacenamiento, consumo y la producción de éstos.

(…)

Por ello, **LA PRESENTE REFORMA ESTABLECE COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL EL USO SUSTENTABLE DE TODOS NUESTROS RECURSOS NATURALES, HACIENDO ÉNFASIS EN LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAR EL USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, DESARROLLANDO PARA TAL EFECTO LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS INTEGRALES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**. **La ley deberá establecer así las bases para que los operadores, es decir, el Estado, los particulares o ambos, incorporen criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones así como la menor huella de carbono en todos sus procesos**. (…)”.

[Énfasis añadido]

**3 Régimen constitucional en materia eléctrica.** Mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”), se sentaron diversas bases y metas, al tiempo que se impuso como mandato constitucional diversas obligaciones y parámetros rectores para lograrlas, mediante la reforma a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, así como los artículos transitorios que regulan su implementación y vigencia, conforme a lo siguiente:

“**Artículo 25.** **Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable**, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

(…)

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas **la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento**, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, **para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas**, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

(…)

**Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía,** sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, **cuidando su conservación y el medio ambiente**.

(…)

**La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional**, **promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución**.

(…)

**TRANSITORIOS**

(…)

**Décimo Séptimo.** Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para **establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos** relacionados con la materia del presente Decreto **en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos**.

**En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes**.

**Décimo Octavo.** El Ejecutivo Federal, por conducto de **la Secretaría del ramo en materia de Energía** y en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, **deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios**.

(…)”.

[Énfasis añadido]

1. **Objetivos Constitucionales.** Como se observa, el parámetro de regularidad constitucional en materia de energía eléctrica establece claramente los siguientes objetivos constitucionales: **modernización, suficiencia, eficiencia, productividad, economía, competitividad, sustentabilidad y protección al medio ambiente** (en adelante los “Objetivos Constitucionales”).

**Cambio climático y urgente descarbonización profunda del sector eléctrico**

**Cambio climático.** Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, el **cambio climático es “*el mayor desafío de nuestro tiempo******y nos encontramos en un momento decisivo****. Desde pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas,* ***los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes****.* ***Si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro****.*”[[143]](#footnote-142)

**5. Régimen jurídico constitucional y convencional para el combate del cambio climático.** Consciente del apremiante reto que el cambio climático supone, el Estado Mexicano ha adoptado distintos instrumentos internacionales y nacionales que lo obligan a adoptar medidas postivas urgentes para combatirlo, de los cuales destacan los siguientes:

Los artículos 17º y 18º transitorios del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, no deja lugar a dudas sobre el mandato del Poder Reformador de la CPEUM:

“**TRANSITORIOS**

(…)

**Décimo Séptimo.** Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para **establecer las bases en las que EL ESTADO PROCURARÁ LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, EN TODOS LOS PROCESOS** relacionados con la materia del presente Decreto **en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y MEJORES PRÁCTICAS EN LOS TEMAS DE EFICIENCIA EN EL USO DE ENERGÍA, DISMINUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO, EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS NATURALES, BAJA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES, ASÍ COMO LA MENOR HUELLA DE CARBONO EN TODOS SUS PROCESOS**.

**En materia de ELECTRICIDAD, LA LEY ESTABLECERÁ A LOS PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA OBLIGACIONES DE ENERGÍAS LIMPIAS Y REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES**.

**Décimo Octavo.** El Ejecutivo Federal, por conducto de **la Secretaría del ramo en materia de Energía** y en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, **deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS**.

(…)”.

[Énfasis añadido]

**6. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.** Como parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, diversos paises, entre ellos México, se reunieron del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, *“Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial”*. A

Al respecto, fueron acordados 27 (veintisiete) principios fundamentales relacionados con el desarrollo y medio ambiente, destacando los siguiente:

“PRINCIPIO 8

**Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles** y fomentar políticas demográficas apropiadas.

(…)”

**La Declaración de Río de Janeiro consagra el principio de participación ciudadana en materia ambiental** al establecer que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es, precisamente, con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda; en este contexto, se reconoce el derecho de los ciudadanos de acceder a la información que sobre el medio ambiente tengan las autoridades y la correlativa obligación del Estado, de no sólo de otorgarla, sino también de fomentar y sensibilizar la participación ciudadana.[[144]](#footnote-143)

Recientemente las Naciones Unidas desarrollaron estos principios en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú; el artículo 4.6 se refiere a la obligación de los Estados de garantizar un entorno propicio para las personas que promueven la protección al medio ambiente, proporcionándoles no sólo información, sino también reconocimiento y protección.

El entorno propicio para la participación ciudadana en la protección del medio ambiente también se garantiza a través de formas de legitimación activa amplia; en efecto, este principio también exige reconocer que, aun cuando el interés afectado no toque directamente al recurrente, l**os Estados habrán de garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional a través de diversas fórmulas de legitimación activa amplia.**

En esta línea, el Acuerdo Regional de referencia, en su artículo 8.3 reitera la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia en materia ambiental a través de “una legitimación activa amplia”.[[145]](#footnote-144)

“PRINCIPIO 11

**Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente**. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

(…)

PRINCIPIO 15

Con el fin de proteger el medio ambiente, **los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades**. **Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”**

(…)

PRINCIPIO 17

Deberá **emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente**.”

[Énfasis añadido]

**7. Protocolo de Kyoto sobre cambio climático.** Adoptado desde el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón, y entrando en vigor en 2005, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las partes, entre ellas México, convinieron, entre otras, y específicamente relacionado con la Actividad de la Quejosa lo siguiente:

“**Artículo 2**

1. **Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes** incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitaciónn y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:

1. Aplicar· y/o seguir· elaborando polÌticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:

i) **fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional**;

(…)

iv) investigación, **promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía**, de tecnologÌas de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;

v) **reducción progresiva o eliminación gradual** de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean **contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado**;

(…)”

[Énfasis añadido]

**8. Acuerdo de París.** Adoptado el 12 de diciembre de 2015, y ratificado por México el 14 de septiembre de 2016, el Acuerdo de París establece lo siguiente:

“Artículo 2

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, **tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático**, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:

a) **Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC** con respecto a los niveles preindustriales, **y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC** con respecto a los niveles preindustriales, **reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático**;

b) **Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático** y promover la resiliencia al clima **Y UN DESARROLLO CON BAJAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y

c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a **un desarrollo** resiliente al clima y **con bajas emisiones de gases de efecto invernadero**.

(…)

**Artículo 6.**

(…)

4. Por el presente se establece un mecanismo para **contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible**, que funcionará bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo y podrá ser utilizado por las Partes a título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano que designará la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, y tendrá por objeto:

a) **Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible**;

b) **Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las entidades públicas y privadas** que cuenten con la autorización de las Partes;

(…)”

[Énfasis añadido]

**9. Descarbonización del sector eléctrico.** Uno de los pilares del combate al Cambio climático es la descarbonización del sector eléctrico. Conforme a un estudio del Insituto Nacional de Ecología y Cambio Climático:

“**LA DESCARBONIZACIÓN PROFUNDA DEL SECTOR DE GENERACIÓN ELÉCTRICA ES ESENCIAL, NO SÓLO POR SU RELEVANCIA ACTUAL COMO UNA FUENTE IMPORTANTE DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, SINO TAMBIÉN POR EL PAPEL CENTRAL QUE DESEMPEÑARÁ EN UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO**. Hacer cumplir el primer pilar en otros sectores para aumentar la eficiencia energética es muy importante ya que implica una reducción sustancial de la demanda de electricidad. **Los beneficios (ahorros energéticos y económicos) de estas intervenciones deben estar disponibles antes de planear y construir la infraestructura de generación eléctrica futura**. De no hacerlo así, la electrificación del transporte, los edificios y la industria será una tarea mucho más difícil y costosa de lograr. Aunque las posibles rutas tecnológicas que podrían seguirse para acelerar el aumento en eficiencia energética se discuten en las secciones correspondientes a cada sector, el sector de generación eléctrica será responsable de garantizar que la red y la gobernanza de la transmisión y distribución de electricidad sean adecuadas para desarrollar el mercado dinámico y eficiente que se necesita, la optimización de la energía utilizada y almacenada (negawatts) y la adopción de las mejores prácticas a nivel internacional.

El segundo pilar, la electrificación en otros sectores, incrementará la demanda de generación futura. Esto requerirá planes ambiciosos para diseñar, financiar y construir redes, plantas y otros activos. El sector de generación eléctrica en México se transformará en los próximos 25 años. **El tercer pilar, el desacoplamiento de las emisiones de CO2 procedentes de la generación de electricidad se proyecta a través de dos intervenciones**:

∙ La **INSTALACIÓN MASIVA DE CAPACIDAD DE GENERACIÓN A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES** y

∙ El acondicionamiento de centrales de ciclo combinado de gas natural con tecnologías de CCS.”

[Énfasis añadido]

En el mismo sentido, la propia exposición de motivos de la Iniciativa para reformar el régimen constitucional de la energía eléctrica, presentada por el titular del Ejecutivo Federal ante el Senado de la República el 12 de agosto de 2013, estableció los objetivos de dicha reforma:[[146]](#footnote-145)

“(…)

(ii) Crecimiento económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos en favor de **mayor inversión y generación de mas empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos**.

(…)

(iv) Seguridad Energética: Se debe aprocechar la disponibilidad de energía promaria en el territorio nacional para **lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético** para ésta y las siguientes generaciones.

(…)

(vi) **Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente: Es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias**.

(…)”.

[Énfasis añadido]

**II. PROTECCIÓN DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (LIE) AL RÉGIMEN LEGADO DE LA DEROGADA LEY DEL SERVICIOS PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (LSPEE).**

La LIE intencionalmente desarrolla un amplio régimen transitorio para garantizar la salvaguarda y subsistencia de los derechos adquiridos por los titulares de Contratos de Interconexión Legados, previo a su entrada en vigor. De dicho régimen, destacan los siguientes artículos:

**“Décimo. Los permisos otorgados conforme a la Ley que se abroga se respetarán en sus términos**. Los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente, importación, exportación y usos propios continuos **conservarán su vigencia original, y los titulares de los mismos realizarán sus actividades en los términos establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y las demás disposiciones emanadas de la misma** y, en lo que no se oponga a lo anterior, por lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios.

(…)

**Décimo Segundo.** Los Contratos de Interconexión Legados no serán prorrogados una vez terminada su vigencia. **Los instrumentos vinculados a los Contratos de Interconexión Legados podrán actualizarse bajo las condiciones previstas en los propios Contratos de Interconexión Legados, siempre y cuando su vigencia no exceda el término del contrato principal.**

Cuando los Contratos de Interconexión Legados o sus instrumentos vinculados prevean la modificación de sus términos, dichas modificaciones se formalizarán sin afectar las fechas de vigencia de los Contratos de Interconexión Legados. Bajo los términos que se encuentren estipulados en los mismos Contratos de Interconexión Legados, las modificaciones podrán consistir en:

I. Alta, baja y modificación de Centros de Carga, denominados puntos de carga en dichos contratos;

II. Venta de excedentes, y

III. Servicio de respaldo.

**Los instrumentos vinculados a los Contratos de Interconexión Legados se respetarán en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica hasta la conclusión de la vigencia de los contratos respectivos, incluyendo los siguientes:**

I. Reconocimiento de potencia autoabastecida;

**II. PORTEO ESTAMPILLA;**

III. Banco de energía, y

IV. Las demás condiciones otorgadas a proyectos de generación con energía renovable y cogeneración eficiente.

(…)

El servicio de respaldo contemplado en los Contratos de Interconexión Legados será administrado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) sujeto a los cargos que establezca la Comisión Reguladora de Energía. La Secretaría de Energía determinará los demás derechos y obligaciones de los Contratos de Interconexión Legados que se asumirán por la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). **LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ACTUALIZARÁ LAS METODOLOGÍAS DE CÁLCULO CORRESPONDIENTES A FIN DE RESPETAR LOS TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN LEGADOS.**

(…)**”**

[Énfasis añadido]

De esta forma, el régimen transitorio de la LIE confirma la subsistencia de los Contratos de Interconexión Legados celebrados conforme a la LSPEE, así como todos y cada uno de los derechos que estos otorgaban en su integridad haciendo incluso referencia expresa al porteo estampilla o Porteo Verde.

**XI.** **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:**

Con fundamento en los artículos 125, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, en los términos, para los efectos y por las razones que se desarrollan a continuación.

**A. Efectos.**

Se solicita la suspensión de los efectos y consecuencias de todos y cada uno de los actos reclamados, particular y destacadamente para los efectos que se desarrollan a continuación, sin perjuicio de que este H. Juez estime conveniente *maximizar* los efectos de la suspensión a efecto de tutelar los intereses y derechos materia del presente juicio de amparo[[147]](#footnote-146):

**B. Existencia de los actos.**

La existencia de los actos reclamados se acredita con las documentales con valor probatorio pleno que se exhiben anexo a la presente demanda, respecto de las cuales se manifiesta bajo protesta de decir verdad que coinciden de forma íntegra con las impresas que son copias certificadas u originales. Por lo anterior, se solicita que se les dé pleno valor probatorio, en términos del artículo 3º fracción VI del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el 12 de junio en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, los diversos actos reclamados constituyen hechos notorios al encontrarse publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo mismo, tienen valor probatorio pleno.

Sin perjuicio de lo anterior, se destaca que para el estudio de la suspensión provisional basta la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre la existencia de los actos, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[[148]](#footnote-147), por lo que deben tenerse por existentes para efectos de la suspensión provisional.

**C. Clasificación de los actos objeto de la suspensión.**

Los actos respecto de los cuales se solicita la suspensión, constituyen actos de naturaleza positiva que, aún cuando ya fueron dictados, no han producido todas sus consecuencias y efectos, por lo que es en contra de la consecuencias y efectos futuros y no consumados de forma irreparable que se solicita la suspensión en el presente.

Por lo que respecto a los actos omisivos atribuidos a las responsables, es importante destacar que no por tratarse de omisiones debe estimarse improcedente la suspensión, sino que ello requiere que el Juzgador identifique el contenido que debe adoptar tutelar mis intereses como quejosa frente a esa omisión, y para tal efecto contará con las más amplias facultades para fijar los términos en que debe prevalecer la situación en lo que se resuelve el juicio de amparo[[149]](#footnote-148).

**D. Interés suspensional. Daño inminente e irreparable.**

El interés necesario para solicitar la suspensión así como el daño inminente e irreparable a mi esfera de derechos se acredita en términos de lo ya desarrollado en el apartado de interés legítimo del capítulo de procedencia, así como con las pruebas que se respalda ese apartado. Lo cual se solicita se tenga en cuenta *mutatis mutandi* para el presente apartado, ya que lo ahí desarrollado acredita que cuento con el interés suspensional suficiente para solicitar y obtener la suspensión solicitada en el presente capítulo.

Es importante destacar que para efectos de la suspensión provisional, basta con acreditar el interés legítimo y el daño inminente e irreparable de forma indiciaria[[150]](#footnote-149), lo cual se cumple sobradamente en la presente demanda de acuerdo con lo desarrollado en los capítulos referidos.

De forma destacada, el interés suficiente, así como el daño inminente e irreparable que sustenta la suspensión provisional se acredita:

* INTERÉS.

El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también llamado "Protocolo de San Salvador", en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano) y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

Del contenido de este derecho humano se desprende la obligación de todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humano y el bienestar de las personas.[[151]](#footnote-150)

En estrecha vinculación con lo anterior, resulta necesario precisar que el núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión posee una dimensión individual, pues su vulneración puede tener afectaciones directas e indirectas sobre las personas en conexidad con otros derechos como a la salud, a la integridad personal o a la vida, entre otros, pero también cuenta con una dimensión colectiva, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras. Es decir, el derecho fundamental a un medio ambiente sano debe ser analizado desde una doble óptica, es decir, como un derecho que a su vez implica un deber, en virtud de que, por una parte, se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, derecho que las autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar y garantizar; y, por otra, el reconocimiento de este derecho fundamental se vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

En el caso que nos ocupa los actos y omisiones reclamados en términos concretos versan sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad de los mismos, que tuvieron como efecto el retroceso en la política de transición energética de energías fósiles a energías renovables, lo que contraviene principalmente el derecho a un medio ambiente sano, la jerarquía normativa y el principio de legalidad por cuanto a la normatividad secundaria en estas materias.

Es decir, los actos reclamados transgreden de manera real y directa mis intereses difusos (2) de manera colectiva, al transgredir los derechos humanos que poseen todos los mexicanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, y a la salud, y (2) de manera individual, en mi calidad de usuario final, como participante del Mercado Eléctrico Nacional.

En este sentido, la parte quejosa cuenta con el interés necesario para acudir al juicio de amparo, ya que se puede exponer un agravio diferenciado, el cual resulta de la posición jurídica identificable que surge de su especial posición frente al orden jurídico, en los siguientes términos:

**I)** La Constitución Federal y los Tratados Internacionales en la materia atribuyen un rol activo a los ciudadanos interesados en la defensa y protección del derecho fundamental a un medio ambiente sano.

**II)** El núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión es de naturaleza compleja, por lo que su contenido obligacional alcanza no solo a los entes públicos, sino a cualquier ciudadano beneficiario de los servicios ambientales.

**III)** El efecto horizontal del derecho fundamental en cuestión y el principio de participación ciudadana en las cuestiones medioambientales son suficientes para reconocer la legitimación en la causa de esta parte quejosa.

**IV)** En mi calidad de usuario final, como participante del Mercado Eléctrico, cuento con interés legítimo para reclamar la inconstitucionalidad de los Actos Reclamados.

Finalmente, resulta evidente que la anulación de los actos que se reclaman en el juicio constitucional que nos ocupa constituiría un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica de la quejosa, en razón de que el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la regulación energética impugnada permitiría la urgente continuación de la descarbonización del sector energético en nuestro país, protegiendo de esta manera el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de miles de mexicanos.

* DAÑO INMINENTE E IRREPARABLE.

Tal como se ha expuesto en la presente, el proceso de descarbonización se ha realizado como una medida urgente para la protección al medio ambiente, pues de lo contrario se generan daños irreparables al medio ambiente. Por lo anterior, el Estado Mexicano ha adquirido compromisos internacionales con la finalidad de generar una transición respecto de la generación de energía, pasando de las que tienen como origen combustibles fósiles a las limpias y renovables.

No obstante lo anterior, las autoridades responsables, al emitir la normatividad combatida a través del juicio de amparo que nos ocupa, incentivan la producción de energía eléctrica a través de combustibles fósiles e inhiben la interconexión al Sistema Eléctrico Nacional de energías limpias y renovables.

Lo anterior implica un retroceso alarmante en la descarbonización de la industria energética, violando no solo el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en el Acuerdo de Paris.

Bajo este orden de ideas y en estrecha relación con los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, sustentabilidad y congruencia, mismos que disciplinan las conductas en orden de uso racional y de conservación del medio ambiente tanto para los entes estatales como para los particulares, resulta evidente que la regulación energética emitida por las diversas autoridades responsables genera un daño al medio ambiente de forma inminente e irreparable, tal como se ha expuesto en los conceptos de violación de la presente demanda.

De conformidad con lo anterior, resulta procedente el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.

* INTERÉS SOCIAL QUE JUSTIFIQUE LA MEDIDA.

Con independencia de que el presente requisito se desarrollará a detalle en el siguiente apartado, se hace ver que brevemente que este se acredita con lo expuesto en la presente demanda, ya que se ha demostrado que el derecho al medio ambiente tiene una doble dimensión, tanto en el ámbito individual, por la conexidad con diversos derechos, como el social, porque se protegen las generaciones presentes y futuras. [[152]](#footnote-151)

Por lo anterior, la sociedad se encuentra interesada en la protección al medio ambiente, ya que es un derecho que debe ser ampliamente protegido.

De conformidad con lo anterior, se ha probado que los actos reclamados violan no solo el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en el Acuerdo de Paris, relacionados con la transición de energías basadas en combustibles fósiles a las energías limpias.

En este sentido, resulta evidente que se está comprometiendo un interés social, como es el medio ambiente. Por lo anterior, la sociedad se encuentra interesada en que no tengan efectos los actos reclamados, de ahí que lo procedente sea conceder la medida cautelar solicitada.

**E. Orden público e interés social.**

La suspensión solicitada, lejos de afectar el interés social y disposiciones de orden público, los protege, ya que con la suspensión solicitada se lograría:

● Como se ha expuesto en el presente, la finalidad de la transición energética a combustibles más limpios, se dio con la finalidad de reducir los efectos adversos en materia ambiental y de salud que se generan por los combustibles fósiles.

● Como consecuencia de lo anterior, el interés de la sociedad se encuentra en que se proteja el medio ambiente y la salud.

● La sociedad está interesada en que no se generen daños irreparables al medio ambiente, a través de la emisión de los gases efecto invernadero.

● La sociedad tiene interés en que se realicen todos los actos que tengan como finalidad reducir el cambio climático, con la finalidad de proteger el medio ambiente.

● La sociedad está interesada en que exista un cambio hacia la utilización de energía sustentable y evitar la emisión de gases efecto invernadero. Esto tal como se estableció en el protocolo de Kioto y en el Acuerdo de París, vinculantes para México.

● La sociedad está interesada en que los derechos humanos sean respetados y éstos se desarrollen de forma progresiva.

● La sociedad está interesada en que exista competencia dentro del mercado relacionado con la energía eléctrica, con la finalidad de que la prestación de dicho servicio sea sustentable y a un menor precio.

● La sociedad está interesada en que se cumplan los ordenamientos emitidos en cumplimiento a las obligaciones internacionales de México, sobre todo las que respetan derechos humanos.

● La sociedad está interesada en que el desarrollo del país se realice de forma sustentable.

● La sociedad está interesada en que exista inversión en el país, con la finalidad de mejorar las condiciones económicas y laborales que existen.

**F. Apariencia del buen derecho.**

Asiste la apariencia del buen derecho en favor de la Quejosa, ya que basta un estudio preliminar del fondo del asunto para desprende la inconstitucionalidad de los actos cuya suspensión se solicita, para lo cual se solicita se tome en cuenta todo lo desarrollado a lo largo de los conceptos de violación de la presente demanda. A manera de resumen a continuación se recapitulan su contenido y alcance, todo lo cual acredita la apariencia del buen derecho en el presente asunto:

En el primer concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos y las omisiones reclamadas violan el derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4° constitucional, en relación con el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", así como en los principios de la Declaración de Río.

En el segundo concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos reclamados causan una grave violación al derecho al medio ambiente sano y a la salud en el artículo 4º constitucional y son contrarios a la progresividad del derecho humano al medio ambiente sano que México ha alcanzado en beneficio de sus ciudadanos, en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección al derecho al medio ambiente; lo anterior al paralizar el potencial de reducción de emisiones del sector eléctrico por la limitación que implican los acuerdos sobre las energías renovables, con lo cual México incumplirá la contribución nacionalmente determinada (CND) de México, además de aumentar con ello el potencial de generación de gases efecto invernadero (GEI) que implica la eminente generación vía combustóleo y sus emisiones contaminantes y tóxicas que menoscaban la calidad del aire y los efectos graves a la salud.

En el tercer concepto de violación se desarrolló y acreditó que se viola en perjuicio de la parte quejosa y la colectividad el derecho humano a la audiencia previa, consagrada en el artículo 14 Constitucional y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el derecho a la certidumbre y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable, CONAMER, de forma discrecional e inconstitucional decide exentar de la consulta pública dentro del proceso de análisis del impacto regulatorio establecido en los artículos 69 y 73 de la Ley General de Mejora Regulatoria al acto reclamado, al considerar que el acuerdo de 15 de mayo de 2020 establece elementos y directrices sin que implementen costos de cumplimiento, a pesar de que el mismo acuerdo tendrá entre sus consecuencias el aumento de la tarifa por consumo eléctrico a todos los usuarios así como afectaciones al derecho humano al medio ambiente sano. Lo anterior deja en un estado de indefensión a todos los consumidores del servicio de energía eléctrica al imponer medidas para la industria que se traducirán en nuevos costos para el consumidor y a la población en general al provocar diversas repercusiones al medio ambiente sin haber sido oídos y vencidos previamente, ya que no fueron sujetos al proceso de consulta pública

En el cuarto concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos reclamados violan la ley de la industria eléctrica, en violación al derecho humano de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

En el quinto concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos y omisiones reclamadas violan los compromisos y principios en materia de transición energética, en violación al derecho humano de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

En el sexto concepto de violación se acredita que los actos y omisiones son contrarios a la transición energética y violan el derecho humano de la parte quejosa al acceso a la energía eléctrica en su vertiente de pobreza energética.

En el séptimo concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos reclamados vulneran el principio de progresividad y la no regresión de los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud.

En el octavo concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos y omisiones reclamadas vulneran los principios de competencia y libre concurrencia en perjuicio de los derechos de la parte Quejosa.

En el noveno concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos y omisiones reclamadas violan los principios de mejora regulatoria que deben satisfacer todas las normas de carácter general.

En el décimo concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos reclamados fueron emitidos *ad hoc* por la autoridad responsable con la intención de generar barreras a la entrada a los generadores de energías renovables como competidores en el sector y con ello impulsar indebidamente la competitividad de las empresas productivas del estado, lo que se traduce en un desvío de poder.

En el décimo primero concepto de violación se desarrolló y acreditó que los actos y omisiones reclamadas son violatorias del la transición energética en materia de porteo verde.

En el décimo segundo concepto de violación se desarrolló y acreditó la inconstitucionalidad de los actos atribuidos al presidente de la república.

**G. No garantía.**

Con la suspensión solicitada no se genera ningún daño o perjuicio concreto a tercero alguno en los términos a que se refiere el artículo 132 de la Ley de Amparo, por lo tanto, no se debe condicionar la efectividad de la suspensión solicitada al otorgamiento de garantía.

La afectación derivada de la suspensión solicitada la resiente, en todo caso, las autoridades responsables, sin embargo en esos caso no se debe fijar garantía, ya que la Ley de Amparo lo establece solo para los casos en que la afectación sea para terceros[[153]](#footnote-152).

Sin perjuicio de lo anterior, en la especie se actualiza lo dispuesto en el siguiente precedente jurisprudencial, toda vez que los actos cuya suspensión se solicita violan derechos relacionado con el medio ambiente sano:

“**MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO.** El acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción con la directriz 20 de las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Directrices de Bali-, implica que deban tomarse todas las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano. En ese sentido, la suspensión de los actos que lesionen ese derecho no debe encontrarse, generalmente, a expensas de la exhibición de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular -constituyéndose en un obstáculo financiero para su justiciabilidad-, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otorgamiento de la garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio de carácter social, como en el caso de obra de infraestructura pública, o cuando responda a un esquema de aprovechamiento sustentable; cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad responsable al rendir su informe previo.”[[154]](#footnote-153)

Por lo que respecta a las Tarifas de Porteo, se hace ver que tampoco se requiere del requisito de que se garanticen los probables daños que se ocasionen a un tercero. Lo anterior de conformidad con lo ya expuesto, además de que se cumplen los elementos necesarios para que se exima la exhibición de dicha garantía. Esto de conformidad con los siguientes puntos:

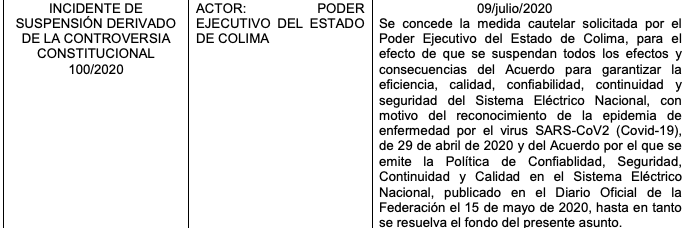
* El derecho que se ve preponderantemente violado a través de los actos reclamados, tales como las Tarifas de Porteo, es el derecho al medio ambiente, tal como se ha expuesto en los conceptos de violación de la presente.
* Tal como se advertirá de los conceptos de violación, estos se encaminan a impugnar los actos reclamados por transgresión al derecho al medio ambiente.
* La afectación que generan las Tarifas de Porteo es actual e inminente, ya que con su incremento se inhibe la inversión en energías limpias, así como el ingreso al mercado relacionado con la energía eléctrica.
* La vulneración al medio ambiente está directamente relacionada con las Tarifas de Porteo, ya que con su incremento se genera un incentivo para la utilización de energías fósiles que dañan al medio ambiente, tal como se ha reconocido por México a través de diversos compromisos internacionales.
* El acto reclamado no genera un beneficio a la sociedad, pues como se ha expuesto en el presente, existe un interés porque **(i)** se proteja al medio ambiente; **(ii)** se respeten los derechos humanos de forma progresiva; **(iii)** se cumplan los acuerdos internacionales firmados por México; **(iv)** se dé una transición a energías limpias; **(v)** que exista una mayor competencia en el mercado relacionado con la energía eléctrica; y **(vi)** que no se inhiba la inversión en energías limpias.

**H. Precedentes relevantes.**

A continuación se hace referencia a precedentes relevantes del Poder Judicial de la Federación relacionado con la suspensión de los actos reclamados en la presente demanda, lo cuales constituyen un hecho notorio para este H. Juzgado al poder consultarse a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes[[155]](#footnote-154), no obstante para facilidad de este órgano se proporciona acceso a las sentencias en el siguiente hyperlink[[156]](#footnote-155).

1. Suspensiones en contra del Acuerdo CENACE:

* Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Queja 47/2020, sentencia de 21 de junio de 2020.
* Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Queja 46/2020, sentencia de 21 de junio de 2020.
* Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional 100/2020, proveído de 9 de julio de 2020 dictada en el incidente de suspensión, cuyo extracto relevante dispone:



2. Suspensiones en contra de las Políticas SENER:

* Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional 89/2020, proveído de 25 de junio de 2020 dictada en el incidente de suspensión, cuyo extracto relevante dispone:

A screenshot of a cell phone

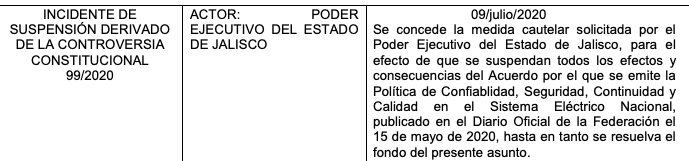
Description automatically generated

* Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional 95/2020, proveído de 3 de julio de 2020 dictada en el incidente de suspensión, cuyo extracto relevante dispone:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

* Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controversia Constitucional 99/2020, proveído de 9 de julio de 2020 dictada en el incidente de suspensión, cuyo extracto relevante dispone:



* Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Queja 100/2020, sentencia de 9 de julio de 2020.

3. Suspensiones en contra de las Tarifas de Porteo de CFE:

* Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Queja 78/2020, sentencia de 6 de julio de 2020.

**XII. SUPLENCIA DE LA QUEJA**

Finalmente, en atención a la naturaleza de los derechos fundamentales cuya violación se invoca, además de tratarse de una situación que genera un peligro para la población mexicana, se solicita a su Señoría que supla la deficiencia de la queja en el presente asunto en caso que advierta que de los actos reclamados se desprenda una violación de derechos humanos.

Lo anterior, es aplicable conforme a los principios sobre derechos humanos señalados en el cuerpo de la presente demanda de amparo y de acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Tomo 3, correspondiente a marzo de 2013, página 1830, que a la letra indica:

“**SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.** De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme) favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, acorde con los principios de interdependencia, indivisibilidad, universalidad y progresividad, de los cuales se advierte que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna. En atención a lo expuesto y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y conforme al objeto del citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia. Por su parte, los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están autorizados para realizar un control de convencionalidad "ex officio", esto es, con independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto. En observancia de todo lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa violación, con independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esta manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales, sin soslayar, desde luego, los presupuestos necesarios para suplir la deficiencia de argumentos, tales como que el juzgador tenga competencia, que el juicio sea procedente y que se respete la litis planteada. Esta suplencia complementa la prevista en la Ley de Amparo, ya que revela mayores alcances en cuanto al sujeto, al proceder en favor de cualquier persona y no sólo en beneficio de determinados individuos, circunstancia que, sin embargo, no torna inoperante el beneficio regulado en dicha ley, pues éste reviste una protección más amplia en cuanto al objeto, debido a que no se limita a violaciones de derechos humanos en materia de constitucionalidad y convencionalidad, sino también de legalidad. Lo anterior deja entrever que si bien ambas clases de suplencia pueden concurrir en ciertos casos, en otros puede resultar procedente una u otra, de manera que la contemplada en la Ley de Amparo sigue teniendo plena eficacia en los supuestos que prevé.”[[157]](#footnote-156)

El anterior criterio establece medularmente que tratándose de violaciones a derechos humanos consagrados por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en cumplimiento de su deber de llevar a cabo un control difuso de los derechos humanos, es procedente la suplencia de la queja por parte de su Señoría en caso de detectar una violación flagrante a cualquier derecho humano como acontece en el caso en particular.

**XIII.** **PRUEBAS**

Expuestas las consideraciones de hecho y de derecho antes referidas, a efecto de acreditar los extremos de lo manifestado por los quejosos, en términos de lo establecido por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se exhiben y ofrecen las siguientes pruebas:

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA,** [RECIBO DE LUZ]

(Énfasis añadido)

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en el **Programa Sectorial de Energía 2020-2024**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de julio de 2020 por el **Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos**, el cual puede ser localizado en el siguiente vínculo de internet: <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596373&fecha=08/07/2020>.

En todo caso, se solicita a su Señoría con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de amparo, para que requiera a la Autoridad Responsable exhiba copia certificada del mismo, así como de las constancias necesarias para su emisión, al momento de rendir su informe justificado.

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en el Acuerdo de fecha 15 de mayo del 2020, emitido por el la Secretaría de Energía en el que se establece la **Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional**,el cual puede ser localizado en el siguiente vínculo de internet: <https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593425&fecha=15/05/2020>. En todo caso, se solicita a su Señoría con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de amparo, para que requiera a la Autoridad Responsable exhiba copia certificada del mismo, así como de las constancias necesarias para su emisión, al momento de rendir su informe justificado.
2. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en el Aviso por el que se da a conocer la política de confiabilidad, establecida por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017, el cual puede ser localizado en el siguiente vínculo de internet: <https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473221&fecha=28/02/2017>.

En todo caso, se solicita a su Señoría con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de amparo, para que requiera a la Autoridad Responsable exhiba copia certificada del mismo, así como de las constancias necesarias para su emisión, al momento de rendir su informe justificado.

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en el **Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033 de fecha 14 de junio de 2019**, emitido por la Secretaría de Energía, el cual puede ser localizado en el siguiente vínculo de internet: [https://www.gob.mx/SENER/documentos/prodesen-2019-2033](https://www.gob.mx/sener/documentos/prodesen-2019-2033).

En todo caso, se solicita a su Señoría con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de amparo, para que requiera a la Autoridad Responsable exhiba copia certificada del mismo, así como de las constancias necesarias para su emisión, al momento de rendir su informe justificado.

1. **LA DOCUMENTAL PÚBLICA** consistente en el **Oficio número SPTE.200.185.2020** de fecha 25 de mayo de 2020 en el que la **Secretaria de Energía** se pronunció a favor de continuar con la expedición de los cargos por la prestación del Servicio de Transmisión para fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente, por nivel de tensión a precios de 2018, el cual puede ser localizado en el vínculo de internet <https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/AcuerdosCasa.aspx>.

En todo caso, se solicita a su Señoría con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de amparo, para que requiera a la Autoridad Responsable exhiba copia certificada del mismo, así como de las constancias necesarias para su emisión, al momento de rendir s

1. **LA PRESUNCIONAL**,en su doble aspecto legal y humana en lo que beneficie a esta parte quejosa.
2. **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,** en todo lo que beneficie a los intereses de la parte quejosa.

Es importante destacar a su Señoría que las documentales publicas referidas en los numerales **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15** anteriores también tienen el carácter de hecho notorio ya que se encuentran en las páginas de Internet oficiales de las Autoridades Reclamadas, por lo que son hechos acreditados ante su Señoría en atención al siguiente criterio judicial:

**“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR**. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.”[[158]](#footnote-157)

Finalmente, me reservo el derecho en términos de los artículos 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo de ofrecer más pruebas a efecto de que sean consideradas en la audiencia constitucional correspondiente.

**XIV. SOLICITUD DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO**

Con fundamento en el artículo 3°, párrafos sexto, séptimo y octavo, de la Ley de Amparo y con el Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, solicito se autorice a las cuentas de usuario [\*\*\*CUENTAS ELECTRÓNICAS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PJF\*\*\*], el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en relación con el presente recurso de revisión, a fin de que puedan, consultar el expediente electrónico, recibir notificaciones y en su caso realizar las promociones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado**, JUZGADO DE DISTRITO [MATERIA Y ADSCRIPCIÓN DEL JUZGADO\*\*\*], EN TURNO**, atentamente solicito se sirva:

**PRIMERO**. Tenerme por presentado en tiempo y forma, en mi carácter de quejoso, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las omisiones reclamadas de las autoridades señaladas como responsables y admitir la demanda de amparo indirecto con sus respectivos anexos y correr traslado de la misma a las partes para todos los efectos legales a que haya lugar.

**SEGUNDO**. Abrir a trámite el cuaderno incidental y ordenar la suspensión provisional y luego definitiva en los términos expuestos. Asimismo, se solicita atentamente la expedición a mi costa de copia certificada del acuerdo en el que se provea sobre la medida cautelar solicitada.

**TERCERO.** Autorizar a las personas indicadas para los efectos señalados, así como habilitar para acceso al expediente las cuentas electrónicas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que antes se mencionaron.

**CUARTO.** Correr traslado a las autoridades responsables y al Ministerio Público con las copias que se adjuntan y requerir a aquéllas para que rindan sus informes previos y justificados dentro de los plazos a que se refiere la Ley de Amparo, con los apercibimientos de ley y en su oportunidad, ordenar se expida copia simple de los mismos a la esta parte quejosa.

**QUINTO.** Acordar se expida a mi costa de copia certificada del auto por el que se admita la presente demanda de garantías, o bien ordenar la notificación personal del mismo.

**SEXTO.** En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, tener por exhibidas, ofrecidas y relacionadas las pruebas documentales y presuncional legal y humana que se señalan en el capítulo respectivo. Ello sin perjuicio de ofrecer diversas probanzas en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo.

**ÚLTIMO.** Previos los trámites de rigor, concederme el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y omisiones reclamados en el presente.

**ATENTAMENTE,**

**[\*\*\* NOMBRE DEL QUEJOSO/A \*\*\*]**

[\*\*\* LUGAR \*\*\*], a [\*\*\* FECHA \*\*\*]

1. [TA]; 10ª Época; 2ª Sala; Libro XXIV, septiembre de 2013; Tomo 3; Pág. 1854; Registro No. 2004501 [↑](#footnote-ref-0)
2. Época: Décima Época, Registro: 2012364, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.), Página: 690 [↑](#footnote-ref-1)
3. Época: Décima Época, Registro: 2007921, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 50/2014 (10a.), Página: 60 [↑](#footnote-ref-2)
4. Época: Décima Época, Registro: 2015825, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXLVIII/2017 (10a.), Página: 411 [↑](#footnote-ref-3)
5. Época: Décima Época, Registro: 2018635, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXCII/2018 (10a.), Página: 308 [↑](#footnote-ref-4)
6. Época: Décima Época, Registro: 2015824, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXLIX/2017 (10a.), Página: 410

   Época: Décima Época, Registro: 2012846, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.7o.A.1 CS (10a.), Página: 2866 [↑](#footnote-ref-5)
7. Época: Décima Época, Registro: 2012127, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.7o.A. J/7 (10a.), Página: 1802 [↑](#footnote-ref-6)
8. El interés colectivo en su sentido amplio (*lato sensu*) agrupa tanto al interés colectivo (*stricto sensu*) como al interés difuso. [↑](#footnote-ref-7)
9. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXXIV, Tomo IV, correspondiente a septiembre de 2016, página 2417. [↑](#footnote-ref-8)
10. Gidi, Antonio y Ferrer Mac Gregor, Eduardo, **“La Tutela de los Derechos Difusos, Colectivos e Individuales Homogéneos”**, Editorial Porrúa, Segunda Edición, 2004, pág. 594. [↑](#footnote-ref-9)
11. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 335. **1a. CCXC/2018 (10a.).** [↑](#footnote-ref-10)
12. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 335. **1a. CCXCI/2018 (10a.).** [↑](#footnote-ref-11)
13. 10ª Época; T.C.C; Libro 35, octubre de 2016; Tomo IV, pág. 2942; Registro no. 2012855 [↑](#footnote-ref-12)
14. 10ª Época; 1ª Sala; Libro 61, diciembre de 2018; Tomo I; pág 335; Registro no. 2018694 [↑](#footnote-ref-13)
15. 10ª Época; 1ª Sala; Libro 61, diciembre de 2018; Tomo I; Pág 335; Registro no. 2018693 [↑](#footnote-ref-14)
16. 10ª Época; TCC; TA; Gaceta del S.J.F. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II; Pág. 1840. [↑](#footnote-ref-15)
17. 10ª Época; TCC; TA; Gaceta del S.J.F. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III; Pág. 2507. [↑](#footnote-ref-16)
18. Artículo 34.- El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.

    El Juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación. [↑](#footnote-ref-17)
19. Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 2 [↑](#footnote-ref-18)
20. [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXV, Octubre de 2013; Tomo 3; Pág. 1627. **I.4o.A. J/2 (10a.).** [↑](#footnote-ref-19)
21. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 309. **1a. CCLXXXIX/2018 (10a.).** [↑](#footnote-ref-20)
22. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 308. **1a. CCLXXXVIII/2018 (10a.** [↑](#footnote-ref-21)
23. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1799. **I.4o.A.447 A.** [↑](#footnote-ref-22)
24. [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 32, Julio de 2016; Tomo III; Pág. 1802. **I.7o.A. J/7 (10a.).** [↑](#footnote-ref-23)
25. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 35, Octubre de 2016; Tomo IV; Pág. 2866. **I.7o.A.1 CS (10a.).** [↑](#footnote-ref-24)
26. [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 50, Enero de 2018; Tomo I; Pág. 532. **2a. III/2018 (10a.)** [↑](#footnote-ref-25)
27. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012; Tomo 3; Pág. 1925. **XI.1o.A.T.4 A (10a.).** [↑](#footnote-ref-26)
28. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 55, Junio de 2018; Tomo IV; Pág. 2973. **XXVII.3o.14 CS (10a.).** [↑](#footnote-ref-27)
29. Décima Época. Núm. de Registro: 2017229. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.3o.14 CS (10a.) Página: 2973. [↑](#footnote-ref-28)
30. Firma México: 13 de junio de 1992. Aprobación Senado: 3 de diciembre de 1992. Publicación Diario Oficial de la Federación. Aprobación: 13 de enero de 1993. Vinculación de México: 11 de marzo de 1993. Ratificación Entrada en vigor internacional: 21 de marzo de 1994. Entrada en vigor para México: 21 de marzo de 1994. Publicación Diario Oficial de la Federación. Promulgación: 7 de mayo de 1993. [↑](#footnote-ref-29)
31. Protocolo de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, firma México: 9 de junio de 1998, aprobación Senado: 29 abr 2000, publicación DOF aprobación: 1° septiembre 2000, vinculación de México: 7 septiembre 2000, Entrada en vigor internacional: 16 feb 2005, Entrada en vigor para México: 16 feb 2005 y Publicación DOF Promulgación: 24 nov 2000. [↑](#footnote-ref-30)
32. Firma México: 22 de abril de 2016. Aprobación Senado: 14 de septiembre de 2016. Publicación Diario Oficial de la Federación. Aprobación: 7 de septiembre de 2016. Vinculación de México: 21 de septiembre de 2016. Ratificación Entrada en vigor internacional: 4 de noviembre de 2016 Entrada en vigor para México: 4 de noviembre de 2016 Publicación Diario Oficial de la Federación Promulgación: 4 de noviembre de 2016. [↑](#footnote-ref-31)
33. Firma México: 16 de septiembre de 1987, aprobación Senado: 29 de diciembre de 1987, publicación DOF Aprobación: 25 de enero de 1988, vinculación de México: 31 de marzo de 1988 Ratificación, entrada en vigor internacional: 1 de enero de 1989, entrada en vigor para México: 1 de enero de 1989 y publicación DOF Promulgación: 12 de febrero de 1990. [↑](#footnote-ref-32)
34. Firma México: 15 de octubre de 2016, aprobación Senado: 26 de abril de 2018, Publicación DOF Aprobación: 22 de junio de 2018, Vinculación de México: 25 de septiembre de 2018 Aceptación, entrada en vigor internacional: 1 de enero de 2019, entrada en vigor para México: 1 de enero de 2019 y publicación DOF Promulgación: 30 de noviembre de 2018. [↑](#footnote-ref-33)
35. Tesis número XXVII.3o.9 CS (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Libro 31, diciembre de 2016, página 1840. [↑](#footnote-ref-34)
36. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Libro 49, Diciembre de 2017; Tomo I; Pág. 411. **1a. CCXLVIII/2017 (10a.).** [↑](#footnote-ref-35)
37. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 309. **1a. CCLXXXIX/2018 (10a.).** [↑](#footnote-ref-36)
38. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 308. **1a. CCXCII/2018 (10a.).** [↑](#footnote-ref-37)
39. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 308. **1a. CCLXXXVIII/2018 (10a.).** [↑](#footnote-ref-38)
40. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 55, Junio de 2018; Tomo IV; Pág. 3093. **XXVII.3o.16 CS (10a.).** [↑](#footnote-ref-39)
41. Opinión Consultiva OC-23/2017 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Colombia sobre medio ambiente y derechos humanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo. 123 [↑](#footnote-ref-40)
42. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 124 [↑](#footnote-ref-41)
43. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 125 [↑](#footnote-ref-42)
44. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 126 [↑](#footnote-ref-43)
45. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr.127 [↑](#footnote-ref-44)
46. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr.128. [↑](#footnote-ref-45)
47. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 129 [↑](#footnote-ref-46)
48. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr.133 y 140 [↑](#footnote-ref-47)
49. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr.137 [↑](#footnote-ref-48)
50. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 140 [↑](#footnote-ref-49)
51. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 141 [↑](#footnote-ref-50)
52. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 144 [↑](#footnote-ref-51)
53. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 143 [↑](#footnote-ref-52)
54. *Cfr.* Opinión Consultiva OC 23/2017, párr. 146 [↑](#footnote-ref-53)
55. Artículo 2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). [↑](#footnote-ref-54)
56. Artículo 4. CMNUCC [↑](#footnote-ref-55)
57. Artículo 2. Acuerdo de París. [↑](#footnote-ref-56)
58. Artículo 2. Ley General de Cambio Climático [↑](#footnote-ref-57)
59. Artículo 7. Ley General de Cambio Climático. [↑](#footnote-ref-58)
60. Artículo 31. Ley General de Cambio Climático. [↑](#footnote-ref-59)
61. http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06\_otras/ENCC.pdf#page=1&zoom=auto,-13,530 [↑](#footnote-ref-60)
62. SEMARNAT-INECC (2012). Adaptación al Cambio Climático en México: visión, elementos y criterios para la toma de decisiones. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático-Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, México, D.F., Pág. 24 y 131 [↑](#footnote-ref-61)
63. [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 63, Febrero de 2019; Tomo I; Pág. 486. **1a./J. 8/2019 (10a.).** [↑](#footnote-ref-62)
64. ¿Cómo afecta el Cambio Climático a la biodiversidad? Recuperado en: (<http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/656/biodiversidad.pdf> [↑](#footnote-ref-63)
65. Impactos sobre los ecosistemas terrestres. Recuperado en: <http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/02_ecosistemas_terrestres_2_tcm7-12418.pdf> [↑](#footnote-ref-64)
66. Efectos del calentamiento global. Recuperado en: <http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-efectos> [↑](#footnote-ref-65)
67. Consecuencias del Cambio Climático en la salud de la población mundial. Recuperado en: <http://cdam.minam.gob.pe/publielectro/cambio%20climatico/saludcambioclimatico.pdf> [↑](#footnote-ref-66)
68. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 55, Junio de 2018; Tomo IV; Pág. 2973. **XXVII.3o.14 CS (10a.).** [↑](#footnote-ref-67)
69. <https://www.energiaadebate.com/downstream/nueva-regla-maritima-cancela-a-pemex-mercado-de-combustoleo/#:~:text=Las%20finanzas%20y%20las%20operaciones,de%20azufre%20mayor%20al%200.5%2> [↑](#footnote-ref-68)
70. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Agosto de 2008; Pág. 799. **I.7o.A. J/41** [↑](#footnote-ref-69)
71. [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero de 2014; Tomo I; Pág. 396. **1a./J. 11/2014 (10a.)** [↑](#footnote-ref-70)
72. [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 59, Octubre de 2018; Tomo I; Pág. 847. **2a./J. 103/2018 (10a.).** [↑](#footnote-ref-71)
73. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero de 2014; Tomo III; Pág. 2241. **IV.2o.A.50 K (10a.)** [↑](#footnote-ref-72)
74. Ídem. [↑](#footnote-ref-73)
75. Greenpace, ¿*Qué es la pobreza energética y por qué la sufrimos*?, de fecha 15 de mayo de 2020, Disponible en el siguiente link <https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8406/que-es-la-pobreza-energetica-y-por-que-la-sufrimos-en-mexico/>. [↑](#footnote-ref-74)
76. García Ochoa, Rigoberto y Boris, Graizbord, *Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional*, [Internet] SciElo, vol.16 no.51,Toluca may./ago.2016, Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212016000200289#:~:text=Los%20resultados%20muestran%20que%2036,presentan%20mayores%20niveles%20de%20privaci%C3%B3n.> [↑](#footnote-ref-75)
77. Ibidem, p. 293. [↑](#footnote-ref-76)
78. Resolución 42/187 que se refiere al Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), publicado en 1987 con el título “Nuestro futuro común”. La resolución fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo segundo período de sesiones sobre asuntos relacionados con un desarrollo sostenido y ecológicamente sano. <https://undocs.org/es/A/42/427>. [↑](#footnote-ref-77)
79. Como ejemplo, podemos citar *la tutela al proyecto de vida*, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido y protegido, como el derecho que “atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”, en el Caso Loayza Tamayo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 149 [↑](#footnote-ref-78)
80. Alexy, Robert, *Teoría de los derechos fundamentales*, trad. y estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido, 2ª ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 52 y 55. [↑](#footnote-ref-79)
81. Bradbook, Adrian J*, ACCES S TO ENERGY SERVICES IN A HUMAN RIGHTS FRAMEWORK*, University of Adelaie Australia, p.12. [↑](#footnote-ref-80)
82. 10ª, [T.A.], Época, Tribunales Colegiados de Circuito, **ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES,** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2018, Tesis: I.3o.C.100 K (10a.). [↑](#footnote-ref-81)
83. 10a Época, [T.A.], Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2018, Tesis: I.3o.C.100 K (10a.). [↑](#footnote-ref-82)
84. Recordemos que los tribunales pueden considerar los pronunciamientos y opiniones de organismos internacionales especializados en derechos humanos como criterios orientadores y directrices que guíen sus decisiones con independencia de la obligatoriedad que revistan, lo que comúnmente se conoce como “soft law”. Véase, por ejemplo. 10 a Época, [T.A.], TCC, **“SOFT LAW”. LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES DESARROLLADOS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES ENCARGADOS DE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON ÚTILES PARA QUE LOS ESTADOS, EN LO INDIVIDUAL, GUÍEN LA PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE VIGILAR, PROMOVER Y GARANTIZAR EL APEGO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS,** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2015, Tesis: XXVII.3o.6 CS. [↑](#footnote-ref-83)
85. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *El derecho a una vivienda adecuada*, (Art. 11, párr. 1): 13/12/91, CESCR Observación general No 4 (General Comments), 6º Período de sesiones (1991), p.2 [↑](#footnote-ref-84)
86. Ídem, p.4. [↑](#footnote-ref-85)
87. Ídem, p. 3. [↑](#footnote-ref-86)
88. 10ª Época [T.A.], TCC, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2016, Tesis: II.1o.18 A (10a.). [↑](#footnote-ref-87)
89. 10ª, [T.A.], Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2017, Tesis: 2a. CII/2017 (10a.). [↑](#footnote-ref-88)
90. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Marco Jurídico de las Energías Renovables en México, p. 13. [↑](#footnote-ref-89)
91. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con cifras a 2015. [↑](#footnote-ref-90)
92. Idem. [↑](#footnote-ref-91)
93. PRODESEN 2019-2033 (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional), Capítulo VI Demanda y consumo 2019-2033, p.32. [↑](#footnote-ref-92)
94. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), p. 14. [↑](#footnote-ref-93)
95. Se consideran energías renovables: el viento, la radiación solar, en todas sus formas, el movimiento de agua, la oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos, Artículo 3, fracción XVI, Ley de Transición Energética. [↑](#footnote-ref-94)
96. Rowntree, 1901: 86, en García Ochoa, Rigoberto y Boris, Graizbord, op. cit., p. 291. [↑](#footnote-ref-95)
97. García Ochoa, Rigoberto,op. cit, p.13. [↑](#footnote-ref-96)
98. Íbidem, p. 14. [↑](#footnote-ref-97)
99. Ídem. [↑](#footnote-ref-98)
100. García Ochoa, Rigoberto y Boris, Graizbord, op. cit., p. 292. [↑](#footnote-ref-99)
101. García Ochoa, Rigoberto, *Pobreza energética en América Latina*, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, p.15. [↑](#footnote-ref-100)
102. Ídem. [↑](#footnote-ref-101)
103. Profesor Investigador del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte, sede Nogales, Sonora (México) en el marco de las Primeras Jornadas de Planificación Económica y Social 2013, organizadas por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). [↑](#footnote-ref-102)
104. Hay que señalar que existen todavía una serie de vacíos conceptuales y metodológicos que requieren ser abordados científicamente. Por ejemplo, hay que realizar esfuerzos para mejorar la elección de bienes económicos y satisfactores, sobre todo aquellos que dependen del clima. En este sentido, habría que mejorar la metodología de clasificación de las zonas climáticas, aplicando para ello encuestas representativas a nivel de conglomerados de acuerdo a las zonas climáticas encontradas. Estas encuestas podrían complementarse con estudios cualitativos tendientes a integrar los bienes económicos que, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales, son considerados como esenciales por parte de la población. Esto sería el siguiente paso para proponer una mejor clasificación de las necesidades absolutas, satisfactores y bienes económicos, García Ochoa, Rigoberto, op. cit, p.17. [↑](#footnote-ref-103)
105. García Ochoa, Rigoberto y Boris, Graizbord, op. cit., p. 293. [↑](#footnote-ref-104)
106. Íbidem, p. 295. [↑](#footnote-ref-105)
107. Ibidem, p. 295 y 296. [↑](#footnote-ref-106)
108. García Ochoa, Rigoberto, op. cit, p.16. [↑](#footnote-ref-107)
109. 10ª Época, [T.A.], Primera Sala, DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2015, Tesis: 1a. CCV/2015 (10a.). [↑](#footnote-ref-108)
110. 9ª Época, [T.A.], Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, Tesis: 1a. XCVII/2007. [↑](#footnote-ref-109)
111. García Ochoa, Rigoberto y Boris, Graizbord, op. cit., p. 299. [↑](#footnote-ref-110)
112. García Ochoa, Rigoberto y Boris, Graizbord, op. cit., p. 297. [↑](#footnote-ref-111)
113. Íbidem, 298. [↑](#footnote-ref-112)
114. Véase página 300 en adelante, García Ochoa, Rigoberto y Boris, Graizbord, op. cit. [↑](#footnote-ref-113)
115. Íbidem 304 y 305. [↑](#footnote-ref-114)
116. Ibidem, p. 396. [↑](#footnote-ref-115)
117. García Ochoa, Rigoberto, op. cit p. 7. [↑](#footnote-ref-116)
118. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Lograr la enseñanza primaria universal, Promover la Igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, Reducir la mortalidad infantil, Mejorar la salud materna, Combatir el VH/SIDA, malaria y otras enfermedades, Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, Fomentar una alianza global para el Desarrollo. [↑](#footnote-ref-117)
119. Objetivos del Desarrollo del Milenio, Disponible en <https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/>. [↑](#footnote-ref-118)
120. *Participación Responsable de la OSC en la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, Manual para la impartición del curso, DECA, Equipo Puebla, A.C., p. 18. [↑](#footnote-ref-119)
121. Ídem. [↑](#footnote-ref-120)
122. Participación Responsable de la OSC en la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, op. cit., p. [↑](#footnote-ref-121)
123. Íbidem, p. 42. [↑](#footnote-ref-122)
124. Ibidem, p.44. [↑](#footnote-ref-123)
125. IRENA (2017), *REthinking Energy 2017: Acelerar la transformación energética mundial*. Agencia Internacional de Energías Renovables, Abu Dhabi, p.11. [↑](#footnote-ref-124)
126. Ibídem, p.12. [↑](#footnote-ref-125)
127. Ídem. [↑](#footnote-ref-126)
128. La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, en inglés) es una [organización intergubernamental](https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_intergubernamental) para la promoción de la [energía renovable](https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable) (ER) en todo el mundo, creada por [Alemania](https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania), [España](https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a) y [Dinamarca](https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca). Su objetivo es proporcionar asesoramiento sobre políticas concretas y facilitar la capacidad y la transferencia de tecnología. IRENA, un proyecto promovido por [EUROSOLAR](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EUROSOLAR&action=edit&redlink=1) desde 1990, se formó el 26 de enero de 2009, por 75 países mediante la firma de la Carta de IRENA. A principios de febrero de 2018, IRENA tiene 154 signatarios y 26 solicitantes de afiliación (incluyendo la [Unión Europea](https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea)). 153 de los cuales y la [Unión Europea](https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea) han ratificado el estatuto.[3](https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_las_Energ%C3%ADas_Renovables#cite_note-3)​ La agencia está plenamente operativa desde el 8 de julio de 2010 y tiene un presupuesto anual inicial de 25 millones dólares estadounidenses en 2011. [↑](#footnote-ref-127)
129. Ídem. [↑](#footnote-ref-128)
130. IRENA (2017), op. cit, p. 3. [↑](#footnote-ref-129)
131. Ídem. [↑](#footnote-ref-130)
132. Ibidem, p.4. [↑](#footnote-ref-131)
133. Ibidem, p.6. [↑](#footnote-ref-132)
134. *Idem*. [↑](#footnote-ref-133)
135. El artículo 1 constitucional señala el deber de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de conformidad con el principio de **progresividad**. [↑](#footnote-ref-134)
136. Ver Tesis Jurisprudencial Tesis: 2a./J. 35/2019 (10a.) de Rubro “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURELA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO”. [↑](#footnote-ref-135)
137. Courtis, C. (2006). La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios en Ni un paso atrás – la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. [↑](#footnote-ref-136)
138. Amparo en Revisión 566/2015. Christian Courtis, Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Buenos Aires, 2006, p 3 – 5. [↑](#footnote-ref-137)
139. Margarita Luna Ramos, “¿Las Personas Morales ¿Tienen derechos humanos?”, citada por González de Cossío, “Competencia”, p. 217. [↑](#footnote-ref-138)
140. González de Cossío, “Competencia”, p. 197-198. [↑](#footnote-ref-139)
141. Como se desprende del criterio emitido por la Segunda Sala de rubro: PRACTICAS MOLOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [↑](#footnote-ref-140)
142. Al respecto, véase J. Witker y A. Varela, Derecho de la competencia económica en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 3-4. [↑](#footnote-ref-141)
143. Visible en: <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html> [↑](#footnote-ref-142)
144. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992, Principio 10 [↑](#footnote-ref-143)
145. 3. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada Parte, considerando sus circunstancias, contará con:  
     c) legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional; [↑](#footnote-ref-144)
146. Disponible en este vínculo: <http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqridFL1F2gCfxEErj8+nyFSA6ivd52blu4SvjCPcT8WP/3A==> [↑](#footnote-ref-145)
147. Es aplicable la Tesis P./J. 4/2019 (10a.) cuyo extracto relevante dispone “el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo” [↑](#footnote-ref-146)
148. Tesis: 2a./J. 5/93 con registro 206395 de rubro “SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO”. [↑](#footnote-ref-147)
149. Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.) con registro 2021263 de rubro “SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA” [↑](#footnote-ref-148)
150. Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) con registro: 2011840 de rubro “INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA.” [↑](#footnote-ref-149)
151. [↑](#footnote-ref-150)
152. [↑](#footnote-ref-151)
153. Tesis: II.1o.A.22 K con registro 178596 de rubro “SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBE OTORGARSE SIN GARANTÍA CUANDO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS LOS RESIENTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO EL TERCERO PERJUDICADO.” [↑](#footnote-ref-152)
154. [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo II; Pág. 1199. **2a./J. 19/2017 (10a.)** [↑](#footnote-ref-153)
155. Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) con registro 2017123 de rubro “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).” [↑](#footnote-ref-154)
156. https://www.dropbox.com/sh/b2u31cww7j2ue2d/AAAUGfofcq\_LYtp59D5ipvosa?dl=0 [↑](#footnote-ref-155)
157. [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013; Tomo 3; Pág. 1830. **XXVII.1o.(VIII Región) J/3 (10a.).** [↑](#footnote-ref-156)
158. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470. **XX.2o. J/24.** [↑](#footnote-ref-157)